

El delicado tablero de Oriente Próximo se ha visto sacudido con la crisis del covid-19 y la caída de los precios en el mercado del petróleo, lo que tendrá consecuencias en Europa como suele ser habitual. El septuagenario conflicto israelo-palestino se ha fragmentado con nuevas fisuras en la región. Por un lado, se ha creado una alianza de nombre profético, el Acuerdo de Abraham, que va de Estados Unidos a Abu Dabi, pasando por Marruecos, Sudán, Egipto, Arabia Saudí e Israel; que apoya al mariscal Haftar en Libia y que tiene la vista puesta en Irak para alejarlo de la órbita de Irán. Una "entente" a la que se ha dado el nombre del profeta para legitimar la agrupación de judíos, cristianos y musulmanes. Por otro lado, tenemos el eje de la "hermandad chiita", que agrupa a Gaza, Qatar, Turquía e Irán; con presencia en Siria, Libia y Yemen, y el apoyo puntual de Rusia.

En medio de esta recomposición de alianzas, se producen una serie de hechos que sacuden a la región con consecuencias en el resto del mundo: Beirut salta por los aires, los refugiados llegan por oleadas a Europa, también militantes integristas de forma clandestina, el presidente turco intenta convertir Estambul en el nuevo centro del Islam mundial, los talibanes toman el poder en Afganistán... Al mismo tiempo que el terrorismo islámico ha vuelto a golpear en Europa en el nombre de un yihadismo sin organización, amparado en redes sociales dispersas del mundo islámico que alientan a seguir la lucha, cuando en la Casa Blanca hay un nuevo inquilino que debe restaurar la confianza de sus aliados tras la caída de Kabul.

En la misma línea emprendida en su libro *Salir del caos*, Gilles Kepel apoya sus reflexiones con mapas y una cronología que ponen en perspectiva la actualidad. Sirven de ayuda para comprenderla y anticiparse a los cambios que sin duda se avecinan, y que tendrán consecuencias en todo el mundo y en Europa en particular. El libro lleva un postfacio a la edición española titulado "De Gaza a Wurzburg pasando por Ceuta".



9788413625386
EL PROFETA Y LA PANDEMIA

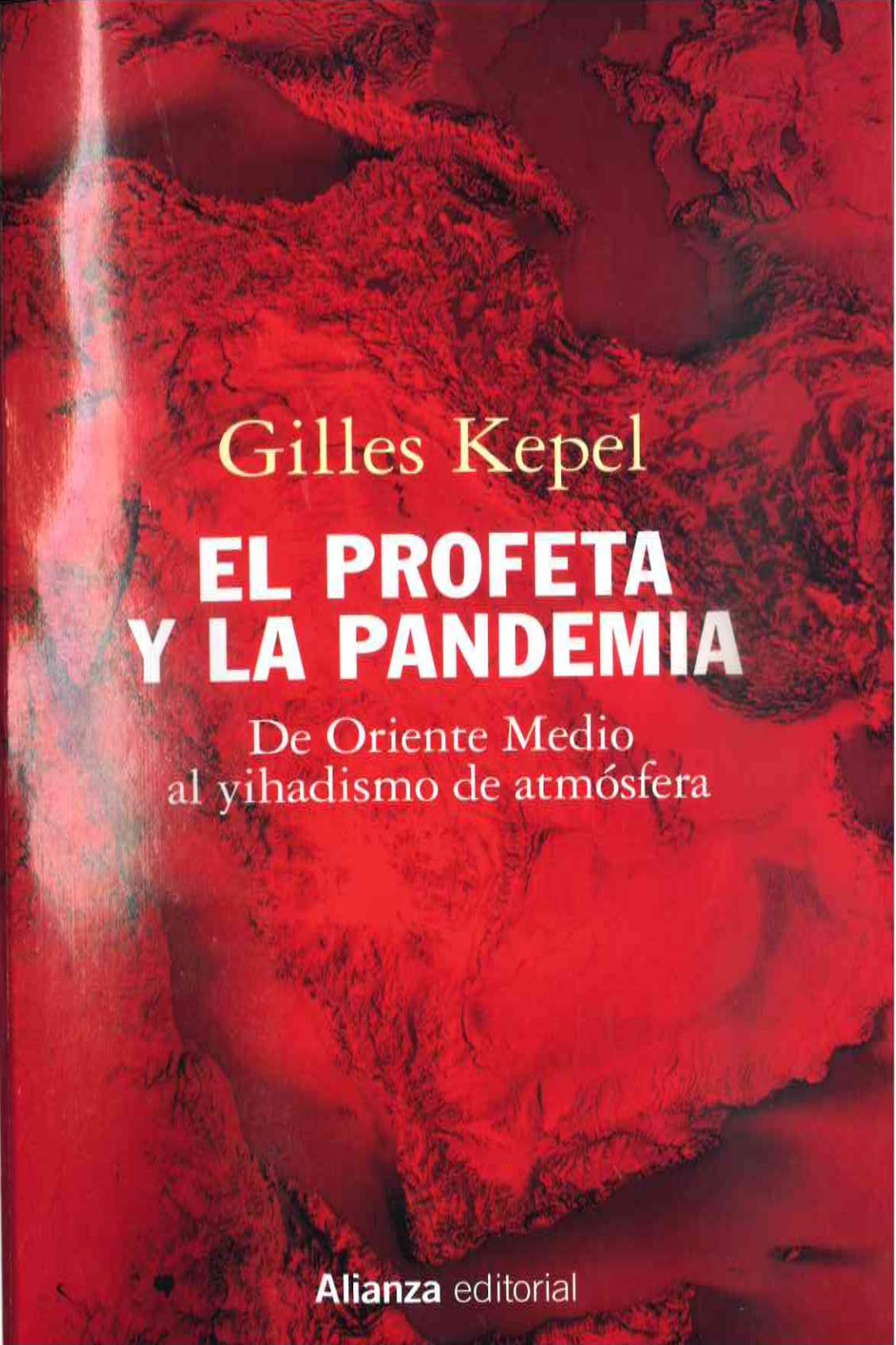


36911296

Alianza editorial

EL PROFETA Y LA PANDEMIA

Gilles Kepel



Gilles Kepel
**EL PROFETA
Y LA PANDEMIA**

De Oriente Medio
al yihadismo de atmósfera

Alianza editorial

EL PROFETA
Y LA PANDEMIA

GILLES KEPEL

EL PROFETA Y LA PANDEMIA

DE ORIENTE MEDIO
AL YIHADISMO DE ATMÓSFERA

Mapas inéditos de Fabrice Balanche

Traducido del francés por
Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños

ALIANZA EDITORIAL

Título original: *Le Prophète et la pandémie. Du Moyen-Orient au jihadisme d'atmosphère*

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaran, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.



© Éditions Gallimard, 2021

Mapas: © Fabrice Balanche, 2021, pour les cartes / adaptation EdiCarto

© de la traducción: Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños, 2021

© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2021

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15; 28027 Madrid

www.alianzaeditorial.es

ISBN: 978-84-1362-538-6

Depósito Legal: M. 25.716-2021

Printed in Spain

SI QUIERE RECIBIR INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE LAS NOVEDADES DE ALIANZA EDITORIAL, ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:

alianzaeditorial@anaya.es

*A la memoria de mi padre,
Milan Kepel
Praga, 8 de enero de 1928
París, 3 de marzo de 2019*

Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes,
Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam.

*Apud J. L. Borges
«Historia del guerrero y la cautiva»,
El Aleph*

ÍNDICE

MAPAS, FOTOGRAFÍA Y CROQUIS	11
EXORDIO	
AÑO 2020: LA PANDEMIA, EL PETRÓLEO Y EL PROFETA	15
La reislamización de Santa Sofía.....	19
El Proceso de Astaná.....	25
La paradoja libia	29
Apocalipsis en Beirut	33
Veinte años: del 11 de septiembre a la caída de Kabul	43
I. LA FRACTURA DEL GOLFO.....	49
Del <i>Gran Juego</i> al <i>Monopoly</i> : eje hermano-chií contra el Acuerdo de Abraham	53
Efectos inducidos y efectos perversos del Acuerdo de Abraham	56
Las potencias globales en torno al <i>Mare Nostrum</i>	63
El gran salto adelante chino	68
La ranciedad de la media luna chií	72
De la energía fósil al hidrógeno verde: la vía angosta de Arabia Saudí.....	82
Yemen: la guerra sin salida	87
Catar: la resiliencia del emirato del gas.....	91

II. EL ORIENTE (MUY) PRÓXIMO.....	95
Populismo islamista y aislamiento espléndido de Erdogan	99
El eurasismo, de Ankara a Moscú	104
Entre islamismo e irredentismo	106
La reactivación de Hamás.....	112
Injerencia de Catar y contradicción de Israel	118
El Estado judío, entre el callejón sin salida palestino y la ancha avenida árabe	122
El sobre peso egipcio	125
El Cairo en el Acuerdo de Abraham.....	131
El control del Nilo	133
III. DE ÁFRICA DEL NORTE A LOS BARRIOS PERIFÉRICOS EUROPEOS	139
Libia, entre el martillo turco y el yunque egipcio	139
El dilema migratorio: entre humanitarismo y terrorismo	148
«La miseria de Francia es un paraíso para nosotros»	151
<i>¡Yetnahau gaa!</i> ('¡que se larguen todos!')	155
Regreso a los <i>Barrios periféricos del islam</i>	164
El yihadismo de atmósfera.....	173

EPÍLOGO

YIHADISMO DE ATMÓSFERA Y SEPARATISMO ISLAMISTA EN EL ESPEJO GEOPOLÍTICO	189
El regreso del yihadismo a Viena.....	192
Temeridad y limitaciones de Erdogan	199
Fracaso de los estudios de árabe e impericia occidental frente al islamismo... ..	203
POSTFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA. DE GAZA A WURZBURGO PASANDO POR CEUTA	207
Los retos de Joe Biden en Oriente Medio y el Mediterráneo	208
El yihadismo de atmósfera: el paradigma de Francia a Alemania	226

APÉNDICES

CRONOLOGÍA DEL AÑO 2020 Y COMIENZOS DE 2021.....	237
AGRADECIMIENTOS	259
ÍNDICE.....	261

MAPAS, FOTOGRAFÍA Y CROQUIS

FOTOGRAFÍA Documentos de migrantes / Alpes Marítimos

MAPA 1	El Acuerdo de Abraham frente al triple acuerdo hermano-chií
MAPA 2	La expansión turca en el Mediterráneo: neootomanismo e islamismo
MAPA 3	Árabes y europeos frente a Erdogan
MAPA 4	Impacto sanitario de la epidemia de covid-19
MAPA 5	Derrumbe del crecimiento económico en la región de África del Norte-Oriente Medio en 2020
MAPA 6	Arabia Saudí y la visión 2030
MAPA 7	Catar resiste al bloqueo
MAPA 8	Irak en disputa
MAPA 9	Eje iraní entre ideología y geopolítica
MAPA 10	Las estrategias rusas en el Levante: proyección militar e hidrocarburos
MAPA 11	Siria dividida y ocupada
MAPA 12	Reducción de la bolsa de Idlib (Siria)
MAPA 13	El Líbano fragmentado
MAPA 14	Israel: la cooperación regional no suprime las amenazas
MAPA 15	El Magreb: un falso dique para Europa
MAPA 16	Las relaciones de fuerza en Libia
MAPA 17	Ofensiva china: las nuevas rutas de la seda
MAPA 18	Atentados y combatientes yihadistas en Europa (2012-2020)
CROQUIS	Croquis otomano del sitio de Viena (1683)

EXORDIO

AÑO 2020:
LA PANDEMIA, EL PETRÓLEO Y EL PROFETA

En 2020, el Mediterráneo y su entorno se convirtieron en la región más explosiva del planeta. La pandemia de covid-19 y luego el desplome de los precios del petróleo precipitaron convulsiones sin precedentes, asestando golpes de muerte al orden geopolítico instaurado un siglo antes por los tratados que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Habían creado una forma de seguridad favorable a Europa, que evolucionó después de 1945 en beneficio de Estados Unidos. La 6.ª Flota estadounidense con base en Nápoles en el marco de la OTAN garantizaba estabilidad, a pesar de los éxitos alcanzados temporalmente por la Unión Soviética en algunos países árabes. Y Washington supo cooptar a las petromonarquías de la península Arábiga tras la vertiginosa subida de precios que siguió a la guerra de octubre de 1973, reciclando sus beneficios en la economía del «mundo libre» de entonces y esforzándose por combinar la ética islámica y el espíritu del capitalismo.

Esa fecha, sin embargo, que convertirá al islam político en una cuestión clave en Oriente Medio y el África del Norte, desencadena un proceso caótico subyacente en el que la hegemonía occidental sobre la región va

convirtiéndose gradualmente en el objetivo. La proclamación de la República Islámica en Irán por Jomeini en 1979 agrega a esa doctrina el tercermundismo y el antiimperialismo de antaño y abre una brecha beligerante entre chiismo y sunismo. La yihad en Afganistán contra la invasión del país por el Ejército Rojo, que se inicia inmediatamente después y goza del apoyo de la CIA, llevará a la caída de la Unión Soviética diez años más tarde, así como también la fetua del ayatolá Jomeini del 14 de febrero de 1989 contra el novelista Salman Rushdie por haber «blasfemado contra el Profeta», cuya sombra proyectada llegará universalmente hasta el otoño de 2020, con los asesinatos en Francia relacionados con las caricaturas de *Charlie Hebdo*. La radicalización yihadista suní, por su parte, se volverá contra su padrino americano: Al Qaeda y después el Dáesh constituyen una extensión de todo ello. Esas dos organizaciones llevarán el terrorismo en nombre de Alá a Nueva York y Washington primero —el 11 de septiembre de 2001— y luego de París a Niza y de Berlín a Londres, durante la década siguiente, hasta el surgimiento en 2020 de una nueva fase, el «yihadismo de atmósfera».

Los levantamientos con aspiración democrática en varios países árabes en la primavera de 2011, que habían desencadenado tanto entusiasmo, terminarán siendo en su mayor parte, vistos con diez años de perspectiva, un episodio catastrófico, especialmente para las poblaciones de Siria, de Yemen y de Libia, que vienen padeciendo desde entonces guerras civiles devastadoras, en las que la injerencia de las potencias regionales e internacionales prolonga indefinidamente el conflicto, que se ha convertido en rehén de las diferentes estrategias. En ese contexto, se abre una ventana de desestabilización excepcional con la desvinculación estadounidense de la región, iniciada durante la presidencia de Barack Obama y reforzada por Donald Trump. Estados Unidos está escaldado por los mediocres resultados de sus intervenciones armadas en Afganistán desde 2001 y en Irak a partir de 2003 —dado el coste humano, electoral y financiero de esas intervenciones— y tanto menos motivado por esos sacrificios cuanto que, desde el otoño de 2018 hasta la primavera de 2020, ha vuelto a ser el primer productor mundial de petróleo.

Esa actitud de no intervencionismo por parte de Washington está creando un vacío que la Unión Europea, donde ocho de los veintisiete Estados son, sin embargo, ribereños del Mediterráneo, está demostrando

ser incapaz de llenar, por carecer de una estrategia de defensa común. Más aún, su aspiración conceptual de promover la democracia se encuentra en situación comprometida con respecto a cuestiones inmediatas de seguridad para proteger sus fronteras. La impericia resultante y las rencillas entre sus miembros las aprovechan ciertos regímenes autoritarios [MAPA 3], que amenazan de chantaje con los flujos migratorios ilegales, el suministro de gas, la manipulación electoral de las comunidades musulmanas europeas e incluso con la propagación del terrorismo yihadista en suelo comunitario. En ese inestable contexto geopolítico es cuando irrumpe el año 2020. En Oriente Medio, al igual que en el resto del mundo, 2020 vive las convulsiones sin precedentes provocadas por la covid-19, que están llegando al paroxismo por el desplome simultáneo de los precios del petróleo.

En el primer semestre del año, la pandemia de Wuhan perdona hasta cierto punto a los países costeros del sur y del este, cuya pirámide de edad es de amplia base, mientras que multiplica el número de fallecimientos entre las poblaciones de más edad de Europa, empezando por dos grandes ribereños del Mediterráneo: Italia, puerta de entrada de China a Europa a través del Véneto y Lombardía, terminal de las «nuevas rutas de la seda» [MAPA 17], y luego España, tras un partido de fútbol entre el Valencia y el FC Atalanta de Bérgamo, el 19 de febrero. En Oriente Medio, Irán destaca por su temprana incidencia del virus debida a sus estrechas relaciones con China (cuyos técnicos y trabajadores son numerosos en el país) para eludir las sanciones estadounidenses. La propagación del virus no se deberá al fútbol, sino al islam: la teocracia en el poder se resiste a regular las peregrinaciones a las tumbas de los santos del chiismo en los que basa su legitimidad, a pesar de que las fervientes multitudes que tocan, lamen y besan los mausoleos a la espera de la baraka divina constituyen un factor de difusión fulgurante. Fuera de Irán, en el mundo suní, la menor presencia china y la profilaxis religiosa puesta en marcha rápidamente a la vista del contraejemplo iraní, la prohibición de rezar congregados, la reducción del *hach* en La Meca y Medina, a finales de julio, a un número simbólico de participantes, combinadas con la juventud de la población, mantienen en un primer momento una incidencia bastante baja. A partir del verano, sin embargo, la saturación de las estructuras de salud, el agotamiento del personal sanitario y la muerte de muchos de ellos, junto con la promiscuidad patógena en los barrios populares superpoblados, obligan a tomar medidas de confi-

namiento que agravan la crisis económica y la precariedad social, mientras los contagios aumentan exponencialmente [MAPA 4].

Cuando aún no se conocen del todo las repercusiones del virus, la «OPEP +» se reúne el 6 de marzo en Viena. El cártel añadió el signo más a sus siglas al incorporar a Rusia, para que Riad y Moscú, segundo y tercer productores mundiales, pudieran combatir juntos contra la hegemonía recuperada por Estados Unidos en el mercado, con el 15 % de los cien millones de barriles que se producen cada día en el mundo, frente al 12 o el 13 % de los países de la OPEP. Es sobre todo Estados Unidos quien determina los precios y, por consiguiente, ha atenuado el «arma» del petróleo, aunque todos los exportadores se benefician de un precio bastante alto (el crudo Brent se vende a 63,65 dólares en enero de 2020), porque de ello depende la rentabilidad del «aceite de esquisto», que constituye la mayor parte de la producción al otro lado del Atlántico. En Viena, el representante ruso anuncia la decisión del Kremlin de aumentar significativamente la producción de su país con el fin de situar el barril por debajo de la tasa de rentabilidad del esquisto y arruinar así a las empresas que perforan desde Texas hasta Alaska, para luego expulsarlas del mercado y reducir seguidamente la extracción, una vez que los estadounidenses estén fuera de circulación. Arabia Saudí se ve obligada a seguir el ejemplo para compensar la caída del precio por culpa de una explotación demasiado abundante. De modo que el precio cae un 50 % en marzo, bajando a 32,03 dólares, y luego, en abril, la espiral bajista se acelera (18,38 dólares) con la paralización del comercio mundial, del transporte y de la industria provocada por las medidas de precaución tomadas contra la pandemia. Sin prejuzgar los efectos políticos a medio plazo, las consecuencias económicas y financieras a corto plazo son catastróficas para una región donde las rentas de los hidrocarburos proporcionaban gran parte de los ingresos y le concedían su espacio singular en el sistema mundial durante el medio siglo transcurrido desde la guerra de octubre de 1973. El barril cae a una tasa negativa sin precedentes, de -38,94 dólares el 20 de abril de 2020, dado que la capacidad de almacenamiento mundial está saturada. Incluso si los precios subieron y se estabilizaron en junio en torno a los 40 dólares, a la espera de una recuperación condicionada por una segunda ola de contagios y nuevas medidas de confinamiento en otoño, el FMI estima en julio que la pérdida de ingresos para los países exportadores de Oriente

Medio y África del Norte en 2020 podría llegar a doscientos setenta mil millones de dólares. Pero a 40 dólares, el petróleo de esquisto norteamericano ya no es rentable, y Estados Unidos volverá a ser importador a finales de año, perdiendo así consiguientemente su posición de liderazgo mundial. Desde ese punto de vista, Putin tuvo éxito en su operación, pero con un coste económico y social que está causando un impacto considerable en Oriente Medio y África del Norte.

Así pues, la combinación de la pandemia y la caída de los hidrocarburos afecta específicamente a la región como un cataclismo, desestabilizándola en profundidad y endeudando el futuro. Amenaza a unas sociedades civiles a las que la caída en picado de los beneficios de la renta del petróleo y del gas fragiliza, tanto más cuanto que esta última había retrasado el desarrollo de un empresariado productivo; debilita aún más algunos Estados frágiles y crea nichos de mercado para otros, que recurren a la provocación militar y a la escalada ideológica y, esforzándose en arramblar con todo aprovechando el desconcierto, agitan toda la zona mediterránea, más allá de Oriente Medio únicamente [MAPA 5].

La Turquía de Erdogan es una ilustración emblemática del proceso desestabilizador, sacando partido en semejante contexto, en un intento de reconquistar una hegemonía regional, reminiscencia contemporánea del califato otomano. Empezaremos ofreciendo una visión general del modo como está pactando a tal efecto con una potencia otrora global, Rusia, que —gracias a su decisiva intervención en el conflicto sirio— también ha recuperado influencia en los asuntos mundiales, y con un Estado casi paria, la República Islámica de Irán. Esos tres regímenes autoritarios comparten un deseo de revancha frente al Occidente y a la Europa «imperialistas» de ayer y de hoy, deseo que se ve alimentado aún más por un rechazo visceral del modelo democrático liberal, cuyos valores encarnan [MAPA 2].

La reislamización de Santa Sofía

El 24 de julio de 2020, Recep Tayyip Erdogan abre solemnemente la oración del viernes en la antigua basílica bizantina de Santa Sofía, que acaba de devolver al culto musulmán. Ochenta y cinco años antes, Atatürk había

convertido en museo la mezquita instaurada entre sus muros durante la conquista turca de Constantinopla, en 1453, desacralizando el lugar para «ofrecerlo a la humanidad». El gesto, de elevado simbolismo, con el que el presidente Erdogan, imán de formación, cumple su sueño de juventud cuando estudiaba en un instituto de predicadores, enterrando el laicismo kemalista y exhumando el califato otomano, tiene lugar el día del 97.º aniversario del Tratado de Lausana. Este había trazado las fronteras de la joven república después de que los ejércitos victoriosos de Gazi Kemal Atatürk derrotaran a las potencias europeas que se repartieron los despojos del derrotado Imperio Islámico, al final de la Primera Guerra Mundial. Aquel movimiento militar había permitido anular el Tratado leonino de Sevres, en 1920, que fragmentaba Anatolia según un plan «imperialista», y cuyo centenario (que pasará inadvertido) cae dos semanas después, el 10 de agosto de ese mismo verano de 2020.

Los soldados de Erdogan se han asentado ya en Libia y ejercen su tutela sobre Tripolitana. Su armada realiza prospecciones de gas submarino en aguas griegas y chipriotas; sus fuerzas especiales y supletorias ocupan parte del norte de Siria y realizan incursiones en el Kurdistán iraquí. Su sistema de defensa antiaérea se equipó con misiles rusos S-400, mientras que el país sigue siendo miembro de la OTAN. Y controla las dos principales rutas de migración ilegal desde Asia y África hacia Europa: por el mar Egeo y los Balcanes, por un lado, y por el litoral libio, por otro [MAPA 2]. Tal alianza de la espada y el turbante le permite expresar sus propias pretensiones neoimperiales del siglo XXI en Oriente Medio y el Mediterráneo. Aprovecha la desvinculación del lejano Estados Unidos de Donald Trump, lastrado por su calamitosa gestión del covid-19 y debilitado a medida que se acerca el plazo presidencial del mes de noviembre, y explota la pusilanimidad de la Unión Europea y las contradicciones entre sus miembros. Comparte con la Rusia de Vladímir Putin (y, en cierta medida, con el Irán de Jamenei) una estrategia de desalojo de los occidentales de la región, superando para ello los conflictos tácticos que, hoy como ayer, oponen al sucesor del zar moscovita, al del sultán estambulí y al heredero enturbantado del sah de Persia.

Pero la reasignación al islam de la «Mezquita de Ayasofya» (*Haghia Sophia* en griego, es decir, 'Santa Sabiduría') es también un golpe de fuerza emblemático para ejercer la hegemonía del islamismo turco sobre el

sunismo, que reagrupa alrededor del 85 % de los mil quinientos millones de musulmanes del mundo. El presidente tiene la ambición de reconvertir Estambul en la capital mundial de la Comunidad de Creyentes, o *Umma* —un recurso que Atatürk había abandonado al abolir el califato en 1924, porque estaba convencido de que la supervivencia de su nación recreada requeriría una secularización autoritaria, rompiendo con la superstición retrógrada mediante la adopción del alfabeto latino y la sustitución de los conceptos islámicos árabes que estructuraban el pensamiento turco con un vocabulario calcado fonéticamente del francés, lengua universal de la modernidad a la sazón: «laico» [laïque] se convertía en *laik*, «autobús» en *otobüs* e «instituto» [lycée] en *lise*. Visto retrospectivamente, semejante identificación original de la odiada laicidad con la cultura francesa en el medio islamista local no deja de tener incidencia en el anatema que Erdogan lanza obsesivamente contra su homólogo Emmanuel Macron durante el año 2020...

En ese contexto, la demostración de fuerza de Santa Sofía, al tiempo que arremete contra la laicidad, pretende, con el mismo golpe de yatagán, erradicar el dominio saudí sobre el islam suní, que la extraordinaria riqueza de la más poderosa de las dinastías del oro negro había garantizado. Esta última ya se había puesto en entredicho porque, desde antes de la excepcional tendencia a la baja de 2020, la renta petrolera ya no era capaz de garantizar el desarrollo frente a la explosión de la demografía regional. Tanto los propios dirigentes de Riad como los de Abu Dabi elaboraban estrategias para la diversificación a corto plazo de sus economías. También habían anticipado que la humanidad buscaría una menor dependencia de la energía fósil, cuya combustión provoca el calentamiento global que amenaza la sostenibilidad de la vida en la tierra. La emergencia medioambiental, tal y como estipula el acuerdo climático de París de diciembre de 2015, al que Joe Biden anuncia que volverá «el primer día de su mandato», es un proceso que saben inevitable y para el que las petromonarquías deben prepararse so pena de desaparecer.

Para ello, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, desde que se hizo con el control, en junio de 2017, ha reducido considerablemente la ubicuidad del salafismo conservador en la «Tierra de los dos Santos Lugares» (La Meca y Medina), favoreciendo a cambio cierta modernidad culturalmente occidental que tanto gusta a la juventud de la península Arábiga. El

objetivo declarado era sustituir a la clase ociosa de los rentistas del petróleo, legitimados por esa doctrina religiosa pero sepultureros programados del reino, por una generación dinámica de empresarios debidamente estimulados y con miras hacia el futuro [MAPA 6]. Con ello, se atenuó el dominio global del wahabismo saudí sobre el sunismo. Pero, al renunciar, aunque fuera parcialmente, a un recurso tan simbólico, la monarquía de Riad abrió a su vez un vacío que su principal rival en el islam político, la nebulosa transnacional de los Hermanos Musulmanes, se apresuró a llenar. Derrotados en su bastión egipcio desde el verano de 2013 por el mariscal Sissi, después de que uno de los suyos, Mohamed Morsi, ganara las elecciones presidenciales en julio de 2012, y refugiados en Turquía, son numerosos los que se benefician del apoyo decidido de Erdogan —seguidor de esa ideología— y de la generosidad del emirato gasista de Catar, que es el mejor enemigo de la monarquía saudí.

En semejante contexto, la pandemia obliga a reducir en julio de 2020 el *hach* —la gran peregrinación anual a La Meca, que en años anteriores había llegado a congregarse hasta a dos millones y medio de participantes— a su más mínima expresión: unos pocos miles de residentes del reino, debidamente separados unos de otros por la «distancia física» sanitaria. En cuanto a la celebración del *Aid-el-Kebir* —manifestación paroxística de la piedad islámica colectiva a escala planetaria—, tiene lugar el viernes 31 de julio, aunque en la mayoría de los casos en los domicilios, para evitar el contagio. Mientras Riad da prioridad a la profilaxis frente al proselitismo —aunque proporciona ese año pocas imágenes y representaciones de La Meca exaltando el poder de la religión de Mahoma, ya que muestra la explanada de la Kaaba prácticamente desierta, cuando suele estar abarrotada—, los clichés triunfalistas de Erdogan con el gorro de oración realizando sus devociones en ese mismo momento, en la recién recuperada mezquita de Ayasofya, difunden un Gran Relato por demás movilizador. Representan al presidente turco como el nuevo sultán Mehmet II el Conquistador. Además, el imán que dirigía la oración en el antiguo museo se había provisto en el púlpito, bajo los mosaicos bizantinos restaurados, ahora ocultos a la piadosa mirada de los fieles por velos y colgaduras, de un yatagán otomano, a imitación de lo que hizo el sultán cuando la toma de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453. Mensaje: lo que había sido subyugado por la cimitarra de la yihad nunca se devolvería, salvo si fuera

derrotado por un sable enemigo —según el adagio turco *kiliç hakki* ('el derecho de la espada')—.

El golpe de efecto pretendía alterar el equilibrio en el seno del islam mundial. Erdogan se aseguró rápidamente el apoyo entusiasta de Teherán: «Felicitando al pueblo turco por este importante éxito islámico», Ali Akbar Velayati, asesor principal del líder supremo Jamenei y antiguo ministro de Asuntos Exteriores iraní, predijo que «Ayasofya seguiría siendo una mezquita hasta el Apocalipsis». La teocracia de los ayatolás, en conflicto vital con Riad (además de con Washington), da así su apoyo a Ankara, enemigo suní de su propio enemigo suní, y ve a Turquía y a Catar, adalides del islam político de los Hermanos Musulmanes (de los que se nutrieron los dirigentes chiíes iraníes), como valiosos aliados por detrás contra Arabia Saudí —lo que dará lugar a un «eje de la Hermandad chií», una de las principales alianzas que marcan el año 2020 [MAPA 1]—. Además de tratar de ocultar mediante la invocación el antagonismo religioso común irano-turco en Siria (los iraníes habían apoyado militarmente el régimen de Ásad; los sirios, la rebelión), la República Islámica resulta terriblemente afectada por las sanciones económicas de Estados Unidos desde que el presidente Trump se retiró, en mayo de 2018, del PAIC (Plan de Acción Integral Conjunto) —JCPOA por su sigla en inglés: Joint Comprehensive Plan of Action—, acuerdo internacional firmado en Viena el 14 de julio de 2015 y que permitía que el país comerciara a cambio de renunciar al enriquecimiento del uranio para construir armamento nuclear.

El 3 de enero, recién comenzado el año 2020, se perpetró en Oriente Medio, con un dron, el asesinato del general Qasem Soleimani, estratega de la expansión regional persa durante los dos últimos decenios [MAPAS 8 y 9]. Fue abatido a la salida del aeropuerto de Bagdad, en represalia por un ataque con misiles atribuido a los Pasdaran contra una base del Ejército estadounidense en Kirkuk, la semana anterior, donde había muerto un ciudadano norteamericano. Más aún, se considera que es el autor intelectual de los lanzamientos de misiles que el 14 de septiembre de 2019 devastaron las refinerías saudíes de Abqaiq y Khurais, reduciendo durante unos días a la mitad las exportaciones de crudo del reino. El general acababa de aterrizar a toda prisa para supervisar la represión de las multitudes chiíes que paralizaban las principales ciudades de Irak pidiendo la caída de un régimen servil a Teherán, un fenómeno sin precedentes que el sátrapa

quería ahogar en sangre. La República Islámica, ayudada por grupos paramilitares locales afines —cuyo principal líder, que había recibido a Soleimani a pie de pista, fue «liquidado» al mismo tiempo—, estaba de hecho saqueando los ingresos petroleros de su vecino y vasallo con el fin de compensar el efecto deletéreo de las sanciones económicas que le impuso Washington. Al hacerlo, hundía Mesopotamia en la miseria: el 27 de noviembre de 2019, los manifestantes habían incendiado el consulado iraní en la ciudad santa de Náyaf, el «Vaticano» del chiismo, a los gritos inauditos de «¡Fuera Irán!». El resultado fue que Teherán tuvo que aceptar a regañadientes el nombramiento, el 7 de mayo siguiente, de un primer ministro con fama de «cercano a Estados Unidos», Mustafa al-Kadhimi.

A esas vicisitudes político-militares se une que Irán es el Estado de Oriente Medio más asolado por la pandemia [MAPA 4], cuyo primer foco infeccioso fue la ciudad santa de Qom, desde febrero de 2020. En agosto, se calcula que dieciocho millones de personas (casi el 20 % de la población) ya se habían contagiado: el número de muertos, establecido oficialmente en dieciocho mil, supera en realidad los cuarenta mil —cifra cercana a la de los grandes Estados europeos de poblaciones comparables, pero significativamente mayores—, mientras los sanitarios caen a centenares, víctimas del virus, y se ven amenazados con castigos si revelan datos no oficiales sobre el alcance del contagio.

En lo que a Turquía se refiere, la pandemia lleva al paroxismo las contradicciones que el Gobierno nacional-islamista intenta superar mediante una escalada militar-religiosa. La relajación en el distanciamiento físico con ocasión de las oraciones masivas organizadas en todas partes durante la «reconversión» de Santa Sofía en mezquita hizo que los contagios volvieran a dispararse, mientras que la lira (TL) se desplomaba frente al dólar y aún más frente al euro, moneda con la que se formulan las principales transacciones, y la tasa de desempleo alcanzaba oficialmente el 25 % ya en abril de 2020 —más del 50 % según la principal organización sindical—. Bruselas disuadió a los turistas de la Unión Europea de ir de vacaciones a Turquía durante casi todo el verano, por motivos sanitarios, precipitando el colapso del sector, principal fuente de divisas del país. La «Generación Z», por su parte, se niega a aceptar el enfoque conservador y santurrón en un país donde el número de periodistas y académicos encarcelados sigue siendo muy elevado desde el fallido golpe de Estado de julio

de 2016, atribuido al antiguo socio del presidente, el predicador Fethullah Gülen, donde la práctica de la tortura en las cárceles ha vuelto a ser habitual y las redes sociales están bajo estrecha vigilancia desde 2020. Y muestra, tanto a través de los sondeos de opinión como de la emigración de la juventud culta, su desconfianza en la dirección de un poder que lleva dieciocho años gobernando y que le parece que está empeñado en una huida hacia delante en forma de vuelta al pasado —que el caso de Ayasofya lleva a la cúspide—.

El Proceso de Astaná

El asunto en cuestión es un indicador simbólico de las nuevas relaciones de poder regionales que están tomando forma durante este año de inflexión, al emanciparse de los equilibrios del siglo ya pasado. El «Proceso de Astaná» es el precursor por excelencia de esas nuevas relaciones [MAPA 10]. La denominación se refiere a la alianza regional creada entre Rusia, Turquía e Irán (como asociado menor) en los acuerdos firmados en la capital kazaja el 4 de mayo de 2017. El instrumento, inédito y paradójico en las relaciones internacionales, tenía por objetivo la aplicación de la desescalada de la guerra civil siria sobre el terreno a través de «zonas de conflicto» (según el término inglés) donde los rebeldes que luchan contra Bashar al-Ásad encontrarían refugio garantizado por los tres firmantes, a medida que fueran reduciendo sus focos insurreccionales las tropas lealistas, apoyadas por la aviación rusa y las fuerzas supletorias chiíes dirigidas por Qasem Soleimani. La región de Idlib, en el noroeste del país, a lo largo de la frontera sirio-turca, sigue siendo en 2020 el punto de cristalización por excelencia. Además de su lógica propiamente militar, el Proceso de Astaná simboliza la conjunción de tres potencias —una global, Rusia; las otras dos, regionales— que, más allá de sus diferencias tácticas, tienen el objetivo común de aprovechar la desvinculación de Donald Trump de Oriente Medio para marginar a los Estados democráticos occidentales: en primer lugar a Europa, aunque sea fronteriza y colindante.

La formación de Astaná, concebida originalmente para paliar la impotencia de la ONU en Siria, se convirtió en un modelo operativo, espectacularmente duplicado en 2020 en Libia. Turcos y rusos comparten un terri-

torio en el que mueven, como peones en un tablero de ajedrez, tropas auxiliares mercenarias que se enfrentan según compromisos calibrados. Se trata en gran medida de combatientes reclutados en uno y otro de los bandos enfrentados en la guerra civil siria. En el lado turco, son rebeldes que se evacúan de la «zona de desconflicto» de Idlib y que luego se transportan desde Turquía a Misrata; en el lado ruso, son milicianos pro-Ásad que se desmovilizan y se transfieren a Bengasi. Engranar un Estado petrolero muy cercano al mercado europeo, que Italia y Francia habían convertido en el campo cerrado de sus rivalidades tras la caída de Gadafi en 2011.

En ese embrollo mediterráneo, Vladímir Putin desempeña el papel de protagonista. El consumado judoka ha reconquistado metódicamente un lugar para Rusia en el tatami mundial, utilizando el conflicto sirio para salvar *in extremis* a su aliado Bashar al-Ásad; Occidente, por su parte, no tuvo más remedio que concentrar sus fuerzas militares en la eliminación del Dáesh del territorio de su «Estado Islámico» —a caballo entre Siria e Irak, bajo el liderazgo del «Califa» Abu Bakr al-Bagdadi—, desde el que se gestaban los atentados que asolaban Europa. El amo del Kremlin convierte así Oriente Medio en una zona de acción privilegiada para consolidar su estatus internacional, desplegando una estrategia contraria a la de Estados Unidos y la Unión Europea, y una tela de araña tejida con acuerdos en todas direcciones. Además de la alianza con Irán, bestia negra de Washington, con la que dispone de una capacidad excepcional tanto de incitación como de coerción, ha establecido relaciones especiales con la mayoría de los socios tradicionales de Occidente. Empezando por Israel, donde la diáspora rusa es extremadamente influyente: el Estado hebreo no votó las sanciones contra la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014, y Benyamin Netanyahu es el anfitrión recurrente del Kremlin. Arabia Saudí, por su parte, se ha convertido en su socio por excelencia para codirigir la «OPEP +», cártel que, a partir de 2016, reunirá a veinticuatro productores que controlan el 55 % del suministro mundial, con el fin de contrarrestar la producción de petróleo de esquisto en el otro lado del Atlántico. Pero Moscú mantiene asimismo relaciones de complementariedad con Doha (que también es enemigo jurado de Riad), porque las dos capitales ejercen un duopolio en otro tiempo fructífero en las exportaciones mundiales de gas que se ve amenazado por la inundación del mercado con gas

estadounidense a precio de saldo, un subproducto del petróleo de esquisto. Tal planteamiento, que sitúa al Kremlin en posición de árbitro entre adversarios regionales, vale también para las relaciones con turcos y kurdos: en 2020 los soldados rusos participan en patrullas conjuntas con el Ejército de Ankara en la frontera con la Rojava del noreste de Siria —muchos dirigentes kurdos de la vieja generación se formaron en la Unión Soviética, en la escuela del KGB, de la que proviene el propio Putin—. Donald Trump «abandona a su suerte» a los kurdos sirios, en octubre de 2019, a pesar de que habían combatido al Dáesh sobre el terreno con muchas bajas, y de haber reconquistado la efímera «capital del Califato Islámico» Raqa, en octubre de 2017: retira las fuerzas especiales estadounidenses y los deja a merced de las tropas de Erdogan; Moscú es quien les proporciona entonces seguridad para evitar su aniquilación.

Un ejército poco oneroso para los estándares occidentales, apoyado por fuerzas supletorias de la infantería iraní y chií, cuya columna vertebral era el Hezbolá libanés, le permitió al Kremlin en 2020 maximizar políticamente sus compromisos militares, respaldado por una hábil diplomacia formada por excelentes conocedores de la región —donde la pericia occidental, y especialmente la francesa, habían fracasado por la falta de inversión en la universidad para formar arabistas—. Tanto para Turquía como para Israel o Arabia, el acercamiento a Moscú, aunque no alcance la intensidad de la *Special Relationship* con Washington, supone un medio de presión sobre Estados Unidos. Así se observó tras el asesinato del periodista crítico y antiguo confidente de la dinastía Yamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, el 2 de octubre de 2018, cuando algunos medios de comunicación del reino reaccionaron a las virulentas acusaciones procedentes del otro lado del Atlántico proponiendo, al menos retóricamente, sustituir la alianza estadounidense por una unión rusa. Y mientras Erdogan vituperaba al rival saudí por su barbarie, utilizando por una vez, cosa rara, el registro de los derechos humanos, ese importante miembro de la OTAN que es Turquía había adquirido a Rusia baterías de misiles antiaéreos S-400, a riesgo de poner en peligro toda la infraestructura militar de la organización de defensa occidental —que Emmanuel Macron había diagnosticado de «muerte cerebral» en una entrevista concedida al semanario británico *The Economist* en noviembre de 2019—.

Putin y Erdogan han sabido articular magistralmente cuestiones estratégicas a medio plazo con concesiones o conflictos tácticos. A ese resurgimiento contemporáneo de la larga historia de las relaciones entre el zar y el sultán ha venido a añadirse la atracción mutua entre fuertes líderes contemporáneos, que en un sistema internacional desregulado da prioridad a los acuerdos personales o incluso familiares por encima de los instrumentos tradicionales de la diplomacia. Donald Trump también entró en esa brecha, y no exclusivamente en Oriente Medio, como demostró su *pas de deux* con el dirigente norcoreano Kim Jong-un. No hay pruebas de que el errático gobernante de la primera potencia mundial se hubiera impuesto a los avezados autócratas: algunos de ellos parecen haberlo atrapado en sus redes. En lo que se refiere a la mezcla de los asuntos de Estado con las relaciones empresariales entre los presidentes de Estados Unidos y Turquía, gestionadas por sus respectivos yernos, el asesor especial Jared Kushner y el ministro de Finanzas Berat Albayrak, las documentó desde dentro y sin piedad el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton en 2018-2019, después de que lo cesaran, en su vengativo libro publicado en junio de 2020, *The Room Where It Happened*¹. Hasta que los historiadores tengan acceso a los archivos, resulta cuando menos notable que la desregulación internacional, encarnada por la retirada de Washington, esté siendo utilizada en 2020 en Oriente Medio por los opositores autócráticos de Europa y el Occidente democrático. En septiembre de 2020, Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York y antiguo diplomático estadounidense de alto rango, cercano a los presidentes republicanos, publicó un artículo titulado «Present at the Disruption» ('Presente en la disrupción') en la revista *Foreign Affairs*. Considera el autor que Donald Trump ha provocado una disrupción profunda de la política exterior de Estados Unidos, como ningún otro presidente antes, y que, en particular en Oriente Medio, ha «socavado los objetivos de Estados Unidos y aumentado la probabilidad de desestabilización» en la región.

¹ *La habitación donde sucedió*, trad. de Alejandra Devoto, Espasa libros, Madrid, 2020.

La paradoja libia

En el año 2020 la guerra civil libia también vive una profunda transformación de la situación [MAPA 16]. Después de muchas vicisitudes tras la caída y luego la muerte del exdictador Gadafi, el 20 de octubre de 2011, en circunstancias mal comprendidas, elecciones no concluyentes, conflictos entre tribus articulados alrededor del control de los yacimientos petrolíferos, de los oleoductos y de los puertos, después de una emergencia particularmente mortífera del Dáesh en 2015, la situación había cristalizado en 2019 en torno al enfrentamiento de dos bandos con sede respectivamente en Tripolitana y en Cirenaica: en Trípoli, el GAN (Gobierno de Acuerdo Nacional) dirigido por Favez el-Sarraj y reconocido por la ONU, apoyado internamente por los Hermanos Musulmanes locales y externamente por los dos Estados patrocinadores de la Hermandad, Turquía y Catar; en Bengasi, el Ejército Nacional Libio dirigido por el mariscal Haftar, antiguo general de Gadafi exiliado en Estados Unidos, enemigo jurado de los Hermanos, y apoyado en el extranjero por la alianza de los Estados suníes, también hostiles a los Hermanos, por Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudí, así como por Rusia. La mayoría de los campos de hidrocarburos se encuentran en el este, en Cirenaica, mientras que los puertos de embarque de los emigrantes africanos ilegales hacia Italia y Europa están en el oeste, cerca de la frontera con Túnez. Italia y Francia, a través de sus respectivas compañías petroleras nacionales, ENI y Total, se inclinaban por Trípoli y Bengasi respectivamente. En abril del año 2019 se vio cómo las tropas del mariscal Haftar pasaban a la ofensiva y sitiaban Trípoli, cuya caída se daba como probable.

Sin embargo, el 27 de noviembre de 2019, Sarraj y Erdogan rubrican un doble acuerdo que constituye un golpe de efecto y que cambiará la situación a su favor, en detrimento del mariscal Haftar y sus apoyos [MAPA 2]. El primer documento delimita una zona económica exclusiva turco-libia en el Mediterráneo, lo que permite a Ankara alimentar su pretensión de explorar los fondos marinos en busca de gas y, sobre todo, contrarrestar el proyecto de gasoducto submarino «EastMed», que uniría los yacimientos egipcios, israelíes y chipriotas con Europa a través de Grecia. Ese acuerdo de demarcación, que ningún otro Estado reconoce, ignora en particular la existencia de la isla helénica de Creta. Pero es emblemático de las opera-

ciones «porque sí» que Erdogan multiplicará en 2020. El segundo texto prevé apoyo militar de Ankara a Trípoli. El 2 de enero, el Parlamento turco aprueba el envío de tropas a Libia, que se despliegan cuatro días después, sin que las protestas del secretario general de la ONU o de los dirigentes de la Unión Europea, Estados Unidos o Rusia surtan efecto. La sorpresa no se queda ahí: si bien el armamento y la supervisión son turcos, en efecto, la tropa está formada por... rebeldes islamistas sirios, convertidos en los mercenarios de Ankara en Libia. Se sigue en ello el mismo principio que había llevado a insurgentes sirios a transformarse en fuerzas supletorias del Ejército turco durante la invasión de la región kurdo-sirio de Afrín, a principios de 2018, previa a la limpieza étnica de los habitantes kurdos, sustituidos por familias rebeldes árabes desplazadas; o a esos mismos mercenarios a invadir la Rojava siria a costa de numerosos exacciones en diciembre de 2019, después de que Donald Trump ordenara la retirada de las fuerzas especiales de estos territorios [MAPA 11]. Ese intercambio de combatientes islamistas, sacados del embolsamiento de Idlib y trasladados a Tripolitana —intercambio que evoca el despliegue de los *bachi-buzuks* por el Imperio Otomano de antaño—, crea también la versión «Hermanos Musulmanes» de un yihadismo transnacional contemporáneo, cuyo califa ya no sería Abu Bakr al-Bagdadi, sino Tayyip Erdogan. Al tomar el consulado de Turquía en Mosul, en junio de 2014, trayendo la bandera roja de Ataturk para reemplazar el estandarte blanco y negro de su propio «califato», fue cuando el Dáesh puso de manifiesto su intención de liderar el islam universal, volviendo a hacerse con el control allá donde la República turca secular lo había abolido ocho décadas antes...

El destacamento sirio dirigido por oficiales turcos y estimado en siete mil soldados, aguerridos por su participación en la insurrección armada del Sham, constituye una fuerza de ataque que marca la diferencia ya desde las primeras semanas y derrota a los mercenarios del mariscal Haftar, fuerza constituida principalmente por reclutas africanos entrenados a toda prisa —siguiendo el modelo de los *murtaziqa* (mercenarios) negros que formaban el grueso del Ejército con Gadafi—. La paga de los sirios, que asciende a 2.000 dólares al mes, abonada probablemente por Catar, es elevada y alimenta por difusión la economía de las familias de los rebeldes de Idlib, Afrín o los campos de refugiados turcos, que dan cobijo a tres millones de personas. Moscú, para evitar una hecatombe entre los paramilitares

rusos del «grupo Wagner» que cubrían la cabeza de puente para la ofensiva del mariscal Haftar en Tripolitana, los retiró a retaguardia y los sustituyó por... otros combatientes sirios, milicianos prorrégimen desmovilizados, menos numerosos en el verano de 2020 que sus compatriotas del bando contrario (unos dos mil hombres), pero sobre todo menos generosamente pagados: solo 1.000 dólares al mes. La paradoja libia está, por lo tanto, en que los antiguos adversarios de la guerra civil siria continúan la lucha, para los mismos patrocinadores, a falta de las mismas causas, reminiscencia en la historia europea de las «grandes empresas» medievales de siniestra memoria... Igual que a estos, también se instrumentaliza a las fuerzas supletorias sirias de Ankara y Moscú, para servir como variables de ajuste entre Idlib y Sirte. Así, según reporta el mejor sitio de información sobre la región, *Al-Monitor*, la captura por parte de las tropas de Ásad de una cota estratégica en un macizo al sur de la «zona de desescalada» se negocia entre rusos y turcos a cambio de una retirada de los sirios de Haftar, cediendo su posición cerca de la ciudad natal de Gadafi a los de Sarraj...

Ese cínico trueque entre soldados de fortuna, todos ellos peones en el *backgammon* regional, ilustra la alianza entre Erdogan y Putin —que no sacrifican ni sangre turca ni sangre rusa— y refuerza mutuamente a cada uno de los dos jugadores en su deseo de excluir a los europeos y a los estadounidenses de esas tablas reales orientales. Pero, como veremos, semejante estrategia tiene un límite. Por parte turca, la multiplicación de las provocaciones contra algunos Estados miembros de la Unión Europea suscita una respuesta —como más adelante veremos—, en particular con los enfrentamientos en el mar. La Sublime Puerta se había aliado con el reino de Francia contra el imperio de Austria, enfrentaba entre sí a las repúblicas de Génova y de Venecia, pero el Gran Señor no dependía en absoluto de la Europa de entonces, y enviaba su flota a asolar las costas europeas cada primavera con una yihad marítima. El avatar contemporáneo del sultán, entronizado como tal por la ostentosa oración de Ayasofya del 24 de julio de 2020, cuenta con la Unión Europea como principal socio económico y, en una situación desastrosa para la economía turca, no puede ir demasiado lejos en su farol, sobre todo porque su armada, desprovista de portaaviones, ya no tiene el formidable poder de la flota otomana. Por parte rusa, a Estados Unidos le preocupa que Moscú comparta códigos militares con los emiratíes y egipcios. Tanto es así que el propio Donald Trump

terminó por coger el teléfono para reunirse con los jefes de Estado concernidos por un conflicto «en el que no hay ganador» y en el que Washington es «un participante activo pero neutral», sobre todo porque el mariscal Haftar, en una posición delicada, cerró las terminales petroleras, la mayoría de las cuales permanecen bajo su control, con el fin de reforzar su posición negociadora. Ante las contradicciones que pone de manifiesto la paradoja libia, la desvinculación estadounidense y la pusilanimidad europea se verán obligadas a cambiar de orientación.

Esa última tarea es ardua, como demuestra el asunto de Malta en el verano de 2020. El miembro más pequeño de la Unión Europea fue antiguamente la ciudadela de los caballeros católicos de la Orden de San Juan de Jerusalén, que cerraban el Mediterráneo occidental contra las incursiones marítimas otomanas desde lo alto de su inexpugnable roca. En 1565, durante el «Gran Asedio» ordenado por Solimán el Magnífico, la flota del sultán acabó derrotada por el Gran Maestre francés Jean de Valette (que pudo así dar su nombre, que proviene de un topónimo de la región francesa de Rurgüe, a la futura capital), causando un considerable eco en toda Europa (seis años antes de la batalla de Lepanto, en 1571). Sin embargo, el 20 de julio de 2020, cuatro días antes de que Tayyip Erdogan reislamizara con gran aparato Santa Sofía, se celebró en Ankara una reunión entre los ministros de Defensa turco y maltés y el ministro del Interior del Gobierno de Trípoli para estudiar proyectos trilaterales de cooperación militar. A continuación, los dos jefes de la diplomacia se reúnen, en la capital libia, con el presidente del GAN, Favez el-Sarraj. Para Malta, desbordada por la avalancha de inmigrantes africanos ilegales, que llegan desde Libia en embarcaciones de fortuna, y frustrada por el insuficiente apoyo de Bruselas, ya no hay alternativa a la lealtad a Turquía, que, a través de su presencia militar en Tripolitana, dispone ahora de medios para controlar la salida de pateras. A cambio, La Valeta puede proporcionar a Ankara las pistas de aterrizaje que permitirían a sus aviones controlar el cielo libio. Tal apoyo sería muy valioso mientras los aeródromos locales estén a merced de los Rafale egipcios o emiratíes, como demostró un ataque destructivo atribuido a Abu Dabi contra la base de Al-Watiya, cerca de Trípoli, que acababan de ocupar las fuerzas del GAN, el 4 de julio, mientras el ministro de Defensa turco se encontraba de visita de inspección en la capital. La lejanía de la costa de Anatolia hace imposible que Ankara lance

sus aeronaves. A la espera de averiguar si ese gran juego puede tomar forma concreta o si se trata de una postura, no sabemos si el Gran Maestre epónimo de La Valeta se revolvió en su tumba en la cripta de la concatedral de San Juan de Malta, mientras sus lejanos sucesores, cinco siglos y medio después del fracaso del Gran Asedio, le besaban la babucha al nuevo sultán...

Apocalipsis en Beirut

El 4 de agosto de 2020, aproximadamente a las 18:00 horas, se produce una doble explosión en el puerto de la capital libanesa: dos mil setecientas cincuenta toneladas de nitrato de amonio, almacenadas en un silo desde 2013 y abandonadas allí por la negligencia de las autoridades, explotan, causando doscientos cuatro muertos y seis mil quinientos heridos [MAPA 13]. Los barrios circundantes, habitados en su mayoría por cristianos y encarnación de la supervivencia amenazada del cosmopolitismo levantino, saltan por los aires, dejando a unas trescientas mil personas sin hogar. La explosión se siente a más de 200 kilómetros a la redonda, hasta en Chipre, en Israel y en Siria. Ese apocalipsis es asimismo el de Líbano tal como lo había creado, en sus fronteras actuales, la potencia mandataria francesa bajo la égida de la Sociedad de Naciones, un siglo antes casi día por día, el 1 de septiembre de 1920. Emmanuel Macron, primer jefe de Estado que, dos días después, visita el país, y que coordina el 8 de diciembre una conferencia internacional de donantes para encaminar la ayuda humanitaria, pide cuentas a los dirigentes del país, y se compromete a volver tres semanas después, con motivo de la conmemoración del centenario, para hacer balance y establecer perspectivas comunes.

El cataclismo, cuyo estallido sigue siendo oscuro —y alimenta la proliferación de teorías conspiracionistas en la Red—, se produce en un contexto en el que el País de los Cedros vive las peores tragedias de su siglo de existencia, cuya segunda mitad no había sido parca, entre invasiones israelíes y asentamientos palestinos, guerra civil, ocupación siria y, finalmente, tutela iraní por la intermediación de Hezbolá. La proliferación de la covid-19, traída desde Qom a principios de año por los peregrinos chiíes, desbarató un sistema hospitalario privado, basado principalmente en el

lucro, que se ve desbordado por la magnitud de la pandemia, debido a la falta de capacidad para gestionar la salud de la gente. Todo ello en un contexto en el que la economía está en recesión desde 2018 —año en que Hezbolá y sus aliados ganan las elecciones parlamentarias en junio y controlan el poder ejecutivo, lo que se traduce, como represalia, en la relajación de los nexos financieros con Arabia Saudí, desde donde los inmigrantes libaneses enviaban a su país natal valiosas remesas—. (El primer ministro suní Hariri, a modo de premonición, había sido retenido contra su voluntad en Riad, en octubre de 2017.) Frente a la corrupción endémica, y a la delincuencia del conjunto de los servicios público —desde el suministro de electricidad hasta la recogida e incineración de residuos domésticos—, donde un tercio de los cuatro millones de libaneses viven con menos de cuatro dólares al día, y donde la libra (LL) se derrumba, las manifestaciones a partir del 17 de octubre de 2019 contra el aumento de impuestos y la creación de una tasa emblemática sobre las llamadas telefónicas por WhatsApp se convierten en un movimiento masivo de revuelta —o *taura* ('revolución')— contra la corrupción y una casta política de prebendados de todas las confesiones, que se ponen de acuerdo para llevar al país a una situación de explotación abusiva. Corrupción que incrimina directamente a Hezbolá, que ejerce la eficacia del poder a través de los mencionados prebendados. Sus secuaces y los de su aliado chií, el movimiento Amal, acosan en un primer momento a las comitivas de manifestantes, antes de retirarse de las calles para evitar que cristalice la impopularidad, en un contexto regional tenso para los intereses iraníes, en el que los clientes de Teherán en Bagdad son al mismo tiempo objeto de la furia de la juventud iraquí chií. El 29 de octubre, Saad Hariri, presidente del Consejo de Ministros y rostro suní de un cargo al que los Acuerdos de Taif, que ponían fin a la guerra civil en 1989, habían dado, por influencia saudí, realidad ejecutiva, sancionando así la derrota cristiana, aunque ya no es sino el rehén de Hezbolá, dimite —casi exactamente un año antes de ser nombrado de nuevo primer ministro, el 22 de octubre de 2020, como más abajo veremos—. Por su parte, el presidente maronita, el general Michel Aoun, cliente del Partido de Dios, se aferra al sillón, a pesar de las peticiones de que se vaya.

El nuevo jefe de Gobierno, Hasan Diab, suní como dicta la lógica «consociativa» de la Constitución, pero en manos de Hezbolá, estará pre-

sente durante el primer semestre de 2020 en la devaluación abismal de la moneda nacional, que pierde el 70 % de su valor en junio frente al billete verde, mientras que el importe de la deuda se eleva a sesenta y ocho mil millones de dólares —arruinando a la población, incluida la clase media instruida, cuyo dinamismo constituía la especificidad de Líbano en el Oriente Medio árabe, pero que ni siquiera podrá retirar ya el importe de sus depósitos bancarios—. La dramática situación, que la proliferación de covid-19 está agudizando, se traduce en un resurgimiento de las manifestaciones contra la prevaricación de los dirigentes, a las que Hezbolá intenta dar una dimensión de conflicto interconfesional para recuperar el control de su base chií y evitar una combinación de protestas que iría más allá de las divisiones religiosas y lo pondría en dificultades. Al mismo tiempo, los clientes de Teherán en el Levante relanzan las escaramuzas contra Israel, considerablemente ralentizadas desde que el Partido de Dios hubiera comprometido el grueso de sus fuerzas militares en Siria, ya en 2012, para salvar el régimen de Bashar al-Ásad. La reactivación del anti-sionismo, que ve simultáneamente a Hamás enviando globos en llamas para provocar incendios en el norte de la Franja de Gaza, y a Hezbolá probando las defensas del Tzáhal (FDI, Fuerzas de Defensa de Israel) en la frontera, durante el verano, tiene como objetivo restaurar la imagen de Teherán y sus clientes ante la opinión de la masa suní.

Tal es el entorno deletéreo en el que se produce la explosión de Beirut, el 4 de agosto, y que le confiere una dimensión propiamente apocalíptica, a ojos de tantos libaneses, especialmente para sus primeras víctimas directas, entre las que están en mayor medida representados los cristianos, que viven en los barrios más próximos al puerto. Sin perjuicio del carácter accidental o intencionado del desencadenamiento de la explosión de las reservas de nitrato —a la espera de una poco probable investigación—, la catástrofe tiene fuertes congruencias con la pandemia en cuyo contexto se sitúa: más allá de las interpretaciones mesiánicas que ven en los dos acontecimientos la manifestación común del «azote de Dios», ambas son expresión de una globalización incontrolada y destructora que está afectando de forma masiva y sin precedentes a personas que ya no pueden más. Las reservas de nitrato, procedentes de Rusia, fueron abandonadas por un buque moldavo que se dirigía a Angola y cuyo armador ha desaparecido. El «virus chino», cuyo origen está sometido a dudas aún más serias que el

de la explosión libanesa, se ha extendido por todas partes gracias a la ubicuidad del transporte aéreo y ha empezado por poner el foco en las poblaciones de mayores de Europa y Estados Unidos, desestabilizando los sistemas de salud pública y la organización económica de un Occidente que queda por ello debilitado. Constituye, *de facto* como mínimo, un «arma bacteriológica» (imparable hasta tanto llegue la vacunación) que puede desencadenar una especie de tercera guerra mundial antioccidental, y que inicialmente utilizó las ineptas políticas sanitarias de Donald Trump para minar su reelección. Después de haber asistido a las injerencias rusas en las elecciones presidenciales de 2016, hay que contar con la gestión calamitosa de una pandemia originaria de Wuhan como uno de los factores decisivos de las elecciones de 2020, un caballo de Troya viral para el enfrentamiento homérico del siglo XXI, donde los descendientes de los «bárbaros» se toman la revancha sobre los de los «helenos».

El apocalipsis de Beirut se produce también en un contexto en el que el nuevo enemigo paroxístico de los griegos de hoy y descendiente de los invasores asiáticos de antaño, el presidente Erdogan, al reislamizar Santa Sofía diez días antes, acaba de significar su extinción simbólica para el cristianismo oriental. Mientras su flota, como la del sultán de otros tiempos, multiplica las incursiones en aguas territoriales griegas y chipriotas, se une a las de Libia, el ideólogo euroasiático de la doctrina de la expansión marítima turca, la *Mavi vatan* ('patria azul'), el almirante en la reserva Cem Gürdeniz escribe en el diario *Aydinlik*: «Que Grecia viva en el mundo quimérico de su pasado... Pero ahora es el momento de sentarse a la mesa de negociaciones para resolver los problemas crónicos del mar Egeo». En otras palabras, se exige a Atenas nada menos que la renegociación del Tratado de Lausana del 24 de julio de 1923, que le daba el control del Egeo a Grecia a cambio de la evacuación de Asia Menor por parte de sus poblaciones helénicas y cristianas originales. Dos meses más tarde, otro Estado cristiano oriental, Armenia, fue objeto de una victoriosa ofensiva militar por parte de Azerbaiyán, a la que Erdogan dio «todo su apoyo» [MAPA 2].

A raíz de la visita de Emmanuel Macron a Beirut, el 6 de agosto, después de reunirse con la población desesperada de los barrios devastados de los alrededores del puerto, una petición en línea (en inglés) reclama el regreso de Líbano bajo mandato francés... Recoge en pocos días casi setenta y cinco mil firmas en el sitio web especializado Avaaz.org. El patroními-

co de los firmantes se indica solo con sus iniciales, pero el nombre aparece completo. La gran mayoría son cristianos. En ese contexto, el activismo del presidente francés apenas llega a Ankara, donde su homólogo vilipendia el 13 de agosto la visita a Beirut: «Lo que Macron y compañía pretenden es restablecer el orden colonial en Líbano», calificándola de «espectáculo». Pero el recuerdo de la Sublime Puerta no se exalta especialmente en el País de los Cedros, que ha bautizado la glorieta más importante de su capital con el nombre de «plaza de los Mártires», en recuerdo de los seis nacionalistas libaneses ahorcados allí el 6 de mayo de 1916 por el joven general turco Yemal Pasha, y que celebra su fiesta nacional en la misma fecha, en conmemoración de la lucha fundacional contra el ocupante colonial... otomano.

De hecho, el activismo turco se enfrenta a dos obstáculos, más allá de las baladronadas y los efectos publicitarios de su líder: un creciente aislamiento en su entorno árabe, al que preocupa la voluntad hegemónica neootomana de Erdogan, y el endurecimiento contra Ankara del conjunto de los enemigos regionales de los Hermanos Musulmanes [MAPA 1]. Además, estos últimos ya no son especialmente populares en las sociedades civiles árabes, diez años después de que intentaran recuperar en su beneficio las primaveras de 2011.

Ankara está vinculada a Catar, banquero de los Hermanos y de su causa en todo el mundo, pero los recursos financieros del emirato, que se ven con buenos ojos para rescatar una economía turca en dificultades, resultan a su vez afectados negativamente por los precios históricamente bajos del gas natural (es el mayor exportador mundial de gas natural licuado), debido a la inundación del mercado con gas de esquisto estadounidense y a los enormes gastos que debe afrontar para contrarrestar el bloqueo de Arabia Saudí y de los Emiratos desde 2017. En 2020, Doha es más parca en generosidad. La contrapartida de ese alineamiento ideológico para Turquía es un creciente antagonismo con el bloque anti-Hermanos saudí-egipcio-emiratí, al que se enfrenta directamente en suelo libio, utilizando a mercenarios sirios, según ya hemos mencionado más arriba. Sin embargo, el 13 de agosto, el anuncio «sorpresa» del reconocimiento diplomático mutuo de los Emiratos Árabes Unidos e Israel, bajo los auspicios de Donald Trump, incluyó aún más al Estado hebreo en una coalición hostil a Irán y a sus aliados suníes, los Hermanos Musulmanes y sus patrocinadores tur-

co-cataríes. El creciente aislamiento de Ankara también se vio agravado por un intensificado antagonismo con Irak, que había sido vasallo de Irán hasta que Kadhimi llegó al poder, el 7 de mayo. El 11 de agosto, un ataque turco con drones en territorio iraquí cuyo objetivo eran los miembros del PKK —Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el partido kurdo irredentista de Turquía— que se habían refugiado en la montañosa región fronteriza de Sidekan mató a dos altos mandos de la policía fronteriza iraquí, por lo que Bagdad canceló la visita del ministro de Defensa turco, prevista para dos días después. En cuanto al Estado hebreo, que ya mantiene una relación delicada con Erdogan por su apoyo a Hamás, entiende que la pretensión de Turquía de dominar el Mediterráneo oriental es un obstáculo importante para el proyecto de gasoducto EastMed entre Europa y los yacimientos submarinos de Israel, Egipto y Chipre a través del Peloponeso. Netanyahu recibió a bombo y platillo al jefe de la diplomacia griega en Jerusalén ese 13 de agosto, el mismo día en que a su colega turco le dan con la puerta en las narices en Bagdad, mientras París realiza maniobras marítimas conjuntas con la Marina helénica frente a la isla de Kastelórizo para desalentar la perspectiva de un desembarco turco allí, y envía dos cazabombarderos Rafale a Creta.

Además de ese aumento de las tensiones geopolíticas en el Mediterráneo oriental, cuya metáfora inaugural es la reislamización de Santa Sofía, la situación de los equilibrios ideológicos en Oriente Medio y África del Norte es un reto importante para el futuro inmediato de la región, desde el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb hasta el de Gibraltar. Para los dirigentes, de París a Ankara, de Beirut o Damasco y Bagdad a Roma o Bruselas, de Riad a Jerusalén, así como en Rabat, Argel o Túnez, es crucial movilizar apoyos entre la nueva generación, entre los apetitos democráticos de una parte de la juventud que aspira a una sociedad liberal de tipo europeo, el islam político militante del que se hacen eco otros jóvenes en un espectro que va desde los Hermanos Musulmanes hasta Irán y las crecientes tentaciones autoritarias como baluarte frente al caos y a las guerras civiles que extienden su paisaje de desolación de Libia a Yemen y el Levante.

Al contrario de las declaraciones voluntariamente triunfalistas de Erdogan y de la resignación de algunos políticos europeos, que ven en la victoria del islam político una fatalidad, desde Beirut hasta los suburbios y los barrios populares de Europa, y que buscan arreglos con sus representantes,

el balance de los principales levantamientos y revueltas en los meses que precedieron al año 2020 no es particularmente apasionante para los Hermanos Musulmanes y sus compañeros de ruta. Así puede apreciarse en el informe bastante sombrío que publica en la Red, en agosto de 2020, el centro de investigación estratégica del «Foro Al Sharq» ('Oriente'), fundado en 2012 por el palestino Wadah Khanfar, carismático exdirector general del canal catari Al-Jazeera, que lo había convertido en un medio de comunicación internacional que popularizaba con gran éxito su visión hermanista del mundo. Con sede en Estambul, y tras haber establecido contactos con numerosos *think tanks* árabes y occidentales, su objetivo es hacer que el discurso del islam político sea audible y aceptable en un diálogo con los círculos intelectuales y las redes de influencia a los que se dirige, con el fin de extender la proyección de esa ideología [MAPA 2].

El informe, titulado «El islam político en la segunda ola de los levantamientos árabes», analiza en detalle las movilizaciones de 2019 en Argelia y Sudán —dos Estados suníes—, así como en Irak y Líbano, sobre los que Irán ejerce una fuerte influencia a través de su población chií, mayoritaria en el primer caso y que representa la primera comunidad confesional del país en el segundo. Esa segunda oleada, específica de entrada, «parece profundizar la crisis de los movimientos políticos islámicos en la región de Oriente Medio y el África del Norte: la mayoría de los regímenes cuestionados y derrocados en las calles son islamistas o están apoyados por los partidos en cuestión», situación que se hace aún más explosiva por la virulenta oposición entre activistas suníes y chiíes en los dos últimos países mencionados. Viniendo de un entorno afín a la causa, vale la pena restituir la observación bastante lúcida —destinada sin duda a sacar lecciones de un fracaso con el fin de construir las victorias del futuro— antes de analizar de forma más sistemática cómo se articulan las tensiones del año 2020 en las tres entidades constitutivas de la región: es decir, el Golfo, Oriente Próximo, África del Norte y su extensión a los «suburbios del islam» europeos [MAPA 18].

A diferencia de las primaveras de 2011-2012, que tuvieron como objetivo poderes establecidos vinculados a Occidente —los presidentes Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto y Ali Saleh en Yemen, la dinastía de los Jalifas en Baréin—, así como a Rusia —Ásad en Siria y Gadafi en Libia—, el objetivo de los levantamientos de 2019 son los gobiernos en los que el

islam político, suní o chií, está fuertemente imbricado en dictaduras o partidos «antiimperialistas» dominantes. Los dos primeros Estados concernidos son suníes. En Sudán, el general Omar al-Bashir, que lleva treinta años en el poder tras un golpe de Estado militar-islamista auspiciado por el carismático hermano musulmán Hasan al-Turabi, ofreció asilo a Bin Laden y acogió a Carlos, antes de admitir la partición del país en 2011, consecuencia de una mortífera guerra civil con el sur animista, cristiano y petrolero, y preludio de la ruina de la economía. En Argelia, Abdelaziz Buteflika, elegido en 1999 bajo el control del Estado Mayor, había cedido durante sus cuatro mandatos sucesivos las cuestiones sociales y culturales a los islamistas, que recibieron suculentas prebendas a cambio de su renuncia a la violencia yihadista, sellando con ese pacto fáustico conocido como «concordia civil» el final de los oscuros años 1992-1997. Los otros dos países que vivieron levantamientos en 2019 habían ido cayendo gradualmente bajo control iraní. En Irak, después de la insurrección armada de la minoría suní tras la invasión estadounidense de 2003, los partidos y las milicias procedentes de la mayoría chií y satélites de Teherán constituyeron la élite, aplicando un islam político fascinante que vituperaba a los demonios imperialistas y sionistas y que combatía diariamente a los suníes. En Líbano, finalmente, Hezbolá controlaba la agenda del Gobierno pluriconfesional desde su éxito en las elecciones parlamentarias de junio de 2018.

Tanto los regímenes suníes como los chiíes, que hicieron del islamismo la base o el adyuvante de su poder sobre el Estado, cuya economía se hundió y cuya sociedad se desintegra, son así objeto en 2019 de una reivindicación popular que se traduce tanto menos en consignas religiosas —al contrario de lo que ocurre unos meses después del estallido de las «Primaveras Árabes» de 2011— cuanto que gobernantes vituperados captaron para el poder a los barbudos de todas las tendencias. Los gerontócratas Bashir y Buteflika deben dejar el sitio libre. Al primero lo sustituye una coalición de civiles y militares, obligados por la presión de la calle a purgar a los campeones de la instauración de la *sharía*, verdaderos y falsos devotos que inspiraron tres décadas de exacciones y de corrupción. Al segundo, parálítico y afásico, lo cambian después de veinte años de leales servicios, en unas elecciones ampliamente boicoteadas el 12 de diciembre de 2019, por un sucesor salido, como él, del Estado-Partido FLN, controlado por

el Ejército, pagando con el encarcelamiento de unos cuantos ministros-fusibles «ladrones», víctimas expiatorias, encarcelados para confundir a la gente de bien. Pero el *hirak* —el 'movimiento'—, que sacaba a las calles a millones de argelinos todos los viernes desde el 22 de febrero de 2019, no deja de presionar para deshacerse del odiado «sistema». Solo la epidemia de la covid-19 dará al traste con la movilización: por temor al contagio, la quincuagésima sexta y última marcha se celebra el 13 de marzo de 2020, concediéndole una prórroga «médica» al Gobierno, que aprovecha la crisis sanitaria para encarcelar a mansalva a los opositores.

En Líbano, el estallido de un levantamiento popular contra la quiebra de la economía y el nepotismo de una élite cuyas familias, emanadas de las distintas comunidades religiosas, se reparten el erario público, bajo el control de Hezbolá desde el verano de 2018, socava la retórica islamopopulista de este último. A la cabeza de la «Resistencia» contra el sionismo y el imperialismo, el Partido de Dios, que mantenía una tensión permanente en la frontera israelí desde los años ochenta y justificaba así su abundante armamento, reorientó su actividad militar en territorio sirio a partir de 2012, salvando el régimen de Bashar al-Ásad, enemigo jurado de los islamistas y miembro de la «secta herética» de los alauíes.

Pero ese cambio de enfoque del partido chií libanés emborronó los mapas ideológicos y redibujó las líneas de fractura en Oriente Medio. Hamás, movimiento islamista palestino suní, en el poder en la Franja de Gaza desde junio de 2007 y anteriormente cliente de Teherán, tuvo que distanciarse en 2012-2013 de Hezbolá y de su mentor iraní por solidaridad con la oposición siria, antes de reconciliarse por pragmatismo, aunque de mal grado. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Javad Zarif, de visita en Beirut el 15 de agosto de 2020 para mostrar la solidaridad del padrino persa en el Líbano dirigido por Hezbolá, se reunió con el jefe de la Organización de la Yihad Islámica de la Franja de Gaza, antes de conversar por teléfono con el «primer ministro» de Hamás, Ismail Haniya, para «coordinar» la respuesta al acuerdo israelí-emiratí, que acababa de salir a la luz dos días antes. El 14 había enviado mensajes a su colega el jefe de la diplomacia libanesa y al secretario general de Hezbolá, Hasan Nasrallah, para felicitarlos con motivo del «aniversario de la victoria de ese país en la guerra de los Treinta y Tres Días contra la agresión israelí» (12 de julio-14 de agosto de 2006), que convirtió al partido chií en el heraldo y

campeón del conjunto de los musulmanes y de los árabes frente al Estado hebreo. Para Teherán, es el momento de diluir el apoyo a Ásad en un intento de volver a movilizar la causa islámica y antisionista, alineándose con Irán y sus aliados suníes turcos y catariés, porque el enfrentamiento entre suníes y chiíes que cristalizó la guerra civil interconfesional en el Levante se ha superpuesto así al conflicto árabe-israelí... para gran provecho del Estado hebreo. Y el Gran Relato de un islamismo global que repare los agravios infligidos a los musulmanes oprimidos por el impío Occidente judeo-cruzado es menos claramente audible para los oídos árabes de lo que lo fue en la gran época de entusiasmo de la yihad, entre el cataclismo del 11 de septiembre de 2001 y la aniquilación del territorio del Dáesh, a finales de 2019. Tras la denuncia por parte de Teherán de la «normalización de las relaciones diplomáticas mutuas de los Emiratos Árabes Unidos y del régimen sionista como una estupidez estratégica», Irán tiene mucho trabajo por delante para darle la vuelta a su favor a una operación patrocinada por Washington y cuyo objetivo es aumentar su aislamiento. Aunque Erdogan, interrogado por la prensa «después de sus devociones durante la oración del viernes (14 de agosto) en la mezquita de Ayasofya», anunciara que «si Palestina cierra su embajada en Abu Dabi, [él] actuará de idéntica manera, porque nosotros siempre estaremos al lado del pueblo palestino».

Esa compleja situación para el islam político en general se ha visto agravada por la ruptura, dentro del propio campo suní, entre los Hermanos Musulmanes, flanqueados por sus padrinos turcos y financiadores catariés, por un lado, y el bloque de sus enemigos liderado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, por otro. Esa fragmentación del movimiento islamista en entidades antagónicas hizo, por lo tanto, más difícil identificar con ese movimiento a las masas populares árabes, y también turcas o persas, a diferencia de lo que ocurría en los decenios anteriores. Además, el desapego por esa ideología con pretensiones universales se ha visto agravado por la sangrienta saga del Dáesh, tanto más cuanto que el terror en todas direcciones practicado por la secta se ejerció también sobre muchos suníes, incluso yihadistas de cualquier otra obediencia —más allá de los espectaculares atentados que apuntaban a Europa, y a Francia en particular, en 2015-2016, así como las masacres de yazidíes y de chiíes en Irak de 2014 a 2017—. Los grupúsculos e individuos inspirados por esa lectura literal del

Corán perduran en 2020, repartidos por todo el planeta, desde los campos de internamiento del Kurdistan hasta las cárceles del Viejo Continente, y multiplicados virtualmente por las redes sociales, a través de las cuales mantienen el contacto. Sin embargo, los golpes infligidos por la ofensiva militar occidental, que acabó con el «Estado Islámico» tras la caída de Mosul en julio de 2017, con el apoyo terrestre de los chiíes iraquíes, la de Raqa en octubre, gracias al apoyo terrestre de las milicias kurdas, y luego la liquidación del último reducto sirio del Estado Islámico, en la aldea de Baghuz, en marzo de 2019, y finalmente la ejecución del «Califa» Abu Bakr al-Bagdadí, cerca de la frontera sirio-turca, el 27 de octubre del mismo año, por un comando estadounidense, mermaron fuertemente la eficacia operativa de esa entidad terrorista internacional.

Probablemente fue también como reacción ante las «lecciones» obtenidas de las dificultades encontradas por esa ideología y sus padrinos en 2019 por lo que Erdogan se jugó el todo por el todo y se embarcó en la *Blitzkrieg* religiosa y nacionalista del año 2020 —tratando al mismo tiempo de superar las dificultades internas causadas por el desgaste de su poder, una anunciada catástrofe económica y la propagación de la pandemia—. Y para completar la huida hacia delante, utilizará el pretexto de la reedición de las caricaturas del Profeta por *Charlie Hebdo* con ocasión de la apertura del juicio por los atentados de enero de 2015, el 3 de septiembre en París, para coordinar una campaña panislámica antifrancesa, que debería reforzar su papel de heraldo y héroe de los musulmanes ultrajados —retomando en el mismo impulso la postura del sultán Mehmet II, conquistador de Constantinopla en mayo de 1453, y la del ayatolá Jomeini lanzando el anatema universal contra el «blasfemo» Salman Rushdie, el 14 de febrero de 1989—. Para comprender cómo se inscribe esa ofensiva en el conjunto del marco regional, desentrañar sus complejas alianzas y rupturas, examinaremos sucesivamente su lógica en el Golfo, en el Levante, luego en África del Norte y hasta en Europa.

Veinte años: del 11 de septiembre a la caída de Kabul

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 han constituido un momento crucial en la historia contemporánea: la irrupción del terror islamista a

escala planetaria se ha convertido en una línea de falla mayor de las convulsiones de nuestro planeta. La sustitución del tercer milenio cristiano por un milenio yihadista se inscribe en un Gran Relato que asigna un nuevo origen al tiempo del mundo. Y en la escala de las fracturas del siglo pasado, el 11/09 (2001) ha eclipsado al 9/11 (1989): el derrumbe de las torres gemelas de Manhattan ha sustituido a la caída del Muro de Berlín —más aún cuando la muerte del comunismo fue precipitada por el golpe fatal al Ejército Rojo, expulsado de Kabul el 15 de febrero de 1989 por la yihad afgana—. Este «Vietnam de la Unión Soviética», que había anticipado y tramado el consejero nacional de Seguridad de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, desde la invasión soviética en las Navidades de 1979, haciendo sostener por la CIA una «yihad» financiada por las petromonarquías de la península Arábiga, salda todas sus cuentas el 15 de agosto de 2021, cuando el Ejército estadounidense huye a su vez de Kabul en medio de una confusión cuyas imágenes evocan aquellas de la retirada calamitosa de Saigón el 30 de abril de 1975..., con un doloroso retroceso.

Esta confrontación esquematizada en términos maniqueos que enfrentaría al Occidente laico y democrático a un Oriente islamista no corresponde del todo, lo estamos viendo, a las realidades más complejas del terreno. Tanto más cuando, al día siguiente del 15 de febrero de 1989, la derrota del Ejército Rojo quedó relegada a los interiores de los diarios que sacaban en primera página la fatua del ayatolá Jomeini condenando a muerte por blasfemia, el 14, al autor de *Los versos satánicos*. El Guía Supremo de la república islámica chiita de Irán, con este escándalo mundial, le quitó el protagonismo a sus rivales sunitas, eclipsando su éxito geopolítico contra la superpotencia soviética y trasladando el conflicto al mismísimo territorio de un Estado europeo del que Rushdie era ciudadano. Al-Qaeda nació como reacción a esta frustración de la yihad sunita de haber sido desposeída de su victoria afgana: en el manifiesto de la organización, *Caballeros bajo el estandarte del Profeta*, difundido en torno a 1998, Ayman al-Zawahiri, en aquella época brazo derecho de Osama bin Laden, lamenta haber perdido la «batalla mediática» y lo atribuye al fracaso de las yihads de Egipto, Argelia y Bosnia durante esa década, ya que las «masas musulmanas» no se habían unido a la «vanguardia islamista» por miedo al poder occidental. Hace un llamamiento a una ofensiva mayor en este terreno

que ganará la partida a sus rivales chiitas y hará penetrar la violencia sagrada en el corazón de Occidente de manera aún más espectacular que la fatua, con imágenes que proyecten un espectáculo de códigos narrativos hollywoodienses en el alma de la información televisiva. De hecho, éstas harán del orgulloso Estados Unidos un coloso de pies de barro desde el momento en que las imágenes de los aviones estrellándose en las torres del World Trade Center se retransmitieron por las cadenas de todo el mundo. Sin embargo, al-Qaeda no logrará sacar provecho de ello: la organización, piramidal y centralizada, sucumbirá tanto durante la «guerra contra el terrorismo» de George Bush, cuyas tropas se despliegan en Bagdad, como en los golpes decisivos llevados por las milicias chiitas iraquíes e iraníes bajo la dirección del general de los Pasdaran, Qasem Soleimani, contra los yihadistas de al-Qaeda en Mesopotamia.

Las lecciones de tal fracaso de la organización que había perpetrado el 11 de septiembre, derrotada por esta paradójica alianza de circunstancias entre Washington y Teherán, fueron aprendidas por los que concibieron la nueva fase yihadista que llevará a la creación del Dáesh. Éste se adapta tanto a la nueva era mediática —las redes sociales han sustituido a las televisiones por satélite— como a un enfrentamiento que abandona el antagonismo con Estados Unidos, tan fuerte y lejano, en beneficio de una guerra sectaria intraislámica de sunitas contra los «heréticos» chiitas en territorio levantino y atentados espectaculares en tierra de la cercana Europa, perpetrados no desde el cielo y por extranjeros, sino por los hijos de los inmigrantes musulmanes y los conversos recientes. El celo terrorista de estos «enemigos interiores» del Viejo Continente es una consecuencia directa del 11 de septiembre de 2001: más allá de la falta de éxito final operativo de al-Qaeda, el vuelco de valores que engendraron los atentados contra las torres gemelas y el Pentágono ha creado una nueva generación islamista que, convencida del inminente apocalipsis de Occidente, está lista a intervenir para precipitarlo. Aquel día, los hermanos Merah, conocidos hasta entonces como pequeños traficantes de estupefacientes, gritaron «Viva Bin Laden» a los pies de las viviendas de protección social del barrio Izards de Toulouse: acababa de lanzarse la dinámica de las matanzas de Toulouse y Montauban en la primavera de 2012, preludio a las de *Charlie Hebdo* en enero de 2015 y de París de noviembre de ese año. Converte con la yihad en Irak y Siria, consecuencia imprevista de las

«Primaveras Árabes» en las que Occidente veía la traducción de su modelo democrático en tierra de Islam. La violencia de la guerra civil apuntaba a los «heréticos» chiitas y alauitas, y conducirá a la proclamación del «Estado Islámico» en junio de 2014. Este califato criminal que instauró una nueva forma de terror yihadista, tanto en su territorio como en Europa, no será aniquilado más que al cabo de cinco años por los bombardeos de la coalición internacional, miles de millones de dólares y euros invertidos en ciberseguridad, y la ofensiva de las milicias chiitas, desde Hizbulah al Hachd Chaabi iraquí. Su larga agonía, acompañada de atentados en represalia que ensangrentaron toda Europa, pasa antes por la caída de las ciudadelas de Mosul y Al-Raqa en 2017, del reducto de Baghuz en marzo de 2019 y la eliminación final del «califa» Abu Bakr al-Baghdadi, cerca de la frontera sirio-turca en octubre de ese año, por un comando estadounidense. Si la capacidad de movilización del Dáesh se benefició del impacto inicial del «momento de entusiasmo» del 11 de septiembre, en su modo operativo se diferencia de al-Qaeda: no es una «organización» centralizada, sino una «red» planetaria según las palabras de uno de sus ideólogos, el sirio de formación francesa Abu Músab al-Suri, dando un eco islamista, en la era de Facebook y Telegram, al «rizoma revolucionario» que Gilles Deleuze oponía al modelo leninista de la toma del poder.

Es al término de estas décadas de historia del yihadismo internacional que se inscribe la vuelta de los talibanes a Kabul, menos de un mes antes de la conmemoración del veinte aniversario del 11 de septiembre de 2001, y mientras empieza en París el más largo proceso de terrorismo yihadista de la Historia, el de los atentados de noviembre de 2015. Más allá de la tentación de numerosos analistas de ver en este colapso estadounidense una especie de vuelta a la casilla de salida, que castigaría la inanidad de la estrategia de Estados Unidos, es importante comprender cómo este hecho se inscribe a la vez en las convulsiones más recientes tanto del contexto internacional como del ecosistema yihadista global.

Comparado con el primer año de este siglo, se han producido dos cambios estructurales a escala planetaria. En primer lugar, la consolidación de China como superpotencia rival de Estados Unidos que fuerza a Washington a dedicar recursos a la confrontación con Pekín, aunque sólo sea por la expansión manufacturera y comercial del Imperio del Centro. Después,

el «Acuerdo de Abraham» alcanzado en la segunda mitad de 2020, bajo los auspicios de la Casa Blanca, entre diversos aliados árabes e Israel, que tiene por objetivo estructurar una alianza militar regional, creando un nuevo «gendarme de Oriente Medio» frente a los adversarios de Occidente para compensar la retirada estadounidense.

En cuanto al yihadismo, ha mutado después del hundimiento del Dáesh: desde entonces es un fenómeno dúctil en el que los emprendedores de la ira, omnipresentes en la escena, fijan los objetivos a abatir que ejecutan individuos previamente adoctrinados tanto online, a distancia, como frecuentando mezquitas o asociaciones radicales, de forma presencial. Pero no se transmiten órdenes de forma operativa como era habitual en las organizaciones anteriores. Este «yihadismo de atmósfera», complejo de cara a ser controlado por los servicios de seguridad, y que ha ensangrentado Francia en otoño con motivo del proceso de los atentados de *Charlie Hebdo* y del Hypercacher de Vincennes, necesita ser alimentado con hechos gloriosos que reactiven el entusiasmo de los adeptos y les motiven para pasar a la acción: las imágenes de los pick-up, llenos de barbudos armados con kalashnikovs, sobre los que ondean la bandera blanca con *La ilah ila Allah* (No hay más Dios que Alá) van en ese sentido, recordando la captura de Mosul en el verano de 2014 por el Dáesh, cuya bandera no se diferenciaba más que en su color negro.

La recuperación de Kabul por los talibanes en agosto de 2021 se produce al término de dos décadas que han visto crecer y periclitar sucesivamente a al-Qaeda y el Dáesh en este nuevo contexto. La ideología de la nueva generación de los «estudiantes de religión» es idéntica a la de sus padres, pero el panorama ha cambiado. La benevolencia de Pekín, que ha recibido con grandes pompas a su delegación, tiene por contrapartida que no alberguen a terroristas internacionales, contrariamente a la hospitalidad prodigada en otros tiempos a Bin Laden por el mulá Omar (tampoco que sostengan a los uigures reprimidos en China). Pero el entusiasmo por la caída de Kabul ha reforzado, más allá de los yihadistas de atmósfera que se han regocijado, el Gran Relato del islamismo político sunita, de Hamas en Gaza a Hayat Tahrir al Sham en Idlib, pasando por el jefe de la organización francesa disuelta BarakaCity, refugiado político en Turquía. Y en Oriente Medio, si los aliados de Estados Unidos se inquietan por la fiabilidad de su mentor, Teherán no grita tanto victoria: las matanzas de chiitas

por la vieja generación de los talibanes han dejado huellas profundas, y los millones de afganos en Irán pueden convertirse en una nueva preocupación para la seguridad, en torno a una frontera de casi mil kilómetros que, paradójicamente, debilitará la mano de Raisi en las negociaciones de Viena con la comunidad internacional sobre la energía nuclear.

I

LA FRACTURA DEL GOLFO

En la noche del 13 de agosto de 2020, después de que Benyamin Netanyahu recibiera al jefe de la diplomacia griega, cuyo país vive una crisis abierta con Turquía, el mismo día en que el ministro de Asuntos Exteriores de Ankara fue «desinvitado» a Bagdad a raíz de que un general de la guardia fronteriza iraquí cayera asesinado en territorio nacional por un dron turco, la Casa Blanca revela que se acaba de firmar un acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, bajo los auspicios de Donald Trump [mapa 1]. La riquísima petromonarquía de la península Arábiga, pulmón económico del Golfo, y el Estado hebreo van a establecer relaciones diplomáticas. El buen entendimiento mutuo y la complementariedad de los objetivos no son ningún secreto desde hace una década: en el encuentro anual llamado de «Sir Bani Yas», organizado en un palacio del desierto por el ministro de Asuntos Exteriores emiratí, el jeque Abdulá, hermano del príncipe heredero Mohamed bin Zayed, y en el que el autor ha participado varias veces a principios de los años 2010, un alto responsable israelí aparecía ritualmente para una intervención desde Jerusalén por videoconferencia. Insistía una y otra vez en que las disputas entre los emiratos y

reinos suníes del Golfo y el Estado judío eran negociables, contrariamente al antagonismo insuperable que se alzaba entre los primeros y el segundo frente a la República Islámica de Irán.

A esta última la vilipendiaba desde la pantalla o la sala de conferencias el coro de kipás y de *gutras*, tachándola de Estado canalla y amenaza estructural. Después del 13 de agosto de 2020, y a pesar de las medidas preventivas que la covid-19 ha impuesto en todo el planeta, ya no existe ninguna razón para que los interesados se encuentren exclusivamente «a distancia», ningún obstáculo para que los descendientes de los beduinos y los de los *kibutzniks* se codeen de verdad. El 18 de agosto, el carismático jefe del Mosad, Yossi Cohen, que desempeñó un papel fundamental para llevar a buen puerto el acuerdo gracias a numerosos intercambios discretos, fue recibido con gran pompa en Abu Dabi por el jeque Tahnun, consejero de seguridad nacional de su hermano uterino, el jeque Mohamed. El proceso de normalización está llamado a ampliarse, según modalidades que se determinarán a la luz de los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre: el reino de Baréin y el sultanato de Omán expusieron inicialmente su voluntad de seguir el ejemplo de Emiratos, y nada habría podido ocurrir sin el discreto *nihil obstat* saudí. El 11 de septiembre es una realidad para Manama: tras la negativa de la Liga Árabe, a pesar de los esfuerzos de la diplomacia palestina, a condenar el acuerdo entre Israel y los Emiratos, el Estado miembro más pequeño, vasallo *de facto* de Riad, cuya población es abrumadoramente chií y cuya participación en la Primavera Árabe quedó aplastada el 14 de marzo de 2011 por la intervención armada de los demás Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, anuncia que será el cuarto país árabe en reconocer a Israel. La dinastía suní en el poder alimenta una hostilidad estructural hacia Teherán, acusado de manipular a los partidos chiíes para derrocarla. Y el pequeño reino había nombrado embajadora en Washington de 2008 a 2013 a una miembro de su reducida comunidad judía, caso único en el mundo árabe. Incluso Sudán, cuyo levantamiento en 2019 destituyó al dictador Omar al-Bashir, en otro tiempo bastión del islamista Hasan al-Turabi, refugio de Osama bin Laden y que sigue en la lista del Gobierno estadounidense en la que figuran los Estados que apoyan el terrorismo, ha señalado su interés en subirse al carro... sobre todo y antes que nada para borrar el estigma que le impide

acceder a los préstamos bancarios internacionales. Y en efecto, un acercamiento entre ambos países, aún bajo la égida del presidente Trump, se acordó finalmente el 23 de octubre de 2020 en el Despacho Oval, donde Benjamin Netanyahu y Abdalá Hamdok decidieron, durante una conversación telefónica con altavoces a la que pudieron asistir los periodistas invitados a la rueda de prensa, la normalización de sus relaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, Sudán quedó eliminado de la lista de Estados que Estados Unidos considera que apoyan el terrorismo. El acuerdo en cuestión, que llega oportunamente dos semanas antes del final del período presidencial estadounidense, pasa página a la resolución de Jartum, cuyos firmantes, tras la guerra de 1967, se comprometieron, según la regla de los «tres noes», a negarle a Israel toda paz, reconocimiento o negociación. Ese «formidable giro», en palabras de Benjamin Netanyahu, fue inmediatamente fustigado por Hamás, cuyo portavoz, Hazem Qassem, deploró un «pecado político que perjudica al pueblo palestino». Los posibles siguientes en la lista han multiplicado cautelosamente las declaraciones de apoyo a la causa palestina y a una «solución de dos Estados», pero meramente por razones formales, puesto que ya hay tres Estados: Israel, la Cisjordania de la OLP y la Gaza de Hamás. Marruecos, que cultiva el distanciamiento con respecto a las divisiones de Oriente Medio, es el segundo socio comercial de Israel en el mundo árabe, después de Egipto. El hebreo se entiende como lengua patrimonio de la antigua y considerable población sefardí, que contaba con unas 250.000 personas en 1946. El reino de Marruecos se decide a dar el paso de la normalización el 10 de diciembre de 2020. Un tuit de Donald Trump saluda ese día como «otro avance HISTÓRICO hoy», calificándolo de «gran paso para la paz en Oriente Medio», y añade: «Marruecos reconoció a Estados Unidos en 1777. Resulta, por lo tanto, apropiado que reconozcamos su soberanía sobre el Sáhara Occidental» (donde Argelia, a través del Frente Polisario, apoya la organización de un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de la ONU). La respuesta es un comunicado del gabinete del rey Mohamed VI informando de la conversación telefónica entre los dos jefes de Estado. En primer lugar, se congratula ampliamente por «la decisión de los Estados Unidos de América de reconocer, por primera vez en su historia, la plena soberanía del reino de Marruecos sobre toda la región del Sáhara marroquí» [Occidental], que se traducirá en la apertura

de un consulado en la ciudad costera de Dajla. A continuación, recuerda el compromiso del monarca jerifiano, presidente del Comité al-Quds ['la santa': Jerusalén] creado por la Organización de la Conferencia Islámica para «trabajar por la preservación del patrimonio religioso, cultural y urbanístico de la Ciudad Santa», así como su apoyo a la «solución de dos Estados» en la «cuestión palestina». Por último, anuncia que «se autorizarán vuelos directos para el transporte de los miembros de la comunidad judía marroquí [unos 3.000] y de los turistas israelíes hacia y desde Marruecos», la reanudación de los contactos oficiales con vistas a establecer relaciones diplomáticas lo antes posible y la promoción de la cooperación económica y tecnológica. El comunicado —cuya redacción sigue el orden inverso al del tuit del presidente estadounidense— expresa cautela en el difícil contexto político de la gestión de la covid-19, caracterizado por una tensa relación con el islamismo político local como consecuencia del cierre de las mezquitas por motivos profilácticos. El Estado hebreo no se menciona como tal.

De hecho, el soberano jerifiano mantiene estrechas relaciones con los emigrantes judíos marroquíes, considerados como súbditos del reino y cuya nacionalidad conservan en las mismas condiciones que todos sus compatriotas residentes en el extranjero. El monarca financió la construcción de sinagogas de estilo morisco en Israel —por ejemplo, en la ciudad de Netivot, de mayoría sefardí, frente a la Franja de Gaza— y unos cincuenta mil israelíes de origen marroquí (de un total estimado de ochocientas mil personas) viajan cada año a su país de origen, pasando por París.

La normalización —llevada a cabo exclusivamente por el canal estadounidense— llega en las últimas semanas de la presidencia de Trump, y crea un hecho consumado, tomando precauciones frente al equipo de Joe Biden, con menos empuje *a priori* con respecto a la marroquinidad del Sáhara Occidental, pero que difícilmente podrá dar marcha atrás. También está sacando provecho de la profunda crisis que atraviesa Argelia, apoyada por el Polisario, en el otoño de 2020, que inhibe su capacidad de reacción tras un referéndum desastroso, un vacío de gobernanza y el colapso de los ingresos del petróleo y el gas (véase más adelante, pág. 163).

En cuanto a Catar, su bien establecida relación especial con el Estado judío es de naturaleza más compleja, a través de la financiación de Hamás

y la supervivencia económica de la Franja de Gaza, bajo los auspicios de Israel —cuya paradoja analizaremos a continuación—.

Abu Dabi fue la tercera capital árabe en establecer relaciones diplomáticas, después de El Cairo en 1979 y Ammán en 1994. Pero Egipto y Jordania limitan con el Estado judío, al que se han enfrentado en varias guerras desde 1947, y el intercambio de embajadores tenía, en primer lugar, una función de seguridad, eliminando el riesgo beligerante entre ejércitos convencionales en las fronteras del Jordán y de Sinaí, dentro del restringido marco regional del Levante. También fue una oportunidad para que sus líderes hicieran que los senadores y representantes estadounidenses votaran a favor de una ayuda civil y militar masiva a cambio de una renuncia permanente al conflicto. Otra cosa muy distinta es el tercer acuerdo anunciado, un cuarto de siglo después del anterior, en el que los opulentos Emiratos —a los que no les interesan los dólares del Congreso— subvencionan generosamente varios *think tanks* e institutos de investigación sobre Oriente Medio en Washington que se han convertido en sus relevos de influencia, a imitación —todavía modesta— de los *lobbies* proisionistas omnipresentes en el interior del *Beltway*.

Del Gran Juego al Monopoly: eje hermano-chií contra el Acuerdo de Abraham

La normalización traza el Gran Juego en curso, que sitúa en el centro el devenir de los conflictos sirio, libio e incluso yemení y busca anticipar sus consecuencias reestructurando el equilibrio de poder en la zona. El tablero amplio del Monopoly, cuya carta mala viene de la mano de la covid-19 y del colapso de los precios de los hidrocarburos, abarca toda la región de Oriente Medio y el Mediterráneo, incluyendo ahora a Israel como actor de pleno derecho. Eso ratifica el certificado de defunción del «plan de paz árabe» proclamado en Beirut el 28 de marzo de 2002 —conocido como «plan Abdalá», en honor al príncipe heredero y futuro monarca saudí, que lo inspiró—, que proponía, por primera vez, el reconocimiento explícito de Israel pero lo condicionaba a su retirada de todos los territorios ocupados durante la guerra de los Seis Días, de junio de 1967. La iniciativa de «tierra por paz» se abandona a causa del resquebrajamiento irreparable del

«campo árabe» y del vuelco en el equilibrio de poder, en favor de un enfoque de «paz por paz», que habían ideado al final del mandato de Bill Clinton los neoconservadores estadounidenses, en unión con los estrategas del Likud israelí, como reacción al plan de Abdalá. En un año en el que la pandemia y la caída del precio del barril están asolando el entorno regional del Estado judío, este ya no siente la necesidad de hacer concesiones territoriales para imponer su reconocimiento.

El vínculo privilegiado establecido con los Emiratos Árabes Unidos sitúa a Israel en el centro del espacio global de Oriente Medio y del Mediterráneo y lo saca del contexto exclusivamente levantino, permitiéndole «superar» el obstáculo palestino de antaño, con mayor facilidad aún a partir del momento en que existen dos entidades antagónicas desde la toma de Gaza por Hamás en 2007, en detrimento de la OLP. El vínculo orgánico instaurado por el acuerdo crea una continuidad económica y estratégica entre las petromonarquías de la península Arábiga, aliadas a Abu Dabi, y un Levante en cuyo centro se encuentra el Estado hebreo. Se levanta como baluarte contra el que había puesto en pie el difunto estratega iraní Qasem Soleimani al trazar una «media luna chií» militarizada, desde Teherán hasta Beirut, gracias a la cual la República Islámica podía golpear Haifa o Tel Aviv con misiles disparados desde el sur de Líbano o Siria y lanzados a través o por encima de Irak. A partir de ese momento, la lógica ofensiva de esos campos de batalla paralelos está llamada a girar: Teherán, desde la orilla norte del golfo Pérsico y hacia la costa oriental del Mediterráneo, se había posicionado como francotirador, convirtiendo al Estado judío en su diana. Tras el acuerdo israelí-emiratí, la línea de fuego se invierte: las armas apuntan desde Judea y la península Arábiga, e Irán hace de estafermo. La amenaza de la que es el objetivo resulta más destructiva que los «misiles balísticos del *Shahid Hach* (‘mártir y peregrino a los Santos Lugares’) Qasem Soleimani», con un alcance de 870 millas, sacados a la luz el 20 de agosto por el régimen de los mulás, o los globos en llamas con gas que Hamás confía al viento desde la Franja de Gaza para incendiar los cultivos entre Ascalón y Netivot. Los bombarderos furtivos israelíes F-35 y los Rafale emiratíes no tienen rival alguno en los cielos del Golfo, y la combinación de sus fuerzas representa un obstáculo dirimente en la carrera de Irán hacia las armas nucleares.

Por último, más allá del antagonismo con Teherán, el acuerdo anunciado el 13 de agosto en la Casa Blanca convierte al Estado judío en la bisagra de una entente opuesta al eje del triple acuerdo hermano-chií, que se estructuró durante la segunda década del siglo XXI entre Turquía, Catar e Irán, combinando, más allá del arabismo que en su día estuvo de moda, los objetivos político-militares de tres Estados de lengua turca, árabe y persa respectivamente.

Frente a esa triple entente, cuya sobrepuja de agresividad durante el verano de 2020 sirve para ocultar contradicciones internas, y que lleva al paroxismo la huida hacia adelante de Erdogan (cuya réplica al acuerdo israelí-emiratí del 21 de agosto consistió en retransformar el museo de Estambul de San Salvador de Cora, joya suprema del arte bizantino, en una mezquita, después de Santa Sofía), la coalición antagónica abarca un espectro más amplio, pero se muestra aún más dúctil. El objetivo de su bautismo, el 13 de agosto, con el nombre de «Acuerdo de Abraham» —se moviliza con toda intención al patriarca bíblico para legitimar la «triple entente» entre judíos, cristianos y musulmanes—, es precisamente reforzar el pacto, ponerlo en orden de batalla para conquistar la hegemonía regional frente a sus rivales y, más allá, tener peso en un mundo en plena agitación, en el que Oriente Próximo y el Mediterráneo son, respectivamente, el botafuego y el detonador. Además de Abu Dabi y sus aliados del «bloque saudí» —incluido El Cairo, también en paz con Israel—, el mencionado acuerdo se apoya en Jerusalén (la ciudad bíblica que funciona como capital *de iure* del Estado judío a partir del traslado allí de la embajada estadounidense desde Tel Aviv, el 14 de mayo de 2018: el nombre de Jerusalén se utiliza en este caso como metonimia de Israel) y se extiende indirectamente a los adversarios mediterráneos y de cultura cristiana de Ankara, con los que Erdogan ha entrado en una escalada retórica y militar: Atenas, Nicosia y París —así como también en el Cáucaso, la armenia y ortodoxa Ereván, que se enfrenta a Bakú (aunque Israel haya armado a este último Estado, adversario de Irán)—. Al Azerbaiyán postsoviético de origen turco, cuyo Ejército se formó en las academias militares de Anatolia, se enviaron en 2020 fuerzas supletorias y antiguos rebeldes sirios, bajo la égida turca, que abren el 27 de septiembre en el enclave armenio de Nagorno Karabaj un nuevo frente panturánico y panislamista al que el exaltado sucesor de Atatürk y Mehmet el Conquistador promete «todo su apoyo».

En ese activismo en todas direcciones del triple acuerdo, la potencia tecnológica de la *start-up nation* hebrea, combinada, bajo la bendición estadounidense, con las capacidades de inversión de la petromonarquía de la antigua Costa de los Piratas, está llamada a poner en pie un dinamismo económico *win-win*. El objetivo es unir a la entente abrahámica al mayor número posible de Estados de la región neutrales o bajo presión del eje hermano-chií, pero que las dramáticas consecuencias de la pandemia y de la caída del petróleo obligan a estar atentos ante cualquier atisbo de esperanza que les permita mejorar su precariedad y evitar o retrasar la catástrofe anunciada.

Efectos inducidos y efectos perversos del Acuerdo de Abraham

Una de las claves de esa estrategia de inflexión es Irak [MAPA 8], liberado de Sadam Husein tras la intervención militar estadounidense, en marzo de 2003, y posteriormente avasallado por Teherán. La liquidación por un dron estadounidense del estratega iraní Qasem Soleimani en Bagdad, el 3 de enero de 2020, es el punto de partida de la ofensiva de Washington —reivindicada como tal por el secretario de Estado Mike Pompeo durante su discurso desde Jerusalén, el 24 de agosto, en la convención del Partido Republicano que presentaba a Donald Trump como candidato a la reelección—. El asesinato selectivo alentó las protestas populares en Mesopotamia contra Teherán y dio lugar a un importante vuelco político, cuya expresión es el acceso al puesto de primer ministro, el 7 de mayo, de Mustafa al-Kadhimi, que se considera compatible con Estados Unidos. El sucesor del general Soleimani, Ismail Ghaani, carente del carisma y la autoridad de su predecesor, había acudido de hecho a Bagdad el 6 de abril para intentar unificar a las milicias chiíes en torno a un primer ministro afín a la República Islámica, pero, ante las manifestaciones masivas contra la injerencia iraní, fracasó [MAPA 9]. Al mismo tiempo, en la frontera norte se producen recurrentes escaramuzas militares con las tropas de Ankara, que multiplican las incursiones persiguiendo a los combatientes del partido kurdo irredentista de Anatolia, el PKK, refugiados en las montañas. Erdogan es el aliado de Teherán en el triple acuerdo hermano-chií: mientras Irán trata de mantener a Irak en vasallaje, Turquía busca obstaculizar

el resurgimiento como potencia regional del segundo productor de la OPEP, en el que teme un rival. Este último buscaba, gracias a su riqueza petrolera recuperada con la reactivación de la producción y las exportaciones, superar los estragos de la guerra civil desde 2003, el catastrófico episodio del control de Mosul y la región suní por el «emirato islámico» del Dáesh entre 2014 y 2017 y la explotación de las instituciones y los recursos del Estado por la corrupción y la confesionalización. A esto viene a sumarse —desde las sanciones económicas contra Irán después de la retirada de Estados Unidos del JCPOA el 8 de mayo de 2018— el saqueo de los ingresos de la exportación de petróleo iraquí por parte de Teherán, gracias a las milicias chiíes afines, que controlan la mayoría de los puestos aduaneros con la República Islámica y facilitan el tráfico a gran escala en el marco del contrabando generalizado.

La visita del primer ministro Kadhimi a Washington, el 20 de agosto, se inscribe directamente, por lo tanto, en la línea del Acuerdo de Abraham que acaba de anunciarse la semana anterior. Con tal ocasión, se firmaron contratos energéticos por valor de ocho mil millones de dólares con Chevron, así como con otras compañías, como General Electric, para rehabilitar la red eléctrica local, gangrenada por la corrupción derivada del confesionalismo, como en Líbano, y fuente de virulentas protestas populares durante los tórridos veranos de Mesopotamia, amenazando a todos los poderes existentes. Kadhimi, a quien el inquilino de la Casa Blanca califica de «caballero muy respetado en todo Oriente Medio y en nuestro país», antiguo jefe de los servicios de inteligencia, que desempeñó un papel clave en la lucha contra el Dáesh y personalidad independiente de partidos y milicias, recibe el trato propio de un invitado distinguido; al final de la visita se dice de él que es un «amigo» gracias al cual las relaciones con Irak son ahora «mejores que nunca». Y él mismo hace de Washington el punto culminante de una gira internacional que lo había llevado previamente a Teherán (la escala prevista en Riad se pospuso debido a la salud del nonagenario rey Salmán) y luego, ya en el camino de regreso, a Ammán. El presidente de Estados Unidos le ofrece incluso su mediación para resolver la disputa que mantiene con su homólogo, el líder fuerte de Ankara, después de que altos mandos iraquíes fueran asesinados en su propio territorio por drones turcos, el 11 de agosto de 2020. Los compromisos estadounidenses manifiestan con fuerza la voluntad de

ayudar a Irak a emanciparse de la soberanía iraní y de posicionarlo en la estela del Acuerdo de Abraham. Ante esa perspectiva, el ministro de Asuntos Exteriores saudí viajó a Bagdad tan pronto como Kadhimi regresó de Ammán, con el fin de explorar las opciones de financiación de los contratos cerrados en Washington, conectar a Irak a la eficiente red eléctrica de los Estados del Golfo en lugar de a la disfuncional red iraní e invitar al primer ministro a Riad. Más abajo examinaremos hasta qué punto es compleja semejante ambición, dada la ubicuidad de la República Islámica, por muy debilitada que esté, en Mesopotamia, donde conserva, no obstante, la clientela de muchas milicias chiíes extraordinariamente armadas, pertenecientes a las Fuerzas de Movilización Popular (*al-Hashd ash-Shaabi*). Durante su escala en Ammán como huésped del soberano hachemita, donde se les unió desde El Cairo el mariscal Sissi —pilar del cártel antihermanista que señorea en Abu Dabi—, Kadhimi estableció conexión con el principal peso pesado demográfico árabe de la entente abrahámica.

Si bien Jordania, atrapada, según el juego de palabras favorito de su monarca Abdalá II, entre «*a rock* (pronunciado “Irak”) y *a hard place*» (es decir, entre el martillo iraquí y el yunque israelí), constituirá el vínculo geográfico por excelencia del acuerdo, una vez que Irak se incorpore definitivamente, la principal cuestión del Levante será el destino de Siria y de Líbano, dos Estados que en su día fueron creados y luego gobernados de concierto bajo el mandato francés de la Sociedad de Naciones en 1920, Estados donde la influencia iraní sigue siendo importante en el verano de 2020. Ankara y Teherán, socios ahora en el triple acuerdo hermano-chií, apoyaron, no obstante, campos antagónicos durante los casi diez años de guerra civil siria, enfrentamiento especialmente sangriento, que causó casi medio millón de muertos y ocho millones de desplazados internos o externos. A pesar de su «acomodo razonable» desde 2017 en el proceso de Astaná, bajo los auspicios de Moscú para iniciar la «desescalada», Turquía, por un lado, e Irán y Rusia, por otro, sacaron «recursos» humanos y políticas opuestas del conflicto, que es tan atroz y traumático como decisiva es su salida para el Levante del mañana. Por un lado, la rebelión y los soldados perdidos, fagocitados por el movimiento islámico suní en un espectro que va desde el yihadismo violentamente antichí del Dáesh hasta los Hermanos Musulmanes domesticados por Erdogan; por otro, las milicias

favorables al régimen y otros mercenarios chiíes extranjeros, instrumentalizados por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que dirigía el fallecido Qasem Soleimani.

Las zonas devastadas por las masacres, los bombardeos, las exacciones de todo tipo, la limpieza étnico-confesional, donde Moscú hizo prevalecer la solución militar a favor del régimen de Damasco, representan el principal vector de la influencia militar de la República Islámica en las costas orientales del Mediterráneo. Es donde se encuentran posicionadas las bases que Teherán tenía establecidas para enviar misiles contra el Estado judío —desde las aldeas fronterizas chiíes del sur de Líbano, bajo control de Hezbolá, hasta las plataformas de lanzamiento diseminadas entre las posiciones del Ejército de Ásad en los territorios cercanos a los Altos del Golán, reconquistados a los insurgentes—. Las poblaciones locales están sumidas en una insondable depresión económica, agravada por un desmoronamiento social transformado en catástrofe abismal por el coronavirus. Las autoridades ocultan la extensión de la epidemia, pero un informe de la London School of Economics del 4 de agosto de 2020 estima que unos dos millones de personas estarían infectadas en toda Siria a finales de ese mes. El nuevo eje de prosperidad israelí-emiratí, a la espera de las inversiones de una Unión Europea más timorata y que tiene ya bastante que hacer para superar los efectos de la pandemia a domicilio, constituye evidentemente un polo de salvación para salir del abismo sin fin, permitiendo incluso a Moscú (que aplaudió el Acuerdo de Abraham) minimizar el coste de su presencia en Siria, como más abajo veremos. Pero la salida, después de la de Irak, de Siria y de Líbano de las garras de Irán representaría una debacle geoestratégica para el régimen de Teherán, que vería socavado su principal medio de chantaje al sistema internacional, es decir, su capacidad militar para perjudicar al Estado judío.

Para los propios Emiratos Árabes Unidos, el acuerdo con Israel —además de sus efectos inducidos a medio y largo plazo— es especialmente bienvenido desde el punto de vista coyuntural, ya que la covid-19 ha tenido el efecto de obstaculizar la cadena de suministros europea, africana y árabe con China, cuya ciudad mercantil global de Dubái ha sido uno de sus principales centros de distribución desde principios de siglo. Para el verano de 2020 amenaza el espectro de la quiebra y los coyunturistas económicos estiman que el 70 % de las empresas tendrían que cerrar, mien-

tras que los trabajadores inmigrantes asiáticos regresan a sus países de origen en vuelos chárter, arruinados por meses de salarios impagados. Las aerolíneas emblemáticas Emirates y Etihad Airways, símbolos orgullosos de insertar el pabellón nacional en el corazón de la globalización sinizada de mañana, han tenido que despedir a mucha más gente, obligando a sus tripulaciones de tierra y de vuelo a tomar permisos no remunerados en otoño, para intentar limitar las pérdidas, mientras que en el pasado reciente se esforzaban por arruinar a sus competidores europeos, recapitalizados por los gobiernos de la Unión Europea. Para conjurar ese destino nefasto, el 31 de agosto se pone en marcha el primer enlace aéreo entre el aeropuerto Ben Gurión y el de Abu Dabi, con una amplia delegación israelí a bordo, así como varios enviados estadounidenses a Oriente Medio, encabezados por Jared Kushner, yerno del presidente. La prensa emiratí elogia con tal motivo al Estado hebreo por haber sabido sobrevivir, durante las últimas siete décadas, a todos los peligros procedentes de los territorios aledaños y haber prosperado gracias a la temprana inversión en tecnologías de la información y la comunicación, y manifiesta su deseo de que se aprenda la lección para el desarrollo del país, después del petróleo y frente a Irán. Si la entente abrahámica toma forma, la subcontratación en Dubái de alta tecnología israelí podría incluso constituir (repatriando la mano de obra asiática, que fue expulsada contundentemente en el segundo trimestre de 2020) un sustituto manufacturero de la producción electrónica china, considerada ahora con recelo por los Estados occidentales, que se preocupan por su dependencia política con respecto al imperio post-maoísta de Huawei, comprometido en la carrera por la supremacía tanto digital como bacteriológica del planeta.

En cuanto a Abu Dabi, emirato donde se sitúan los más importantes recursos petrolíferos, aunque ha activado la transición posthidrocarburos, y aunque su gasto presupuestario limitado debido a la escasa población (tres millones de habitantes, de los cuales cerca del 75 % son expatriados) ha permitido reservar considerables recursos en su fondo soberano ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), el mayor del mundo, con una capitalización estimada antes de la crisis de 2020 en ochocientos setenta y cinco mil millones de dólares, no deja de estar relativamente debilitado por el desplome del barril, y tanto más dispuesto a invertir en alta tecnología israelí.

Frente a las críticas árabes que acusan de «traición» al príncipe heredero, el jeque Mohamed, cuyo padre, el jeque Zayed (fallecido en noviembre de 2004), fundador y primer presidente de la federación de los Emiratos Árabes Unidos, fue, en los tiempos pasados del nacionalismo árabe, un defensor inquebrantable de la causa palestina, a Abu Dabi se le responde que, a cambio del acuerdo, el Estado hebreo renunció al proyecto de anexión parcial de Cisjordania (algo que Netanyahu cuestiona, ansioso por proteger el voto de los colonos, que constituyen el meollo de su electorado). También se arguye que Jerusalén dejará de obstaculizar el encargo de la petromonarquía de cazabombarderos estadounidenses furtivos Lockheed Martin F-35, competidores del Rafale de Dassault por la supremacía aérea. «Bibi» desmintió con vehemencia en un primer momento que eso estuviera incluido en el acuerdo, ya que mantener una ventaja militar regional cualitativa es crucial para la seguridad del Estado judío, y semejante concesión le haría correr el riesgo de perder muchos de sus votos. Tras algunos destellos de esperanza en ese sentido en Estados Unidos, donde la industria aeronáutica se regocijaba ante la perspectiva de enormes contratos, tanto el entorno de los candidatos republicanos como el de los demócratas para las elecciones presidenciales de noviembre refutaron cualquier rechazo de ese compromiso con Israel, por miedo a perder —ellos también— el voto judío y el apoyo versátil de los *lobbies* sionistas o evangelistas. Por último, como veremos más adelante, la financiación por parte de Abu Dabi de una deuda de Sudán con Estados Unidos para compensar los atentados de Al Qaeda contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia, en agosto de 1998, y permitir que Sudán se adhiera a la entente abrahámica es lo que hará que desaparezcan las prevenciones.

Para el socio israelí en el Acuerdo de Abraham, sumido en el momento de la firma en una crisis social y sanitaria debida a la segunda oleada de la pandemia, no prevista y mal gestionada por el Gobierno, y afrontando las vicisitudes judiciales que se extienden hasta el primer ministro y que amenazan la permanencia de este en el cargo si tuviera que dedicar gran parte de su agenda a defenderse ante los jueces, la operación parece ser un salvavidas. En el caso de una cuarta elección anticipada y sucesiva a la Knéset, este último se enfrentaba a sus promesas de anexión de una parte de Cisjordania para beneficiarse del voto de los colonos, pero amenazado por los

riesgos de la explosión regional que habría sido una consecuencia probable. El acuerdo, cuya autoría en lo que respecta al Estado hebreo reclama con razón (porque dirigió las conversaciones en secreto, con el jefe del Mosad, sin que lo supieran sus rivales y los ministerios correspondientes, que dirigen Gantz en Defensa y Ashkenazi en Asuntos Exteriores), le da un respiro político y le devuelve el estatus internacional de estadista visionario al justiciable en situación de prórroga trapacera, retrasando finalmente su comparecencia ante los tribunales. Además, debe hacer frente a la catástrofe social provocada por la covid-19, que lo obliga a distender las restricciones presupuestarias, amenazando con ello los equilibrios económicos: el 2 de agosto, Netanyahu, hasta ese momento vocero del hiperliberalismo a lo Milton Friedman, pero enfrentado a las violentas manifestaciones de personas que habían perdido sus empleos a causa de la pandemia y acechado por el espectro de las próximas elecciones, se convierte de la noche a la mañana al keynesianismo socialdemócrata y compromete mil setecientos sesenta millones de dólares en subsidios de ochocientos dólares mensuales por familia —y más aún para la numerosa prole de los jaredíes, los ultraortodoxos judíos, cuyos votos son muy valiosos para él—. Con lo que se gana los gritos de los guardianes de la ortodoxia... presupuestaria, espantados por cómo van a reaccionar los mercados. La esperada bonanza de las inversiones emiratíes en tecnología israelí sirve ya para generar optimismo.

Más allá del caso personal de «Bibi», el acuerdo entierra el «conflicto árabe-israelí» como factor estructurante en Oriente Medio, inaugurando en su lugar el enfrentamiento entre la entente abrahámica y el triple acuerdo del eje hermano-chií. Sin embargo, Jerusalén conserva varios ases en la manga, empezando por sus antiguas relaciones diplomáticas con Turquía, reforzadas por importantes flujos comerciales, sean cuales sean las vicisitudes: los desplantes de Erdogan amenazando con retirar a su embajador de Emiratos fueron objeto de burla *in situ*, donde se recuerda que Ankara reconoce al Estado judío desde su creación, en 1949/50. En cuanto a Catar, el mismo jefe del Mosad, recibido con gran pompa en Abu Dabi al día siguiente del histórico acuerdo, ya había ido algo más discretamente seis meses antes, el 5 de febrero de 2020, en compañía del comandante del frente sur (a la altura de Gaza), el general Herz Levi. Yossi Cohen había instado al emir Tamim a seguir transfiriendo fondos a... Hamás —vilipen-

diada, sin embargo, en Tel Aviv como entidad terrorista y delegada de Irán—. Un estallido social en la banda asediada obligaría efectivamente al Tzáhal a llevar a cabo una costosa represión, desfavorable para la imagen del Estado judío en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las subvenciones de Doha a Gaza ya habían superado los mil millones de dólares desde el levantamiento de 2014 y la destrucción causada por la respuesta israelí, conocida como «Operación Borde Protector». El emirato del gas, desempeñando su papel de banquero de los Hermanos Musulmanes (cuya rama palestina es Hamás) en todo el mundo, le sirve así al mismo tiempo de rocambolesca variable de ajuste a la política israelí... Y, en paralelo, admite en Al-Udeid la principal base aérea estadounidense del mundo fuera de Estados Unidos, cuyos aviones pueden despegar en cualquier momento para vitrificar a Irán, aliada de Doha en el eje del triple acuerdo hermano-chií...

Las potencias globales en torno al Mare Nostrum

En Estados Unidos, donde Donald Trump se ha enfrentado a críticas recurrentes sobre el «desentendimiento estadounidense» en Oriente Medio, creando con ello un vacío estratégico propicio para los enemigos de Occidente (véase el artículo de Richard Haass en la revista *Foreign Affairs*, citado anteriormente, pág. 32), la iniciativa queda inscrita, como era de esperar, en el balance halagador que el presidente esboza de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Y hasta se atreve a lanzar una broma inmodesta diciendo que le habría gustado que se llamara «el Acuerdo de Donald» (en lugar de «de Abraham...»), y lo presenta como la culminación grandiosa de una estrategia para debilitar a Irán, iniciada con la retirada estadounidense del acuerdo nuclear (PAIC) el 8 de mayo de 2018, y de las sanciones que afectaron profundamente a la República Islámica desde ese momento. Hablando la víspera de la convención demócrata que nombra a Joe Biden como su oponente presidencial, y en la que interviene el antiguo secretario de Estado de Obama, John Kerry, que reflexiona sobre el PAIC, del que fue uno de los creadores, fuerza incluso a la prensa liberal, que normalmente no le es muy favorable, a elogiar el acuerdo. Con ello espera alejar del candidato demócrata el apoyo de una

gran parte del electorado judío, engañado por la iniciativa; la esperanza resultará vana.

La situación le permite al 45.º presidente disimular oportunamente las fructíferas relaciones de negocios entre su familia y la del líder fuerte de Ankara —el abandono de los kurdos, muy útiles en 2017, cuando había que morir sobre el terreno frente a los yihadistas del Dáesh, en Raqa, la entrega de Afganistán a los talibanes— y mostrar a los votantes que su deseo de «castigar a Irán» lo comparten actores regionales. Puede delegar en ellos las operaciones militares sin poner en riesgo la vida de jóvenes estadounidenses, cuyas familias depositarán en las urnas una papeleta crucial. Tal fue el caso ya en 2016, cuando los estados demócratas del «cinturón de óxido» —Wisconsin, Michigan y Pensilvania, donde muchos jóvenes que servían en el Ejército y en las empresas de seguridad de Oriente Medio habían muerto o regresado discapacitados— le aseguraron la victoria en el colegio electoral y le entregaron la presidencia, gracias a su defensa de la retirada de las tropas de la región, frente a una Hillary Clinton más explícitamente belicista.

Para los demócratas, ese éxito del «Acuerdo de Donald», que se dejó sentir en la opinión pública mucho más allá del apoyo tradicional del Grand Old Party, planteó un problema de posicionamiento. Barack Obama, cuyo candidato Biden fue vicepresidente durante los dos mandatos, había prolongado su apoyo a los «levantamientos árabes» democráticos de 2011 por compromiso con los Hermanos Musulmanes, sentidos por entonces en la Casa Blanca como la síntesis ideal entre ética islámica y espíritu del capitalismo —de la que Erdogan era, en esos días de ingenuo entusiasmo occidental, el sonriente parangón—. Aunque las simpatías del 46.º presidente, representante de Nueva Inglaterra desde hace tres décadas, se dirigen más bien a los griegos, cuyos descendientes inmigrados están eficazmente organizados como grupo de presión en el noreste estadounidense, este tendrá que montar arbitrajes complejos con respecto al balance de su predecesor en la región. Sin embargo, la *big tent* del partido, reunida en torno a su nombre y en contra de Trump, se debate entre un electorado judío activista ya antiguo y poblaciones recientes emanadas del mundo musulmán, como la representante de Minnesota Ilhan Omar, nacida en Mogadiscio en 1982, que acude a las sesiones con velo y es un ferviente apoyo al otro lado del Atlántico del islamoizquierdismo transnacional.

En el enfrentamiento que nace entre el eje hermano-chií, por un lado, y el Acuerdo de Abraham, por otro, dos alianzas con fronteras cambiantes y obligaciones mutuas informales, las potencias mundiales —Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China— se esfuerzan más o menos por nadar y guardar la ropa según sus propios intereses, evitando un compromiso unívoco que podría terminar desembocando en un conflicto mundial. La Unión Europea, como de costumbre, manifiesta su impotencia y pusilanimidad: bajo la presidencia de la canciller alemana en el segundo semestre de 2020, mide con prudencia, en un primer momento, su empatía con los Estados miembros Grecia y Chipre ante las incursiones militares de Ankara y no expresa, exactamente igual que la OTAN, ningún apoyo a Francia en un incidente ocurrido el 10 de junio entre la fragata Courbet, que, en el marco de la operación «Sea Guardian» de la OTAN, quería inspeccionar el carguero turco Cerkin, sospechoso de transportar armas al puerto libio de Misrata, y la fragata de construcción alemana Oruç Reis (nombre turco del famoso corsario musulmán «Barbarroja»), que «enfocó» el barco francés —condición previa habitual a un disparo—.

La canciller se encuentra en una posición de debilidad frente a Erdogan, que amenaza con abrir las compuertas a los millones de sirios y otros iraquíes y afganos instalados en su país para que se precipiten a Alemania. Esa afluencia favorecería el voto por el partido xenófobo de extrema derecha Alternative für Deutschland, cuyo impulso electoral en 2019, como reacción al *Wir schaffen das* ('Vamos a lograrlo') de Frau Merkel, que acogió a un millón y medio de refugiados en 2015, debilitó la coalición de los partidos de gobierno en el Bundestag. Además, el presidente turco envió a sus ministros a Europa varias veces desde 2017, cuando se celebraban elecciones, para hacer campaña a favor de su partido islamista AKP entre los expatriados binacionales, al tiempo que los incitaba a que, cuando depositaran su otra papeleta, la europea, en la urna de su país de acogida, sancionaran a cualquier político considerado hostil o insuficientemente complaciente con Ankara. A finales de agosto, cuando la escalada en el Mediterráneo oriental roza ya el *casus belli*, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, intenta una diplomacia de lanzadera apenas fructuosa entre Atenas y Ankara, mientras que París enviaba tres Rafale a la base aérea cretense de Souda, seguidos al poco tiempo por cuatro F-16

emiratíes, disuadiendo así a la Marina turca de intentar un golpe de fuerza contra la isla griega de Kastelórizo. En esa ocasión, el acercamiento de Francia al Acuerdo de Abraham —que París aprobó y acogió con satisfacción— se puso de manifiesto concretamente con el despliegue conjunto de sus aeronaves y las de Abu Dabi.

El Gobierno italiano, por su parte, envía a su ministro de Asuntos Exteriores ante su homólogo Mevlüt Çavuşoğlu el 19 de junio, una semana después del incidente marítimo franco-turco, con el fin de «continuar los esfuerzos conjuntos por una paz duradera en Libia»: comienza así por desvincularse claramente *de facto* de Francia —donde el mismo Luigi Di Maio había realizado una visita no anunciada en apoyo a los «chalecos amarillos», el 5 de febrero de 2019, hecho que se tradujo en algo sin precedentes en París: la llamada a consultas de su embajador en el Quirinal—; la situación produce la alegría del anfitrión turco, que alaba «el papel equilibrado de Italia, al contrario que algunos países de la Unión Europea, que apoyan al general renegado (libio) Jalifa Haftar». Para Roma, Turquía, que tiene la llave del suministro de gas natural a la península italiana a través del gasoducto TurkStream, es un aliado tanto más vital cuanto que a orillas del Tíber se ha abandonado toda esperanza en la realización del gasoducto EastMed, entre Israel, Egipto y Chipre a través de Grecia, en vista de la obstrucción turca y de los precios demasiado bajos del gas en todo el mundo para asegurar su rentabilidad. Del 26 al 28 de agosto, la Marina italiana, que es la segunda más poderosa en la cuenca del Mediterráneo después de la francesa (son las únicas que disponen de portaaviones: el Cavour y el Charles de Gaulle, respectivamente, desde los que pueden despegar los F-35 y los Rafale), se unió a Francia, Grecia y Chipre para realizar unas maniobras navales conjuntas; luego lleva a cabo otras con Turquía. El «Estado profundo» transalpino, ante la creciente amenaza turca contra la Unión Europea, duda entre la solidaridad europea y una diplomacia comercial heredada de sus antiguas repúblicas marítimas, que lo inclina a buscar una estrategia de nichos económicos [MAPA 3].

Para Moscú, la alianza israelí-emiratí pone en dificultad su estrategia de «cero enemigos» en Oriente Medio [MAPA 10]. De hecho, las relaciones con Tel Aviv, al igual que con Abu Dabi, son muy buenas, pero tal es el caso igualmente con Teherán y Ankara, socios de Rusia en el mecanismo

de Astaná de mayo de 2017 —instrumento diplomático-militar diseñado para mantener a Estados Unidos y a la Unión Europea al margen de la resolución del conflicto sirio—. Sin embargo, la entente abrahámica socava y cosifica *ipso facto* su antagonismo con el triple acuerdo hermano-chií: obliga al amo del Kremlin a actuar bajo la coacción dictada por esa oposición, mientras que Vladímir Putin, desde su decisión de instalar una escuadrilla en la base aérea siria de Hmeimim en septiembre de 2015, había tomado el control sobre los occidentales, imponiéndose como protagonista en el Mediterráneo y en Oriente Medio gracias a la impericia y a los errores de la administración Obama y a la pusilanimidad de Bruselas. Eso le había permitido a Rusia volver a ser, gracias a su eficacia en la *realpolitik* (con independencia del juicio moral que se haga de ella), un actor importante en la escena internacional tras el traumático colapso que siguió a la caída de la Unión Soviética. Aunque el acuerdo anunciado el 13 de agosto molesta a Moscú por el ostentoso patrocinio de Washington, las relaciones establecidas con Jerusalén y Abu Dabi son demasiado importantes para que el Kremlin pueda poner mala cara. Pero sus otros dos aliados, Ankara y Teherán, socios en los Acuerdos de Astaná, denunciaron en términos virulentos la «traición» y la «estupidez» de un acuerdo percibido inmediatamente como hostil para ellos. Vladímir Putin se encuentra, por lo tanto, en una situación que lo obliga a salir de la lógica discrecional, incluso arbitraria, que había adoptado hasta ese momento con sus aliados regionales, antagonísticos entre sí. El eventual suministro de armas rusas a Irán —después del levantamiento del embargo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, a partir del 18 de octubre— es un elemento propicio para el contencioso entre Moscú, por un lado, y Jerusalén, Abu Dabi y Riad, por otro, ahora ya en la misma línea.

La conflictividad ruso-estadounidense —más allá de la relación personal entre los dos fuertes líderes, uno de los cuales contribuyó a favorecer la victoria del otro en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016— sigue siendo en el año 2020 una escisión estructurante para el «Estado profundo» de ambas naciones, en particular para sus servicios de inteligencia —como demostró el informe Mueller sobre la injerencia de los servicios de Moscú durante la campaña, antes de que su mayoría política protegiera a Donald Trump de las consecuencias de la investigación—. El envenenamiento de los opositores de Vladímir Putin que se fueron a Oc-

cidente o que se quedaron en Rusia —como el del disidente Alexei Navalny, que fue tratado en Berlín a partir del 22 de agosto, una de cuyas consecuencias sería la congelación por parte de la señora Merkel del gasoducto Nord Stream 2— y el asilo concedido en Moscú al «denunciante» estadounidense Edward Snowden tienen cierto regusto, anticuado pero persistente, a guerra fría. Veremos cómo, en un Oriente Medio bastante desinhibido en relación con las Grandes Potencias o lo que queda de ellas, cada Estado aprovecha la situación para favorecer sus intereses particulares, negociando con un margen de maniobra cada vez mayor. Hemos comprobado que Turquía, así como también Egipto e incluso los Emiratos, compraban o expresaban el deseo de comprar, equipos militares rusos, para gran disgusto de Estados Unidos, sin que este disponga de medios para impedirlo. La nueva guerra fría ya no se dirime tanto con Moscú como con Pekín.

El gran salto adelante chino

La lucha de China contra Estados Unidos por la hegemonía mundial adquirió en 2020 una dimensión paroxística, de la que la covid-19, o «virus chino» en palabras de Donald Trump —porque acaso saliera de un laboratorio bacteriológico de Wuhan—, es la metáfora por excelencia. También se desarrolla en el teatro de Oriente Medio, donde Pekín se ha embarcado ahora en una estrategia de influencia política y, dentro de nada, militar nunca vista antes, porque su industria manufacturera mundial se encuentra extremadamente ávida de petróleo barato y abundante, sin el cual no podría funcionar a su ritmo endiablado: China es el primer importador mundial, con diez millones de barriles diarios en 2019, antes de la pandemia [MAPA 17]. Durante las dos últimas décadas, su acción regional se limitaba al ámbito económico, aprovechando el flujo ordenado y permanente de petroleros que imponía la 5.^a Flota estadounidense con base en Baréin, en el Golfo. Según una lógica global de *dumping* favorecida por las economías de escala en un país de casi mil quinientos millones de habitantes, el imperio chino postmaoísta exportaba a cambio, como hacía en el resto del mundo, bienes de gran consumo baratos. Los financieros e industriales occidentales se habían precipi-

tado para invertir a toda costa, multiplicando los beneficios a corto plazo antes de ir quedando fuera gradualmente, verificando, tras la obsolescencia del marxismo, la veracidad del conocido adagio de Lenin de que «los capitalistas nos venderán la cuerda con la que los colgaremos». A continuación, China exportó a Oriente Medio y a África del Norte, como a todas partes, su mano de obra banal, pletórica, competitiva, hambrienta y finalmente disciplinada por medio siglo de leninismo confuciano, desde las trabajadoras del sexo hasta los obreros de la construcción, pasando por los tenderos. Eso le permitió obtener la concesión de enormes proyectos de infraestructuras, sin que ninguna legislación anticorrupción, contrariamente a lo habitual en los Estados de derecho, se lo impidiera a domicilio, y «retener» así a las élites locales prevaricadoras sin tener que gestionar sobre el terreno una mano de obra autóctona, a menudo ineficiente por la «mamandurria» de los ingresos del petróleo y sus efectos.

De modo que, en Sudán, en Yemen, en Yibuti, luego sobre todo en Argelia y ahora ya en toda la región, las empresas constructoras y de obras públicas llegan con su propio capital y sus propios trabajadores, remuneradas primero en energía fósil trocada a precios competitivos. La inmigración de un proletariado procedente del campo superpoblado del Reino del Medio —muchos de cuyos miembros echarán raíces una vez finalizadas las obras, ocupando las redes de comercios tradicionales (*hanut* en el Magreb), que se ponen a vender productos chinos— resulta paradójica en un país como Argelia, azotado por el paro y afectado por un fenómeno de emigración en masa de su juventud... hacia Francia y Europa. Esos son los efectos que se infieren de la disgregación de las empresas por la renta de los hidrocarburos. La cooperación chino-árabe, marcada por la concusión generalizada y la búsqueda frenética de beneficios inmediatos, se traduce a menudo en proyectos mal acabados, puentes y edificios que se derrumban, vías de circulación subdimensionadas y perpetuamente atascadas, capas de asfalto demasiado finas, que desaparecen en un año, carreteras que vuelven a su estado original de pista, etc. Los ejemplos abundan. Algunos casos espectaculares —como el de la «autopista este-oeste», en Argelia— darán lugar a juicios de alto nivel contra funcionarios corruptos, cuando el escándalo público amenaza con convertirse en disturbio. A lo largo de los años, se han propagado productos tecnológicos cada vez más

sofisticados a través de esa diáspora. El punto culminante emblemático es la telefonía 5G de Huawei, difundida justo antes de la pandemia de covid-19, a finales de 2019, que está siendo noticia y, al mismo tiempo, concienciando de los peligros de la irresistible sinización a escala mundial, ya que se sospecha que traslada al Gran Hermano de Pekín el control de los datos de sus usuarios en todo el planeta... cuyo monopolio tenían antes sus hermanos gemelos, los GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) estadounidenses.

Pero el principal «gran salto adelante» de China en Oriente Medio y África del Norte, en el cambio de década, fue el establecimiento de las cabezas de puente de las «Nuevas Rutas de la Seda» —más conocidas por su acrónimo americano OBOR (*One Belt One Road*)—, destinadas a establecer irremediablemente las exportaciones del Reino del Medio en una situación dominante o incluso monopolística. Una de las cuestiones más importantes es el control de los puertos a los que llegan los buques portacontenedores, cargados con todos los productos de consumo estandarizados, así como máquinas, automóviles, material informático, etc., producidos o ensamblados entre Shanghái y Wuhan. En la región, ese papel de centro de operaciones estaba prácticamente controlado por Dubái, cuya entidad gestora DP World, creada en 2005, había adquirido cuarenta y nueve terminales portuarias en todo el mundo; la mayoría de ellas, en la ruta marítima de la cadena de suministro entre China y Europa a través de la península Arábiga, por un lado, y, por otro, de China y Australia y las Américas (la mencionada empresa del Golfo se vio obligada a vender los puertos de Estados Unidos después del 11 de septiembre debido a la presión del Congreso: dos ciudadanos emiratíes estaban entre los diecinueve kamikazes). Ahora, sin embargo, China se encuentra inmersa en una competencia despiadada con los Emiratos por el control de esas rutas comerciales, competencia que está adquiriendo una dimensión más política en el contexto del enfrentamiento entre la entente abrahámica y el triple acuerdo hermano-chií, en un momento en el que Pekín está convirtiendo a Teherán, enemigo existencial de Abu Dabi y Jerusalén, en un importante punto de entrada a Oriente Medio.

Las tensiones ya eran notables entre ambos países una vez que el puerto de Yibuti, situado en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, en la

desembocadura del mar Rojo al océano Índico y una de las principales entradas a África Oriental a través de la inmensa Etiopía, cayó en manos de los chinos, cuando las autoridades locales habían contratado previamente con DP World por un período de cincuenta años, en el 2000. El resultado fue una fuerte disputa en un contexto de corrupción, un fallo desfavorable contra Yibuti por parte de la Corte Internacional de Arbitraje el 21 de febrero de 2017 y rupturas recurrentes de relaciones diplomáticas. El ahora ya afianzado control chino de las infraestructuras portuarias de la antigua colonia francesa ha dado lugar al subsiguiente vasallaje económico de Etiopía con respecto a China, una de cuyas consecuencias, tan espectacular como imprevista, es la extrema deferencia del director etíope de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, antiguo ministro de Asuntos Exteriores de su país y militante comunista en su juventud, para con el presidente Xi Jinping —la fotografía de su genuflexión cuando se reunieron, el 28 de enero, dio la vuelta al mundo—. En esencia, se acusó al director general de «celebrar la transparencia de China en sus esfuerzos por responder al coronavirus» —a pesar de la ocultación inicial por parte de Pekín tanto de las causas como del alcance del virus—, llegando a afirmar en febrero de 2020 que no había «necesidad de que el mundo tomara medidas que interfirieran innecesariamente en los viajes y el comercio internacionales», utilizando elementos del lenguaje chino. Como represalia, Donald Trump anunció en julio la retirada de Estados Unidos de la OMS.

Para Pekín, inmerso ya en una competencia planetaria exacerbada contra Washington, la conclusión con Teherán en 2020 de acuerdos leoninos para hacer de Irán una cabeza de puente de las «nuevas rutas de la seda» en Oriente Medio se inscribe en una lógica similar a la de su implantación en Yibuti —y en Etiopía—. Pero también choca frontalmente con las ambiciones de un poderoso actor regional, Abu Dabi, con el que el conflicto del Cuerno de África pasa así a tener un papel precursor. Sin embargo, el jeque Mohamed bin Zayed cuenta, tras la firma de la entente abrahámica, con un respaldo muy sólido de Bibi Netanyahu y de Donald Trump, ya que el respaldo de Xi Jinping a Jamenei se ve como el balón de oxígeno que permitiría a este último burlar las sanciones económicas estadounidenses.

La ranciedad de la media luna chií

A lo largo de la historia, Persia ha sido, en efecto, la encrucijada de las «Rutas de la Seda», introduciendo en Europa los productos agrícolas y los conocimientos técnicos del Celeste Imperio, además del precioso tejido que dio por sinécdoque su nombre a ese peligroso itinerario que atraviesa las estepas de Asia: la mesa le debe, entre tantos otros manjares suculentos, el melocotón —del latín *malum persicum*, ‘manzana persa’—... y los fideos, aclimatados más tarde en Italia con el nombre de pasta. Después de la retirada de Donald Trump del PAIC, en mayo de 2018, seguida de las sanciones económicas contra Irán, Pekín vio un nicho excepcional para sus intereses, convencido de que su formidable poder económico y su posesión de cerca de un billón de dólares en bonos del Tesoro estadounidense lo eximían de someterse a los ucases de Washington, a diferencia de la débil Europa.

Ya en su visita a Teherán el 23 de enero de 2016, el presidente Xi habló con el Guía Supremo Jamenei de la posibilidad de una «asociación estratégica global chino-iraní». Sin embargo, medio año después de la firma del PAIC en Viena el 14 de julio de 2015, el proyecto no se había movido de como estaba, ya que la República Islámica esperaba obtener muchos beneficios de la apertura a Occidente, auspiciada por Barack Obama. Este último se había *comprometido* entonces con el islam político —tanto suní como chií—, que le parecía compatible con el espíritu del capitalismo, un islam encarnado por las clases medias piadosas, con sus correspondientes barbas y velos, entronizadas como interlocutoras privilegiadas de Occidente. Después de mayo de 2018, en cambio, los dirigentes de Teherán, muy afectados por las sanciones consecutivas a la retirada estadounidense del PAIC, reactivaron el proyecto, y el 31 de diciembre de 2019 el ministro de Asuntos Exteriores, Javad Zarif, se desplazó a Pekín con esa intención. El documento resultante, de dieciocho páginas, aprobado por el presidente Rohaní y filtrado en los últimos días de junio de 2020, es indicativo de la magnitud del daño que está sufriendo la República Islámica, asolada además, entretanto, por la covid-19, a juzgar por la aceptación de las condiciones abusivas de Pekín, un remanente paradójico de los «tratos desiguales» a los que China fue sometida por el Occidente colonizador tras las guerras del Opio del siglo XIX.

La expresión europea «ir a Canosa» —que hace referencia a la suprema humillación del emperador Enrique IV de Alemania ante el papa Gregorio VII en esa ciudad italiana, en el año de gracia de 1077, cuando el soberano se vio obligado a echarse en el suelo, boca abajo, a los pies del pontífice, so pena de excomunión— se traslada al léxico persa con la referencia a los Tratados de Gulistán (1813) y luego de Turkmenchay (1828), el peor de los oprobios de la historia de ese país, que tuvo que ceder todos sus territorios del norte al Imperio de los Zares. La alusión se da en el contexto de los acalorados debates que tuvieron lugar en el Parlamento de Teherán, en julio de 2020, sobre el «Turkmenchay chino». El principal acusador entre los populistas que quieren decretar la destitución del presidente Rohaní y la inhabilitación de su ministro Javad Zarif (unos meses después del procedimiento similar del que se libró Donald Trump en Washington...) para castigar semejante fechoría no es otro que el expresidente ultraradical (2005-2013) Mahmud Ahmadineyad —conocido, entre otras cosas, por haber deseado durante su mandato «borrar Israel del mapa»—. El documento, que comienza proclamando que «dos antiguas culturas asiáticas se consideran socios estratégicos», puede hacer dudar a quienes «hicieron la Revolución para que a nadie se le ocurriera adueñarse de nuestra nación» o «ceder su bolsa [la de nuestra nación] al extranjero». El acuerdo, de veinticinco años de duración, prevé cuatrocientos mil millones de inversión por parte de Pekín, lo que le otorga el control de los sectores bancario, de telecomunicaciones, portuario, ferroviario, etc. También está prevista una cooperación militar, con cinco mil soldados destacados en Irán para proteger los intereses del concesionario, mientras que el petróleo se comercializará durante ese cuarto de siglo con un descuento de alrededor de un tercio sobre el precio del mercado mundial del crudo. El ministro de Asuntos Exteriores, acosado en el Parlamento, niega que se hayan arrendado islas en el golfo Pérsico al socio, cuya flota pesquera está ya arrasando por las noches, a título de provisión, las aguas pesqueras ricas en *hammad* —el mero local— que tanto les gusta a los chinos.

La eventual presencia de bases que se benefician de la extraterritorialidad —sin tener que retroceder en el tiempo hasta el traumatismo de 1828— trae a la memoria mucho más reciente de la «familia revolucionaria» de la República Islámica una cita del famoso sermón del ayatolá Jomeini, de 1964, que provocó su expulsión al exilio en Náyaf (Irak). El

Parlamento residual de Mohamed Reza Pahlavi había concedido inmunidad diplomática a los militares estadounidenses, sus familias y su personal de apoyo: «Si el sah atropella alguna vez a un perro estadounidense, se le pedirán cuentas. Pero si un cocinero estadounidense aplasta a la persona de Su Majestad el Sah, no se presentará ninguna queja contra él», lanzó el religioso desde el púlpito. En el asunto chino, el propio Guía Supremo Jamenei, en un discurso ante el Parlamento el 12 de julio, llama al orden a los ultras y a sus íntimos y los conmina a que guarden silencio... a quienes pueden caer en difundir entre la población la idea de que cuarenta años de teocracia de los mulás han llevado a Irán a someterse a las capitulaciones de un déspota asiático más rapaz que el Gran Satán estadounidense. Como mínimo, el famoso lema: «Ni Occidente ni Oriente: ¡Revolución Islámica!» —blasón del poder— no es ya más que jirones, a imagen de la ideología que estructuraba el régimen.

Lo que desencadenó el proceso de debilitamiento de la República Islámica en el año 2020 fue el asesinato, el 3 de enero, del satrapista Qasem Soleimani, un Artafernes moderno (Irdapirna en persa) que, según Heródoto en el 500 a.C., tenía una autoridad que se extendía a «todos los países marítimos de Asia» [MAPA 9]. El jefe de la Fuerza Quds, personalidad muy popular en Irán, podía personificar la transición hacia un régimen más nacionalista que ideológico y asegurar su perennidad, según el modelo encarnado por el poder chino postmaoísta de Xi Jinping, o incluso por la síntesis islamo-panturánica de Tayyip Erdogan. Su extraordinario carisma, comparable al de las estrellas locales del pop, que se reflejaba incluso en la venta de platos con su efigie en los bazares, y su talento como negociador con sus homólogos de los servicios de inteligencia estadounidenses durante la ocupación de Irak, a partir de marzo de 2003, le dieron acaso una excesiva sensación de inmunidad. Sin embargo, poco después del nombramiento de Mike Pompeo al frente del Departamento de Estado, este lo había «puesto en la diana», citándolo por su nombre, en un discurso del 21 de mayo de 2018 ante el *think tank* conservador Heritage Foundation, en Washington: «Irán no ha hecho más que avanzar por Oriente Medio desde la firma del PAIC [14 de julio de 2015; retirada de Estados Unidos: 8 de mayo de 2018]. ¡Qasem Soleimani ha jugado con el dinero del Congreso para convertirlo en dinero manchado de sangre! ¡La riqueza creada por Occidente ha financiado sus campañas militares!». Su muerte, en

compañía de Abu Mahdi al-Muhandis, principal responsable de las milicias iraquíes enfeudadas a Teherán, al salir del aeropuerto de Bagdad cuando venía a sofocar la revuelta de la juventud chií contra el saqueo de los recursos petrolíferos del país por parte de su soberano bajo sanciones estadounidenses, representa un importante punto de inflexión y deja tocada la estrategia expansionista de la República Islámica hasta los confines del Mediterráneo. Primero en Irak, donde su pálido sucesor se muestra incapaz de movilizar los apoyos político-militares de Irán para influir en el nombramiento del primer ministro. Más aún, las autoridades iraníes se ven obligadas a hacer de tripas corazón cuando Al-Kadhimi, nombrado el 7 de mayo, inició el 21 de julio en Teherán su serie de contactos internacionales que lo llevarían a Washington y a Ammán, a la espera de la visita de Emmanuel Macron a Bagdad, el 2 de septiembre. Al-Kadhimi declaró que su Gobierno buscaba el modo de mejorar la relación con Irán «sobre la base de la no intervención en los asuntos internos de ambos países», fórmula muy sabrosa para todo el que conoce el alcance del intervencionismo persa en ese Estado árabe de mayoría chií, intervencionismo que volvió a manifestarse durante la visita por la exigencia del Guía Supremo Jamenei de que todas las fuerzas estadounidenses aún posicionadas en Irak fueran expulsadas lo antes posible, porque «su presencia es causa de inseguridad». El presidente francés, por su parte, primer dirigente occidental en visitar Bagdad desde la asunción de funciones de Kadhimi, le expresa su apoyo en «el rechazo de cualquier intervención extranjera que pudiera socavar los esfuerzos puestos en marcha por su Gobierno» —apuntando tanto al vecino iraní como al resurgimiento del Dáesh, que aprovecharía el conflicto entre Teherán y Washington para reconstruir una capacidad de causar daños, por la que Francia ha pagado un alto precio con los atentados terroristas en su suelo, en 2015-2016.

El deterioro de la posición regional de la República Islámica, cuyo símbolo y, al mismo tiempo, desencadenante está constituido por la muerte de Soleimani, se tradujo en una importante recalibración de su estrategia, a raíz del giro de la guerra civil en Siria a favor de Bashar al-Ásad, especialmente entre 2017 y 2018. El compromiso masivo con el régimen, en efecto, desempeñó un papel esencial para garantizar su supervivencia cuando, en los años 2012-2013, habría perecido de no ser por la llegada al campo de batalla desde Irak, Pakistán o Afganistán de las aguerridas

tropas del Hezbolá libanés, de la Guardia Revolucionaria iraní y de las restantes fuerzas supletorias chiíes. En la lógica «satrapiana» del difunto jefe de la Fuerza Quds, basada en la cohesión a toda costa de la continuidad de la media luna chií, se dio prioridad absoluta a la lucha contra los *takfiris* ('anatemizadores'), denominación polémica de los islamistas radicales suníes que encarnaba por excelencia el Dáesh, organización alimentada por el odio antichí. Antes de la guerra civil del Sham, en cambio, durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, la República Islámica había concedido asilo atemperado con arresto domiciliario a numerosos dirigentes perseguidos de Al Qaeda; entre ellos, a un hijo de Bin Laden, Saad, y al antiguo oficial de las fuerzas especiales egipcias Saif al Adel, a la sazón número tres de la organización yihadista (donde se rumoreaba que podría ser incluso el candidato de Teherán a la sucesión de Osama). En la misma línea, el 23 de noviembre de 2020 se anunció en la prensa que el pasado 7 de agosto había muerto Abu Mohamed al-Masri, mano derecha del jefe de Al Qaeda, Ayman al Zawahirí, en un atentado atribuido a los servicios de inteligencia israelíes. Según varias fuentes, había vivido en la República Islámica desde 2002. Además de las complejas relaciones de los mulás con el yihadismo suní que la ejecución sugiere, es oportuno no olvidar que los Hermanos Musulmanes radicales, empezando por su principal ideólogo Sayid Qutb, torturado por Nasser en 1966, inspiraron a los islamistas chiíes, tanto iraquíes como iraníes, según recuerda un sello de correos en homenaje al «mártir», representado entre rejas antes de su tortura, emitido por Teherán ya en 1984. Hamás, la sección palestina de la internacional de los Hermanos, en el poder en la Franja de Gaza desde 2007, gozaba de un importante apoyo político, militar y financiero. Representaba, junto con su gemelo chií de Hezbolá en el Líbano, el yunque y el martillo entre los que el régimen de los mulás, por proyección de poder, había atrapado al Estado hebreo por el sur y por el norte. Cuando Hezbolá entró en Siria, en 2012, para salvar el poder de Ásad y asegurar la continuidad territorial de la media luna chií, la posterior ruptura con los Hermanos y con Hamás obligó a la organización palestina a abandonar precipitadamente los locales que ocupaba en Damasco su oficina política en el exilio. Esa opción de *realpolitik* encarnada por Qasem Soleimani, que hizo prevalecer el territorio por encima de las afinidades ideológicas, tuvo como efecto el aislamiento del poder iraní del islamismo árabe suní,

masivamente comprometido en la rebelión contra el «hereje» alauí Bashar al-Ásad. De ese modo, la capacidad para movilizar al conjunto de los musulmanes siguiendo una línea radical antisionista quedó considerablemente mermada: después de la guerra de los Treinta y Tres Días del verano de 2006, en la que Hezbolá mantuvo en jaque la ofensiva del Tzáhal en el sur del Líbano, Teherán se había visto aureolada de un inmenso prestigio, tanto entre los jeques suníes más retrógrados de la península Arábiga como entre los cristianos libaneses de izquierdas más progresistas. Pero ese tiempo ya pasó. La intervención en Siria a partir de 2012 dejó a la República Islámica aislada de la mayoría de los árabes suníes, fuera de la «media luna» de sus vasallos.

En este contexto, el cuestionamiento del PAIC, compromiso de campaña de Donald Trump en 2016, que había prometido «romper» el tratado, anunciaba una confrontación con Estados Unidos en la que habría que aumentar los pactos por detrás para salir de la espléndida soledad persa y chií. La firma en mayo de 2017 de los Acuerdos de Astaná, creando un mecanismo de diálogo y de cooperación con Turquía —bajo los auspicios del Kremlin—, permitió dar un paso en esa dirección, empezando a saldar las cuentas de la guerra civil siria, previo al futuro triple acuerdo hermano-chií, cuyo banquero sería el emirato árabe y suní de Catar.

Para culminar el proceso, sin embargo, era importante volver a convertir a Israel —y no ya a los islamistas suníes— en el enemigo emblemático, con la esperanza de contar con apoyos antiimperialistas en una vasta nebulosa «islamoizquierdista» internacional que comprenda a muchos árabes, desde las sociedades civiles hasta los Estados, pasando por las redes de mezquitas. Eso pasaba por la reactivación de Hamás y la reorientación de las actividades militares de Hezbolá contra Israel, después de un lustro guerreando en Siria. El bloqueo de Catar a partir junio de 2017, por iniciativa de Abu Dabi y Riad, le proporciona a Teherán la ocasión de acercarse al emirato del gas y a su cadena en árabe Al-Jazeera, vector nada despreciable aún de *soft power* (aunque su público había caído considerablemente desde que se había convertido en la voz ostensible de los Hermanos Musulmanes, después de los levantamientos árabes de 2011). En esa circunstancia quedó sellado el triple acuerdo con Turquía, que envió un cuerpo expedicionario a Doha. Pero ninguna de esas medidas preventivas fue suficiente para protegerse de las consecuencias mayores de la retirada

de Estados Unidos del PAIC, en mayo del año siguiente. Los efectos se dejaron sentir en la sociedad iraní, afectada ya por restricciones de todo tipo —empezando por la imposibilidad de que la clase media viajara al extranjero, cosa que le suponía un pulmón de oxígeno, aliviando así su acritud hacia los mulás gobernantes—. En noviembre de 2019, decenas de miles de jóvenes «desfavorecidos» (clientela tradicional del régimen desde la revolución) se manifestaron violentamente en un centenar de ciudades a raíz del considerable aumento del precio de la gasolina (hasta entonces generosamente subvencionada); exigían la destitución del Gobierno. Las autoridades sintieron en el cogote el aliento del peligro y reprimieron las revueltas con mano de hierro: según un informe publicado en septiembre de 2020 por Amnistía Internacional, se utilizó masivamente la tortura contra los detenidos (unos siete mil) para hacerlos confesar que actuaban siguiendo instrucciones provenientes del extranjero. La República Islámica reconoció una cifra de doscientos treinta muertos —cifra que pudo ser cuatro veces superior, según el Departamento de Estado de Estados Unidos— y juicios expeditivos condenaron a los alborotadores como «enemigos de Dios», con penas que llegaban a la flagelación y la ejecución.

La asfixia económica de la República Islámica, por otra parte, redujo en gran medida las remesas de fondos a Hezbolá y provocó una depredación excepcional de los recursos de Irak, como ya hemos visto [MAPA 8]. La consecuencia fue que los levantamientos populares contra el control iraní sobre los chiíes de Mesopotamia desde principios de octubre —que habían causado ya a finales de 2019 más de seiscientos muertos y diecisiete mil heridos— precipitaron una crisis política que desestabilizó a los partidarios de Teherán, y el asesinato de Qasem Soleimani y de su acólito, el líder de la milicia chií local Abu Mahdi al-Muhandis, la llevó al paroxismo. Tampoco en el País de los Cedros tenía ya capacidad Teherán para garantizar los mismos niveles de financiación que antes a Hezbolá, su estructura armada y su inmensa red de caridad. Esa caída de los ingresos de muchos libaneses chiíes pobres, unida a la exasperación del conjunto de la población ante la incuria de la clase política de todas las confesiones —pero que había pasado desde las elecciones de junio de 2018 bajo el control del Partido de Dios y, por lo tanto, de Irán, a manos de quienes se consideraba responsables por excelencia—, los puso en una situación complicada. El levantamiento popular, conocido como la «revolución (*thaura*)

del 17 de octubre de 2019», apuntaba explícitamente a Hezbolá, y llevó incluso a que se hablara contra su dominio en su bastión de los «suburbios» (*dahiyé*) del sur de Beirut, antes de que sus secuaces y milicianos reprimieran violentamente cualquier atisbo de disensión en las filas chiíes. En ese contexto degradado, al que vino a sumarse la epidemia de covid-19, traída por primera vez a Líbano por los peregrinos que regresaban de los focos de contagio iraníes de Qom y Mashhad, al cataclismo de la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto —doscientos cuatro muertos, seis mil quinientos heridos, trescientas cincuenta mil personas sin hogar— lo siguió la dimisión del Gobierno de Hasan Diab, primer ministro suní, títere de Teherán a través de Hezbolá [MAPA 13]. Con ocasión de la segunda visita estival consecutiva de Emmanuel Macron al País de los Cedros en 2020, el 1 de septiembre (centenario de la proclamación del Gran Líbano por el general Gouraud), mientras el presidente francés, portavoz *de facto* de los acreedores internacionales, exigía una reforma de la gobernanza para reconducir créditos, el embajador Mustafa Adib, personalidad suní independiente, fue nombrado primer ministro, con un objetivo en su hoja de ruta: formar un Gobierno en quince días (sus predecesores habían empleado varios meses de negociaciones interconfesionales y de reparto de prebendas para conseguirlo). Teherán no tuvo capacidad para poner de entrada ningún obstáculo —Hezbolá se abstuvo—, caso concreto que evoca el acceso al cargo de primer ministro de Kadhimi en Bagdad, el 7 de mayo anterior.

Esas retiradas tácticas de la República Islámica en dos relevos cruciales de la media luna chií tenían cierta dimensión de *taqiyya* (o *ketman*) —la «ocultación de los objetivos en posición de debilidad», o la hipocresía piadosa, propia de una fe que ha sobrevivido frente a la opresión suní durante quince siglos—. Y, de hecho, la oposición de los partidos chiíes libaneses teledirigidos por Teherán aborta el Gobierno de Adib el 26 de septiembre, desatando la ira de Emmanuel Macron, mientras se aprovechan las turbulencias de la campaña electoral estadounidense para tratar de desestabilizar el Gobierno de Kadhimi, alentando a las milicias proiraníes a lanzar misiles contra objetivos asociados a los intereses estadounidenses en Irak desde finales de ese mismo mes [MAPA 9]. Por el contrario, la posición de la República Islámica es más compleja en Siria, donde tiene que contar con un socio menos sensible a sus presiones: Rusia. La presen-

cia iraní en el sur del país, que hizo posible el lanzamiento de misiles contra Israel, es un *casus belli* para Washington: en particular, hace totalmente impensable el desarrollo del *Caesar Act*. Esa «Ley de César», llamada así por el apodo de un fotógrafo que desertó del Ejército de Bashar al-Ásad y proporcionó miles de imágenes insoportables que documentaban las torturas de los prisioneros en las cárceles durante la guerra civil, se pone en marcha el 17 de junio de 2020. Sanciona severamente a cualquier entidad que prestara ayuda, sobre todo financiera o comercial, al régimen sirio, con el fin de obligarlo a liberar a los presos políticos, poner fin a la violencia contra los civiles y permitir la vuelta a la normalidad en Siria, según la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de diciembre de 2015 —resolución que deja abierta, a cambio de su aceptación por parte de Moscú, la naturaleza del futuro poder en Damasco—. Ahora bien, para Vladímir Putin, el éxito militar en Siria corre el riesgo de convertirse en una victoria pírrica y de suponer un pesado lastre para las finanzas rusas si no se encuentra ninguna solución política, tanto más cuanto que las sanciones previstas en la mencionada ley César impedirían cualquier contribución o inversión de Occidente o de las petromonarquías en la reconstrucción. Tal es el objetivo de la visita de Serguéi Lavrov a Damasco el 8 de septiembre, la primera desde 2012, acompañado de una amplia delegación [MAPA 10]. El objetivo del ministro de Asuntos Exteriores es que el régimen se desvincule lo más posible de Teherán y que, a continuación, mediante la liberación de los presos políticos y conciertos con la oposición, se lleven a cabo avances hacia el sentido que marca la resolución 2254. Eso permitiría prever un proceso de reconstrucción en Siria, estimado en unos cuatrocientos mil millones de dólares, en el que aliados de Estados Unidos —en particular los Emiratos Árabes Unidos— podrían comprometerse financieramente, aunque solo fuera como una prolongación del Acuerdo de Abraham. Pero la condición previa es el distanciamiento entre Damasco y Teherán. Simultáneamente, varios sitios web proirios se hacen eco de las críticas a la política iraní, calificada de «imperialista» o incluso «sasánida» o «chauvinista persa», cuando en su día estaba impulsada por el antiimperialismo y el antisionismo...

Después del asesinato de Qasem Soleimani, en enero de 2020, la multiplicación de esas disfunciones en las relaciones de soberanía que el difunto había construido con sus vasallos de la media luna chií, agravadas por

la difusión exponencial de la covid-19 en Irán [MAPA 4], sobre un fondo de descontento social recurrente, se vio amplificada aún más por la firma de la entente abrahámica entre Israel y los Emiratos, bajo auspicio estadounidense, prolongado por el creciente distanciamiento de Kadhimi de su intruso vecino oriental. Si, en el pasado, Teherán y sus acólitos fueron capaces de utilizar el terrorismo para imponer un equilibrio de poder —desde la toma de rehenes de la embajada estadounidense en 1979-1980 hasta los atentados contra los contingentes estadounidenses y franceses de la Fuerza Multinacional de Interposición en el Líbano, el 23 de octubre de 1983—, las incógnitas internas y globales son escasamente propicias para acciones de ese tipo: las elecciones presidenciales en Estados Unidos e Irán, el 3 de noviembre de 2020 y el 18 de junio de 2021, respectivamente, representan un asunto que un brote terrorista podría perturbar en sentido contrario a los intereses iraníes. Pero todo lo que pueda dificultar la reelección de Donald Trump es bienvenido por parte de la teocracia chií, sean cuales sean los retos existenciales con los que se encuentre la República Islámica, cuestionando su propia viabilidad. Cuando aumenta la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos, y mientras el comandante del CENTCOM (Mando Central, que incluye Oriente Medio, desde Egipto hasta Irán, así como África Oriental y el sudoeste de Asia), el general McKenzie, anuncia el 9 de septiembre que el número de soldados estadounidenses desplegados en Irak pasará de cinco mil doscientos a tres mil antes de finales de mes, las milicias chiíes proiraníes reanudan los bombardeos contra las bases para dar a esa retirada la imagen de una derrota y amenazar a los aliados de Estados Unidos tanto en Bagdad como en Erbil [MAPA 8]. El 26 de septiembre, las milicias respaldadas por Teherán lanzan misiles cerca del aeropuerto de la capital iraquí, causando la muerte de cinco civiles. El día 30, por otra parte, las tropas estadounidenses acantonadas cerca de la capital del Kurdistán autónomo son el blanco de seis misiles disparados por una brigada de las Unidades de Movilización Popular conocida por sus vínculos con la Organización Badr, emanadas de los Guardianes de la Revolución iraní. En respuesta, el secretario de Estado Mike Pompeo amenaza con cerrar la embajada de Estados Unidos si el Gobierno iraquí no toma las medidas necesarias para detener los ataques contra los intereses estadounidenses en el país. Mientras se anuncia el contagio de Donald Trump por la covid-19

y, seguidamente, su hospitalización, aumentando las turbulencias e incertidumbres de la campaña electoral e inhibiendo el proceso de toma de decisiones en Washington, la República Islámica ve en el acoso que llevan a cabo sus afines iraquíes contra las tropas estadounidenses la oportunidad de recordar que conserva, a pesar de todos los avatares, sólidos medios de acción en Irak y que el giro de ese país hacia la entente abrahámica está lejos de ser una realidad. Teherán, que se encuentra acorralado, juega con su capacidad para molestar —que no debería subestimarse—. En 2017, antes de las sanciones, Irán exportaba dos millones doscientos mil barriles al día, lo que le proporcionaba unos ingresos anuales de cincuenta y cinco mil millones de dólares. En 2019 solo vendía seiscientos cincuenta y un mil barriles diarios por diecinueve mil millones. El crecimiento de la economía en 2016, gracias al PAIC, había alcanzado el 12,5 %. Entre las sanciones, la covid-19 y el hundimiento del mercado del petróleo, se calcula que la contracción del PNB, que había caído a -7,6 % en 2019, seguiría desplomándose en 2020.

*De la energía fósil al hidrógeno verde:
la vía angosta de Arabia Saudí*

El 31 de agosto de 2020, el primer vuelo comercial El Al LY971 inaugura la ruta Tel Aviv-Abu Dabi en tres horas [MAPA 1], con un ramillete de dignatarios estadounidenses e israelíes a bordo encabezados por Jared Kushner, yerno de Donald Trump y su principal asesor para Oriente Medio —vilipendiado al día siguiente por el Guía Supremo Jamenei como «el judío de la familia de Trump», que forma parte de los «elementos perniciosos (*jabiith*) de Estados Unidos, que actúan en contra de los intereses del mundo islámico»—. La nueva ruta aérea fue posible gracias a la decisión de Arabia Saudí de permitir el paso por su espacio aéreo de todos los vuelos con origen o destino en Emiratos —espacio que, desde el bloqueo impuesto al emirato del gas por Abu Dabi y Riad en junio de 2017, sigue estrictamente cerrado para los aviones con origen o destino en Catar—. La decisión, elogiada en términos entusiastas por un tuit de Netanyahu, refleja la aprobación *de facto* por parte de Mohamed bin Salmán del proceso de normalización entre el Estado judío y la petromonarquía. Pero el

príncipe heredero, al igual que todos los dirigentes árabes, se cuidó de que su ministro de Asuntos Exteriores reiterara que la seguridad de Israel pasa por el reconocimiento de un Estado palestino. Y, en ese caso, mientras esté vivo su padre, el rey Salmán, que vivió el plan Abdalá de 2002 y cuyo nombre sigue ligado a un monarca saudí, apenas parece concebible que el propio reino se una oficialmente a la entente abrahámica. El recordatorio, según hemos visto, pretende menos expresar una perspectiva realista —mientras persistan dos entidades separadas: en Cisjordania, bajo la égida de la OLP de Mahmud Abbas, y en Gaza, bajo la de Hamás— que evitar que Irán y sus aliados tengan éxito en una operación de relaciones públicas para presentarse como héroes de la causa palestina en contra de los «pérfidos» hermanos árabes, y debiliten exageradamente la OLP de Mahmud Abbas, en beneficio de Hamás. Teherán, en efecto, intenta oportunamente recuperar una integridad panislámica después de que sus fuerzas supletorias masacraran a los rebeldes suníes en Siria para salvar al «hereje» Ásad.

La cautela saudí —en contraste con el ímpetu de los Emiratos Árabes Unidos a favor de la normalización con el Estado judío— se debe, ante todo, a un importante recurso de legitimidad que el monarca obtiene, tanto en el mundo musulmán como en casa, de su condición de «servidor de los dos Santos Lugares » (*Jadim al-haramayn*): La Meca y Medina. El título, que utilizó en el siglo XI el sultán ayubí Saladino, se le concedió al que había salvado militarmente *in extremis* del peligro de las Cruzadas al mundo del islam de aquel entonces. Lo retomó el califa otomano tras su conquista de Siria y Egipto (1515-1517), para hacer valer su legitimidad frente al sah del Irán seférida. Luego cayó en desuso, hasta que el protocolo saudí lo instituyó el 28 de octubre de 1986 como nombre oficial y exclusivo de su soberano, en detrimento de «majestad» (*yalala*). A mediados de la década de 1980 se produjo una fuerte ofensiva iraní durante la Gran Peregrinación (*hach*) anual a La Meca, para desbordar y subvertir el control saudí, que imponía los ritos propios del rigorismo wahabí, eliminando el efervescente culto de los chiíes, especialmente en torno a las tumbas que se suponen del Profeta y de su familia, objeto de tan celosa devoción por parte de los interesados como de implacable censura por parte de sus denigradores. Reactivando el título frente a la rivalidad chií, Riad reiteraba la dimensión cardinal de la legitimidad islámica de la monarquía saudí. Aliviando la presión del wahabismo sobre la sociedad, sin embargo, en

particular sobre los jóvenes, y tomando luego medidas profilácticas dictadas por la pandemia de la covid, que reducen el *hach* de finales de julio de 2020 a un puñado de peregrinos debidamente separados por el distanciamiento físico, el príncipe heredero, por defecto, le permite a Erdogan presentarse como nuevo rival, como campeón universal del islam y continuador del sultán conquistador de Constantinopla Mehmet II Fatih, gracias sobre todo a la reislamización de Santa Sofía [MAPA 2]. Las multitudes de fieles entusiastas (posteriormente contagiados por la covid) que se agolpan y apiñan en torno al antiguo museo reconquistado por los seguidores de Mahoma contrastan con el vacío que transmiten las imágenes de La Meca en situación de asepsia. El publicitado encuentro entre el presidente turco e Ismail Haniya, «primer ministro» de Hamás, el 22 de agosto en Estambul, se produjo al día siguiente de la decisión de reconvertir en mezquita la joya bizantina de San Salvador de Cora, a continuación de Santa Sofía. El mismo Haniya visita el domingo 6 de septiembre, en Líbano (de donde acaba de marcharse Emmanuel Macron), el campamento palestino de Ain al Hilweh, despertando el entusiasmo de los refugiados y activistas presentes, después de que lo recibiera con gran pompa Hasan Nasrallah, secretario general de Hezbolá. Tal publicitación de apoyo a la causa palestina, en su forma islamista, es bastante indicativa del recurso que el eje hermano-chif trabaja por conseguir frente a la «traición» del socio árabe en el Acuerdo de Abraham: Abu Dabi. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores Çavuşoglu viaja a Caracas para apoyar al Gobierno de Maduro, aliado de Irán, cuyo cargamento de petróleo con destino a Venezuela acaban de incautar los servicios aduaneros estadounidenses —reforzando así a todos los niveles el triple acuerdo turco-iraní-atarí, desde la República Bolivariana hasta la Franja de Gaza— durante la semana siguiente al anuncio de la normalización israelí-emiratí. Eso amplía a escala planetaria la escisión con los campeones del Acuerdo de Abraham y permite que Ankara, Teherán y Doha se erijan en heraldos de la causa palestina, encarnada por el partido hermano Hamás, en detrimento de la OLP, y que arrojen piedras contra el tejado de los campeones del Acuerdo de Abraham, a cuyos miembros árabes se acusa en la misma tacada de haber traicionado un ideal que durante tres cuartos de siglo había sido la expresión por excelencia de su identidad. Si bien Estados Unidos denuncia la reunión de Erdogan con el jefe de una «entidad terro-

rista», a la monarquía saudí le resulta incómodo utilizar el mismo registro, so pena de arriesgarse a perder numerosos apoyos precisamente cuando el reino se enfrenta a las turbulencias de un mercado del petróleo permanentemente perturbado. Las inversiones que debían convertir la región de Al Ula, que se encuentra en las costas vírgenes del mar Rojo siguiendo las antiguas rutas de peregrinación a La Meca por tierra a través de las ruinas de las ciudades nabateas, destino emblemático para el turismo internacional, están revisándose a la baja, puesto que la covid ha paralizado los viajes internacionales por tiempo indefinido. A los expatriados que se consideran innecesarios se les rescinden los contratos y a muchos de ellos los devuelven a sus países de origen, mientras el mercado de trabajo está a medio gas, a pesar de que la movilización de la juventud activa es la base del despegue de la economía postrentista deseada por el príncipe heredero.

El proyecto futurista de la ciudad inteligente (*smart city*) Neom —situada en las fronteras noroccidentales del territorio de Arabia Saudí, cerca de Jordania, Egipto e Israel, y que disfruta de personalidad jurídica propia— es, no obstante, objeto de un gran impulso cuando, el 23 de agosto, el ministro de Energía, el príncipe Abdel Aziz bin Salmán, hermanastro del príncipe heredero, se compromete a invertir quinientos mil millones de dólares en ella [MAPA 6]. Con una superficie de unos 25.000 km², lo que se pretende es sacarle partido a su excepcional exposición al sol y al viento y transformar la petromonarquía, gracias a la combinación de energía solar y eólica a muy bajo coste, en un gigante mundial del hidrógeno verde —componente principal de la energía limpia del mañana—, con la vista puesta en 2025, piedra angular de la «Visión 2030» de Mohamed bin Salmán. Si ese plan llega a materializarse en el plazo previsto —y Arabia, sean cuales sean las vicisitudes de sus ingresos petrolíferos, tiene una capacidad de endeudamiento ilimitada en los mercados financieros internacionales—, supondrá un cambio considerable tanto para la península Arábiga, corazón de un Oriente Medio que está pasando de ser productor y exportador de materias primas contaminantes a ser un polo postindustrial de energías limpias, como para su lugar en el mundo. Más allá de la prudencia del lenguaje diplomático, se percibe la complementariedad entre esa transformación de Arabia Saudí —donde la creación de una clase empresarial permitiría superar los efectos perversos de la adicción social a las rentas del petróleo, con su correlato de improductividad y obediencia

al rigorismo islámico— y el acercamiento entre Israel y Emiratos, ratificado la semana anterior a la firma del acuerdo de financiación de Neom. Como ya hemos visto, se trata de la primera *joint venture*, económica y política al mismo tiempo, entre la alta tecnología de la *start-up nation* judía y la formidable capacidad de inversión de Abu Dabi, que también apuesta por una visión postpetrolera de su desarrollo. La futurista ciudad saudí se encuentra en las inmediaciones del Estado judío: Eilat está solo a unos 40 kilómetros de suelo jordano, bordeando el golfo de Áqaba, lo que supone tres cuartos de hora de viaje en coche, una vez que se hayan levantado las restricciones políticas al cruce consecutivo de ambas fronteras. Ejemplo de esa proximidad es la visita «semisecreta» que, según fuentes israelíes, realizó Benyamin Netanyahu, acompañado por el jefe del Mossad, Yossi Cohen, a bordo de un avión privado procedente de Tel Aviv: llegaron a la ciudad futurista de Neom en menos de media hora, la noche del 22 de noviembre. Allí se reunieron con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en una gira de despedida por la región, así como con el príncipe heredero, con el fin de protegerse ante una reorientación de la presidencia de Biden volviendo al PAIC y reanudando las conversaciones con Irán, y de presentar un frente unido entre Jerusalén y Riad. Las autoridades saudíes desmintieron el encuentro.

El devenir del reino y su lugar en el sistema internacional están estrechamente vinculados, desde los acuerdos firmados a bordo del USS Quincy el 14 de febrero de 1945 entre Franklin D. Roosevelt y Abdel Aziz ibn Saud, a su especial relación con Estados Unidos. Donald Trump, al reservar la primera etapa de su gira inaugural por el extranjero a Riad, en mayo de 2017, donde selló el pacto antiterrorista que llevaría a la caída definitiva del «califato» del Dáesh por una parte, cuya segunda consecuencia fue el cheque en blanco que Emiratos y Arabia dieron al bloqueo de Catar, se alineó resueltamente, por otra parte, del lado del príncipe heredero, sobre todo en su antagonismo con Irán. La retirada estadounidense del PAIC, un año después, hizo que Mohamed bin Salmán se sintiera plenamente satisfecho. Pero el asesinato el 2 de octubre de 2018 del periodista Jamal Khashoggi, columnista ocasional del *Washington Post*, crítico con el poder después de haber sido alguien muy próximo a él y acaso sobre todo de regreso a sus amores hermanistas de juventud por cercanía con el enemigo catari, a lo que se une un compromiso de matrimonio con una joven turca

de idéntico convencimiento —entró en el consulado de Arabia Saudí en Estambul para resolver cuestiones de estado civil previas a su nuevo matrimonio y allí mismo lo atraparon y lo asesinaron—, había hecho del príncipe heredero el objetivo preferido de la némesis de la prensa estadounidense y de la oposición demócrata a Donald Trump. A eso vienen a sumarse las condiciones de encarcelamiento y las sospechas de malos tratos sufridos por varias feministas saudíes detenidas que hicieron suya una agenda de emancipación de la mujer, agenda cuyo tempo frente al conservadurismo resiliente de la sociedad quiere controlar Mohamed bin Salmán, que permitió que las mujeres conduzcan y se quiten el velo en público. La representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, muy activa defensora del *lobby* hermanista estadounidense CAIR (sigla de Council on American-Islamic Relations), se erige en defensora de una coalición de feministas e islamistas que insta a la embajadora del reino en Washington, la princesa Rima bint Bandar al-Saud, a que les facilite información sobre tres activistas detenidas desde mayo de 2018, dos de las cuales siguen encarceladas en condiciones que preocupan a sus familiares, que creen que han sido torturadas. Los tenores del partido demócrata apoyaron la acción, incluido el congresista californiano Adam Schiff, que lideró la acusación de *impeachment* contra Donald Trump, a principios de año. El 24 de noviembre, un juez saudí anuncia que el mascarón de proa de ese movimiento feminista, Luyain al-Hadhlul, iba a comparecer ante un tribunal especializado en asuntos de terrorismo.

Yemen: la guerra sin salida

Pero el principal escollo en la relación entre la monarquía, la prensa liberal del otro lado del Atlántico, la mayoría demócrata en el Congreso y el equipo de Joe Biden es la guerra en Yemen. La intervención saudí, lanzada en marzo de 2015 por iniciativa de Mohamed bin Salmán cuando era ministro de Defensa y aún no príncipe heredero, en coordinación con Emiratos Árabes Unidos y con el apoyo de varios países árabes y occidentales, tenía como objetivo restablecer el Gobierno legítimo, expulsado de Saná, del que se había apoderado la rebelión hutí, apoyada por Teherán. Cinco años después, la situación sobre el terreno no ha cambiado significativamente

en términos militares, a pesar del armamento inconmensurablemente superior del que dispone la coalición, que controla totalmente el cielo. Por otro lado, la ONU ha calificado el contexto humanitario del conflicto, que se desarrolla con gran indiferencia habida cuenta de los conflictos de Siria y Libia, como «la peor crisis del mundo». La hambruna hace estragos en el país más pobre de la región —que limita con las petromonarquías más ricas del mundo—, donde la mitad de los niños menores de cinco años estarán desnutridos a finales de 2020. Al cólera y la difteria se ha sumado la covid-19, que se propaga a gran velocidad debido a la promiscuidad, la falta de instalaciones sanitarias y de mascarillas, en un país donde, además, los hospitales han sido objeto de múltiples bombardeos. Alrededor del 80 % de la población depende de algún tipo de ayuda humanitaria para sobrevivir, pero solo se ha cubierto una quinta parte de los dos mil cuatrocientos millones de dólares solicitados por la ONU para Yemen en 2020, prueba de la desafección internacional hacia una guerra que ha pasado inadvertida para la opinión pública, una situación agravada por los efectos de la pandemia en los propios países ricos, que ahora se muestran poco propicios a la caridad. El mayor donante, Estados Unidos, redujo bajo el mandato de Donald Trump sus compromisos: recortó setenta y tres millones de dólares de las zonas controladas por los hutíes en marzo de 2020, acusándolos de desviar esos fondos para sí mismos. Al comenzar el año 2020, la guerra civil en Yemen acaba de pasar a ser rehén a contrapié del conflicto entre Irán y Arabia Saudí. Los ataques aéreos, en efecto, alcanzaron la planta de procesamiento de Abqaiq y el campo petrolero de Khurais, en el este del reino, el 14 de septiembre de 2019. El ataque fue reivindicado por la rebelión hutí, que dice haber utilizado enjambres de drones y misiles iraníes Qods-1 ensamblados artesanalmente. La producción de petróleo saudí quedó reducida a la mitad durante unos días, provocando un efímero repunte de los precios, antes de que repararan a toda prisa las instalaciones. El mensaje político era claro, probablemente demasiado claro: la poderosa petromonarquía podría fácilmente recibir un golpe en el corazón y en la caja por sus bombardeos en Yemen. No podría soportarlo y se vería obligada a un alto el fuego en las condiciones que estipularan sus adversarios. Más allá del poco gratificante mensaje que el éxito del ataque enviaba sobre la capacidad defensiva del reino y de sus protectores estadounidenses —un centenar de cazabombarderos tienen su base en Al-

Udeid (Catar), a escasos minutos de vuelo de los objetivos—, el origen de la reivindicación quedó rápidamente puesto en duda. Los hutíes no tienen los medios materiales y técnicos para hacer volar un enjambre de drones a más de 1.000 kilómetros, alcance que también es mayor que el de los arcaicos misiles Qods que ensamblarían como pudieran en sus montañas. Las capitales occidentales señalaron inmediatamente con el dedo acusador a Irán, que apoyaba la rebelión, y más concretamente a las milicias chiíes afines del sureste de Irak, mucho más cerca de la zona de impacto, aunque no se haya hecho pública ninguna prueba tangible. En cualquier caso, la magnitud y el éxito del atentado exigían una respuesta proporcionada, y es razonable suponer que el destino de Qasem Soleimani, muy sospechoso, comenzara a grabarse en la mente de los responsables estadounidenses.

Pero, en el plano estrictamente yemení, la señal dada por los hutíes era que la continuación de la guerra tendría un precio que acabaría siendo insostenible para Arabia Saudí (incluso si otros se encargaran de adjudicarle el coste en nombre de los rebeldes que habían tomado Saná). Aunque los ataques del 14 de septiembre no les fueran atribuibles, su capacidad militar para alcanzar el territorio del reino en otros puntos se había visto considerablemente reforzada por la consolidación de la presencia sobre el terreno de la Fuerza Qods de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní y por los drones y misiles traídos desde los puertos de contrabando del océano Índico hasta los nidos de águila de los hutíes. La táctica de Teherán en Yemen era idéntica a la que había consistido en equipar a Hezbolá en Líbano con armas similares, para mantener a Israel bajo una amenaza asimétrica, una variante de la lucha de un David... chií contra un Goliat alternativamente... judío o suní. Del mismo modo, el zaidismo —confesión mayoritaria en cimas y valles del norte y del oeste de Yemen, una disidencia del chiismo que siempre había vivido en ósmosis con los suníes chafeítas locales, de orientación bastante abierta con respecto al hanbalismo saudí, hasta tal punto que las dos sectas rezaban juntas en las mismas mezquitas...— fue sometido, gracias a la cristalización de identidades hostiles durante los combates, a un adoctrinamiento masivo por parte de la ortodoxia chií iraní, cubierta por la ideología jomeiní, desde mediados de los años 2010. El chiismo libanés, cuya intelectualidad era en su día muy permeable a la izquierda árabe progresista y multiconfesional, había sufrido la misma actualización por parte de Hezbolá, a costa de

muchas liquidaciones, ya en la década de 1980. Y recíprocamente, el avance de Al Qaeda en el sur chafeí de las mesetas de Hadramut (la región de origen de la familia Bin Laden), aunque fue anterior a la aparición del movimiento hutí en el cambio de siglo, se vio impulsado por la radicalización antagónica del noroeste.

En el verano de 2019, las fuerzas progubernamentales se habían fragmentado entre el apoyo al presidente Hadi, refugiado en Riad y con poca influencia sobre sus tropas, y un Consejo de Transición del Sur, apoyado por los cuerpos expedicionarios de los Emiratos Árabes Unidos —interesados principalmente en controlar las factorías de la costa del océano Índico, conectadas con la cadena de suministro internacional de Dubái—. En agosto de 2019, los separatistas del sur apoyados por Abu Dabi se hicieron con el control de Adén y del litoral, expulsando a los partidarios del presidente y reviviendo el recuerdo del antiguo Yemen del Sur independiente (1967-1990), mientras los yihadistas proliferaban en el interior y varias tribus armadas hasta los dientes (Yemen tenía ya desde antes de la guerra una proporción de tres armas por habitante) imponían su ley en su propio territorio. En ese contexto es donde hay que situar el ataque a Abqaiq y Khurais y su posterior «reivindicación». Unos meses más tarde, Arabia Saudí, fortalecida por la liquidación de Soleimani a principios de 2020, por las dificultades económicas de Irán tras las sanciones de Estados Unidos y el enranciamiento de la media luna chií, aunque enfrentada también a la covid-19 y deseosa de salir de un avispero yemení que empañaba su imagen en Estados Unidos y en Occidente, congeló sus operaciones militares mediante un alto el fuego unilateral el 9 de abril, con el argumento de evitar la propagación de la epidemia. En las filas suníes, tras una victoria final obtenida en junio de 2020 en la isla de Socotra —antigua base soviética en la época del Yemen del Sur independiente y que controla los flujos marítimos a la entrada del mar Rojo—, el Consejo de Transición del Sur renuncia a su autonomía mediante un acuerdo firmado el 29 de julio en Riad, a cambio de un reparto efectivo del poder. Esa dinámica le permite al mediador de la ONU, Martin Griffiths, presentar un plan de paz a las partes en conflicto, que ninguna de ellas se compromete a firmar, con el fin de arrancar concesiones finales para reforzar su propia posición, pero en un contexto en el que ya ninguna cuenta con el suficiente apoyo regional para reanudar una ofensiva de envergadura. Si bien Riad

manifestó su cansancio a la hora de implicarse más en un conflicto sin salida, Teherán debe enfrentarse, en el propio Irán, así como también en Irak, Siria y Líbano, a tantos retos políticos y militares a finales de 2020, que su capacidad de proyección en una ofensiva a gran escala en Yemen resultaría demasiado arriesgada y difícil de llevar. Sobre todo, porque la presidencia de Trump mantiene la presión incluso en el interregno entre las elecciones y la toma de posesión de Joe Biden. El cerebro del programa nuclear iraní, Mohsen Fajrizadeh, cayó asesinado a tiros el 20 de noviembre, en los alrededores de la capital, a pesar de que su caravana se desplazaba protegida. La operación se imputa a «agentes israelíes», como ya se había hecho con la ejecución del número dos de Al Qaeda en Teherán, el 7 de agosto. Ambas partes, tanto en su tierra como en tierra de sus patrocinadores del Golfo, también se enfrentarán a una pandemia creciente que inhibe su capacidad de actuación, ya sea para la preparación de la guerra o para la búsqueda de la paz.

Como campo de batalla por delegación entre los campeones de las dos alianzas regionales que cristalizaron en Oriente Medio y en el Mediterráneo, Yemen está destinado a seguir siendo una zona de conflicto de intensidad media y luego baja entre ellas, hasta que una incline a su favor la balanza de la relación de fuerzas. El 14 de octubre de 2020, los hutíes liberan a dos rehenes estadounidenses en el marco de un intercambio de prisioneros, lo que supone un paso prudente para rebajar las tensiones entre ambas partes. Si bien Arabia Saudí contaba con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos —hasta que Abu Dabi antepuso sus intereses marítimos y comerciales a la solidaridad con Riad—, Irán disfrutó del apoyo de Catar, adversario de Emiratos, que resistía al bloqueo desde mayo de 2017. En el propio territorio de la península Arábiga, la pugna entre los partidarios de la entente abrahámica, por un lado, y los miembros del triple acuerdo hermano-chií, por otro, encontró uno de sus lugares de enfrentamiento más significativos.

Catar: la resiliencia del emirato del gas

El bloqueo de Catar, decidido por Mohamed bin Zayed y Mohamed bin Salmán el 5 de junio de 2017, después de la visita de Donald Trump a

Riad, constituyó, visto en retrospectiva, uno de los principales indicadores de la línea de falla que corría entre esos dos campos en el Medio Oriente —haciendo que saltara por el aire el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), creado en 1981 para protegerse de la amenaza de la República Islámica jomeinista y agresiva de Irán sobre las petromonarquías árabes vecinas— [MAPA 7]. Cuatro años después del derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en El Cairo, en julio de 2013, el «bloqueo saudí» —expresión acuñada por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, que incluía Abu Dabi, Manama y El Cairo— tomó la iniciativa de frenar, mediante la asfixia económica, al principal financiador de los Hermanos Musulmanes en toda la región y en el mundo. En el verano de 2020, sin embargo, Catar funciona sin demasiados daños gracias a los recursos de su fondo soberano, estimados en trescientos treinta y cinco mil millones de dólares en el momento del bloqueo, de los que alrededor del 10 % habría quedado repatriado por entonces para hacer frente a las consecuencias financieras del boicot, dejando unos trescientos veinte mil millones de dólares para gestionarlos tres años después. Las inversiones de Catar en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, le han conseguido una importante capacidad de presión para mitigar el impacto de las sanciones del «bloqueo saudí», utilizando, en particular, su *soft power* a través de la influencia que ha adquirido en los deportes, el entretenimiento y los medios de comunicación. En el ámbito del *hard power* asimismo, la base aérea de Al-Udeid, que es la mayor implantación de la Fuerza Aérea estadounidense fuera de Estados Unidos y el principal vector de su Mando Central (CENTCOM), tiene capacidad para recibir un centenar de aviones y diez mil soldados, pilotos y personal, principalmente estadounidenses, aunque también británicos, australianos e incluso franceses. Es la clave del dispositivo militar occidental en la región: le proporciona al Estado anfitrión una garantía de seguridad que le permitió mantenerse impávido durante el bloqueo impuesto por sus vecinos.

Más importante es la ruptura decisiva en el seno del CCEAG, que suscitó la génesis del triple acuerdo hermano-chií, en represalia contra Riad y Abu Dabi. Eso le permitió a Doha emanciparse de su alianza con las demás petromonarquías árabes de la península —que ya habían pasado por múltiples tensiones, catalizadas por las provocaciones recurrentes del canal vía satélite Al-Jazeera, contra Arabia Saudí— y acercarse a las potencias

regionales no árabes, sobre la base de una proximidad ideológica y una complementariedad tanto geoestratégica como económica.

Desde el bloqueo, Catar ha inyectado unos quince mil millones de dólares en la economía turca [MAPA 1], al tiempo que en la base militar en las afueras de Doha, base que Erdogan visitó el 25 de noviembre de 2019, se encontraban cinco mil soldados de Ankara tres años después de su construcción. Las exportaciones de Anatolia al pequeño emirato del desierto, especialmente en alimentación y agricultura, aunque también en construcción y obras públicas de cara al Mundial de Fútbol de 2022, se duplicaron a partir de 2018, superando los mil millones de dólares. El apoyo a las incursiones turcas en Siria contra las milicias kurdas es total, a diferencia de las otras petromonarquías del Golfo. En Libia, Doha se mantiene junto a Ankara para apoyar al Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), reconocido por la comunidad internacional y dirigido en Trípoli por Fayez el-Sarraj, en el que los Hermanos Musulmanes locales tienen un gran peso. El traslado de Idlib a Misrata de miles de rebeldes sirios, para convertirlos en mercenarios, y su soldada mensual de 2.000 dólares no podrían haberse financiado sin que el emirato del gas participara en la operación —tanto más cuanto que el enemigo emiratí volaba en ayuda del mariscal «felón», Jalifa Haftar, instalado en Bengasi (Cirenaica) y respaldado por el vecino Egipto del mariscal Sissi—. El 7 de octubre de 2020, el presidente turco visita el Golfo para darle el pésame al nuevo emir de Kuwait, Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah (noventa y tres años), tras el fallecimiento de su hermanastro Sabah Al-Ahmad Al-Sabah (noventa y un años), ocurrido el 29 de septiembre, prestándole así especial atención a un emirato en el que los Hermanos Musulmanes conservan una influencia significativa, cuya minoría chií es poderosa y que mantiene una posición mediadora tanto entre los hermanos enemigos árabes del Golfo como con Irán. Erdogan aprovecha la ocasión para ir a la vecina Catar y hablar con el emir Tamim, sellando el acuerdo perfecto entre los dos pilares suníes de la triple entente hermano-chií.

Si el acercamiento entre las dos potencias que comparten la ideología de los Hermanos Musulmanes a la vez que son aliados militares de Occidente puede verse a plena luz del día, el juego es más complejo en lo que se refiere a la relación con Teherán, la bestia negra de Donald Trump. Además del aprovisionamiento en algunos productos frescos, Irán com-

pensó a Qatar Airways por la prohibición de sobrevolar la península Arábiga, ya que su espacio aéreo le permitía a la compañía encontrar rutas alternativas desviadas, por un precio estimado en varios cientos de millones de dólares, incluso antes de la covid. Por otra parte, ambos Estados comparten la propiedad del mayor yacimiento de gas submarino del mundo, a caballo en sus aguas territoriales respectivas, denominado North Field por el emirato y South Pars por la República Islámica. Como esta última no puede materialmente optimizar la explotación del yacimiento debido a las sanciones estadounidenses, el acuerdo con su vecino tampoco es de dominio público. Sin embargo, en el verano de 2020, el precio de esa fuente de energía fósil, debido a la sobreproducción de gas de esquisto por parte de las petroleras que practican la fracturación hidráulica en territorio estadounidense, y debido luego a la caída de la demanda como consecuencia de la pandemia, se desplomó a la mitad con respecto al precio de julio de 2019. La caída es más importante todavía que la del petróleo, lo que augura a medio plazo una disminución considerable de los ingresos de Catar, que debe afrontar unos gastos cada vez mayores para apoyar a su aliado turco, cuya economía se está recalentando, con un presupuesto lastrado por las aventuras militares en el Mediterráneo y Siria, y con una moneda nacional en caída libre.

Por último, la organización de la Copa del Mundo de Fútbol en noviembre y diciembre de 2022, concebida como el apogeo universal del *soft power* emiratí, además de los gastos descomunales que suponen la climatización de los estadios y la financiación de la enorme infraestructura hotelera para alojar a los aficionados, en un contexto dificultado por el bloqueo de sus vecinos (que en principio debían ser un complemento para acoger instalaciones deportivas y espectadores), constituyen un quebradero de cabeza tanto más preocupante cuanto que la evolución de la covid y su impacto en el turismo internacional, cuyos operadores se están declarando en quiebra uno tras otro, siguen siendo imprevisibles. Los Juegos Olímpicos de Tokio, en cambio, previstos para el verano de 2020, se han pospuesto al menos un año. La coronación triunfal de Catar que se espera con motivo de ese acontecimiento globalizado puede convertirse en el acmé de una enfermedad característica de las petromonarquías del Golfo: la *hubris*.

II

EL ORIENTE (MUY) PRÓXIMO

El 10 de septiembre de 2020 se reúne en Ajaccio, prefectura de la región de Córcega, una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los siete miembros mediterráneos de la Unión Europea de cultura grecolatina (Med 7): Portugal, España, Francia, Italia, Malta, Grecia y Chipre (sin Eslovenia ni Croacia [MAPA 3]). Esa poco conocida «alianza del sur» reúne a sus líderes en respuesta al gran desafío que Ankara plantea a Grecia y Chipre, cuyas aguas territoriales resultan violadas con regularidad, y a Francia, una de cuyas fragatas, la Courbet, fue amenazada por un buque de guerra turco el 10 de junio, frente a Libia.

El organismo se creó en Atenas, cuatro años atrás, por iniciativa del entonces primer ministro griego, Alexis Tsipras, dirigente del partido Syriza (una coalición de la izquierda radical), cuando su país se encontraba bajo tutela de Bruselas a causa de la crisis de su deuda soberana. La larga purga —la economía del país no se recupera realmente hasta 2019, y el dirigente de la Nueva Democracia (partido de la derecha), Kyriakos Mitsotakis, se convierte en primer ministro el 9 de julio, tras su aplastante victoria en las elecciones legislativas— se hizo necesaria por la disfun-

ción de un Estado que es víctima de un fraude fiscal masivo, de la persistencia de una amplia economía informal, así como de un sector público hipertrofiado, características que se dan más... en Oriente Próximo que en la Unión Europea. Las condiciones draconianas —y a veces erráticas— de la «medicación» europea, cuyo resultado fue finalmente afortunado, habían favorecido como reacción la victoria de la extrema izquierda en el Parlamento (2015-2019). El Med 7, nacido de la controversia entre los «austeros» (o «tacaños») Estados miembros del norte y los «caros» del sur —denominados irónicamente «Club Med», sin Eslovenia ni Croacia, gestionados «a la alemana»—, tenía otra preocupación inicial, más acuciante que nunca en la época de la covid-19: el reto migratorio consecutivo a las Primaveras Árabes de 2011, que ha ido agravándose desde entonces con cada catástrofe, y que la pandemia no hace más que empeorar.

Los países mediterráneos de la Unión Europea, confrontados a oleadas recurrentes de pateras, son los que están pagando el principal tributo. Las llegadas impactan principalmente en Grecia, desde Turquía y, más allá, desde Siria, Irak, Irán, Afganistán y otros países asiáticos. En segundo lugar, Malta, Italia y España: los flujos llegan desde las costas occidentales de Libia (donde el Ejército turco está presente en 2020), y también desde Túnez y el oeste de Argelia, desde todo el Magreb, el África saheliana y el resto del continente negro. El rescate en el mar, la acogida, los problemas sanitarios y de seguridad relacionados con la llegada de inmigrantes ilegales hacinados en embarcaciones de fortuna, los costes que se ocasionan, la gestión de la crisis frente a las maniobras de las ONG humanitarias, que se apresuran a estigmatizar y culpar a la «Fortaleza Europa», todo ello ha sido difícil de afrontar para los Estados ribereños. Y eso es tanto más cierto cuanto que los inmigrantes ven su presencia en esos países solo como un paso hacia los supuestos paraísos laborales germánico, británico, báltico o escandinavo, cuyas autoridades utilizan los Estados del sur como regulador o barrera. Estos últimos exigen un reparto de la carga y se producen tensiones dentro del propio Med 7, con Italia acusando sistemáticamente a Francia de no asumir su parte de los migrantes, mientras que Francia se esfuerza por blindar su frontera. Se calcula que en el verano de 2020 se producen unos mil intentos de cruces clandestinos al día en el departamento de los Alpes Marítimos.

La reunión de los siete jefes de Estado o de Gobierno tuvo lugar el 10 de septiembre: el día anterior, un enorme incendio había devastado el mayor campamento europeo para refugiados procedentes de Turquía, en Moria, en la isla griega de Lesbos, donde se hacían más de trece mil personas en condiciones que la covid-19 ha convertido en dramáticas. El objetivo de la minicumbre es llegar a un consenso entre los dirigentes afectados, de cara a la próxima reunión plenaria de los líderes de la Unión Europea sobre la cuestión de los inmigrantes clandestinos y la respuesta que debe darse a Turquía, en forma de sanciones pronunciadas por la Unión Europea frente a los «comportamientos inadmisibles» y la «política de confrontación» de Erdogan. La doctrina de Bruselas al respecto, conocida como «de vecindad del sur», que se basaba en la cooperación con los dirigentes de los Estados ribereños del Mediterráneo, se ha quedado obsoleta desde hace una década: las Primaveras Árabes han desestabilizado o aniquilado algunos Gobiernos incapaces, como Libia, de gestionar los flujos migratorios o, como Ankara, deseosos de utilizarlos como instrumento de chantaje y de presión sobre la Unión Europea. «Turquía ha dejado de ser un socio en el Mediterráneo oriental», declaró el presidente francés al término de la cumbre, poniendo como condición para retomar un «diálogo fructífero con Ankara» el cese de las perforaciones en las zonas económicas exclusivas (ZEE) griega y chipriota.

El acuerdo alcanzado en Ajaccio, que incluye a Roma y La Valeta, aunque estos estuvieron tentados de proceder a una conciliación en solitario con Turquía (véase más arriba, pág. 36), es objeto de un virulento rechazo por parte de Erdogan al día siguiente mismo del 12 de septiembre: «Señor Macron, no ha terminado usted de tener problemas conmigo», amenaza, advirtiendo: «No busque pelea con el pueblo turco, no busque pelea con Turquía», mientras los manifestantes en Estambul amenazan al presidente francés con «pagar un precio muy alto» por volver a publicar las caricaturas del Profeta en la portada de *Charlie Hebdo*, que «insultan al islam con el pretexto de la libertad de expresión», publicación que se produce con ocasión del juicio por las matanzas yihadistas de enero de 2015, que empezó a celebrarse en París el 3 de septiembre —y que será el pistoletazo de salida de una virulenta campaña antifrancesa difundida durante el otoño en todo el mundo musulmán y orquestada por el maestro de Ankara—. También el día 12, Mitsotakis anuncia la adquisición de die-

ciocho cazas Rafale, cuatro fragatas y helicópteros, así como el reclutamiento de quince mil soldados, expresando sin ambages que un Estado miembro de la Unión Europea está ya en pie de guerra. Erdogan retira consecuentemente su buque de prospección sísmica de la ZEE griega antes del 25 de septiembre, que era la fecha inicialmente prevista, temiendo que se forme en torno a la línea «francesa» refrendada en Ajaccio un frente común europeo contra sus acciones, frente que uniría a los veintisiete miembros de la Unión Europea en la cumbre *ad hoc* en Bruselas, el 1 de octubre. Sin embargo, aunque se acordó el principio de sanciones «listas para su uso inmediato» si «Ankara continúa con sus acciones ilegales», esas amenazas no se llevaron a cabo y se instó a Erdogan a «aceptar la oferta», habiendo acordado los líderes de la Unión Europea juzgar «antes de fin de año si se han dado avances positivos». La resolución, que requería unanimidad, se quedó corta con respecto a las declaraciones de la cumbre de Ajaccio: la canciller reiteró la posición alemana de que «la Unión Europea tiene un gran interés en desarrollar una relación verdaderamente constructiva con Turquía, a pesar de todas las dificultades», y deseó una «nueva dinámica». La respuesta de Ankara fue rápida: nada más terminar la cumbre de la Unión Europea, Erdogan envió su buque de exploración de gas Oruç Reis, acompañado por una escolta militar, de vuelta a la zona económica exclusiva griega. Aunque Turquía llegó a un acuerdo con Grecia en el seno de la OTAN para establecer un mecanismo de prevención de conflictos, y el presidente francés tuviera que limitarse a reiterar el carácter «no negociable» de la solidaridad con Grecia y Chipre, el expansionismo de Erdogan desafió directamente el consenso con aroma muniqués de Bruselas: durante la cumbre, las tropas azerís continuaban con su ofensiva por sorpresa contra los armenios de Nagorno Karabaj, donde atacaron cuatro días antes, el 27 de septiembre, con el «pleno apoyo» del presidente turco y el envío de varios cientos de fuerzas supletorias sirias pagadas por Ankara. Si Macron exigió «explicaciones» y pidió a la OTAN que «afrontara» las acciones de un Estado miembro de la Alianza Atlántica, no deja de ser interesante constatar que la ofensiva dirigida contra el pueblo armenio cristiano y ortodoxo —tras los ataques contra Grecia y Chipre y la reislamización de Santa Sofía durante el verano— en apoyo de un país de lengua turca se inscribe en una lógica perfectamente coherente, cuyos entresijos examinaremos a continuación. La menor de las paradojas no es

que Turquía se encuentre indirectamente enfrentada a Rusia al equipar a Armenia, mientras que Moscú es, con Ankara, parte de los Acuerdos de Astaná y los dos Ejércitos patrullan juntos la frontera sirio-turca. Ni que Erdogan, ferviente defensor de Hamás, se encuentre en el mismo campo que el Estado judío, que es también aliado del Azerbaiyán chií pero laico, que está en profundo desacuerdo con el vecino Irán —los éxitos de la ofensiva azerí se debieron al superior armamento israelí y turco del que dispone de Bakú—, ni, por último, que las autoridades de Teherán —también parte integrante de los Acuerdos de Astaná— apoyen firmemente a Ereván contra Azerbaiyán —y, por lo tanto, contra Ankara—, mientras que la población iraní, que comporta un gran componente azerí y turcófono (incluido el propio Guía Supremo Jamenei), no oculte su simpatía por su vecino chií del norte... En el otoño de 2020, las alianzas y las rupturas son objeto de incesantes recomposiciones que se aceleran al antojo de la desintegración del mundo multilateral. Tal situación adviene cuando la decadente superpotencia estadounidense, que se erigía en su garante, vive, tras el mandato destructor de Donald Trump, la campaña presidencial más violenta y errática de su historia, mientras el planeta entero se encuentra sometido al impacto devastador de la epidemia de covid-19 proveniente de la superpotencia ascendente china, de la que el propio ocupante de la Casa Blanca es víctima: dio positivo y estuvo tres días hospitalizado a principios de octubre.

Populismo islamista y aislamiento espléndido de Erdogan

A pesar de las baladronadas populistas, el Gobierno turco no puede permitirse un pulso con una Europa que esté unida y decidida, de la que es infinitamente más tributario que al revés [MAPA 2]. Las sanciones económicas serían catastróficas para el régimen, cuando la agencia Moody's acaba de rebajar la calificación de Turquía a B2, el 11 de septiembre, en medio de los temores de una crisis de la balanza de pagos, mientras la lira ha perdido el 25 % de su valor frente al euro desde principios de 2020, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores Çavuşoğlu recuerda ya el día 14 que su Gobierno «ha decidido no impedir que los migrantes vayan a Europa y [que] la decisión sigue siendo válida», dejando lanzado el chan-

taje de enviar a millones de ilegales a la Unión Europea. Esa escalada se produce, además, en un momento en el que el informe bianual de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, presentado el 14 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incrimina con detalle y por primera vez al Estado turco y sus fuerzas supletorias del «Ejército Nacional Sirio» (pagado por Ankara) por graves violaciones de los derechos humanos en los territorios sirios bajo su control, como la región de mayoría kurda de Afrín, invadida desde enero de 2018. Salen a la luz, en particular, los relatos de violaciones grupales de chicas jóvenes, delante de sus compatriotas encarcelados. En el imaginario islamista, estas se identifican con las combatientes sin velo de las YPJ (Unidades de Protección de la Mujer) que han ganado muchas batallas contra el Dáesh (es creencia común que un hombre muerto por una mujer en la guerra no tiene acceso al paraíso), y su violación en grupo alcanza un significado político y religioso mágico. La perspectiva de enfrentarse a consecuencias legales por las acusaciones de sevicia pone a Erdogan en una posición aún más delicada en su tira y afloja con Bruselas, ya que Turquía también es miembro del Consejo de Europa, ante el que se supone que debe rendir cuentas en materia de respeto de los derechos humanos.

La Liga Árabe, finalmente, el 10 de septiembre, a instancias del ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Chukri, denuncia en una declaración aprobada por unanimidad por los veintiún miembros presentes, salvo cuatro abstenciones (Catar, Libia, Somalia y Yibuti), las «intervenciones turcas en Siria, Irak y Libia». Se insta a Ankara a «dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de los países árabes y a poner fin a sus acciones provocadoras, que sabotean la confianza y ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de la región». El Gobierno egipcio, al censurar la opresión otomana de antaño, contra la que se alzó el «renacimiento árabe» (*nahda*) del siglo XIX, recurre a los manes del nacionalismo para contrarrestar un nuevo «colonialismo turco» contemporáneo, socavando así una de las mitologías historicistas en las que se basa la propaganda expansionista de Ankara. Aunque las resoluciones de la Liga Árabe apenas tienen efecto, aunque en Túnez como en Argel se tienen ojos apasionados ante el viejo imperio de Estambul, cuyos jenizaros echaron raíces en el lugar y donde se encuentra su descendencia entre las élites de hoy, y aun-

que, si finalmente las series de televisión turcas dobladas al árabe son un éxito desde Casablanca hasta Omán, el aislamiento político de Erdogan es patente en ese foro. Solo el aliado catari, al que se unen los clientes libio y somalí, además de Yibuti, en grave conflicto con Abu Dabi, se atrevieron a abstenerse (véase págs. 70-71). Y los dos Estados del Cuerno de África —cuya arabidad es superficial (casi no se habla la lengua)— apenas tienen peso en el foro en cuestión.

Semejante escalada de tensiones en el Mediterráneo oriental constituye la resultante de las contradicciones de la política turca, empeñada en una huida belicista hacia delante desde las secuelas del «golpe de Estado» fallido del 15 de julio de 2016. Todo eso lleva a este miembro de la OTAN y candidato a integrarse en la Unión Europea, que ha quedado bajo el control de un dirigente islamista ungido sucesivamente por Barack Obama y luego por Donald Trump, a invadir el norte de Siria, así como Irak, y a enviar a sus oficiales y mercenarios a la Tripolitana libia, a enfrentarse a sus vecinos griegos y chipriotas en el mar Egeo y frente a las costas de Kaste-lórizo, a provocar una escaramuza con la Marina francesa, para terminar apoyando la ofensiva azerí contra Armenia. Al mismo tiempo, la inscripción de Turquía en el proceso de Astaná con Rusia e Irán, para gestionar la desescalada de la guerra civil siria excluyendo deliberadamente a los occidentales, y la estructuración de un triple acuerdo hermano-chií en apoyo de los Hermanos Musulmanes, con el propio Irán y con Catar, que culminará con la reislamización de Santa Sofía el 24 de julio de 2020 («sueño de juventud» de Erdogan), han exacerbado las antilogías con el anclaje europeo secular del país. Atatürk, después de la Primera Guerra Mundial, lo había convertido en la característica singular de la primera república laica surgida del mundo musulmán, y había adoptado el alfabeto latino, trasladando su capital de Estambul, sede del califato otomano durante medio milenio, a la moderna ciudad de Ankara. Ese es el legado que su lejano sucesor, imán de formación, refuta, forzando al país a un proceso de reislamización política que burla el laicismo y sitúa el antagonismo con Europa en una línea de fractura cultural y religiosa entremezclada de irredentismo.

Tal maximalismo a ultranza, que Erdogan pregonó y puso en marcha en el año 2020, expresa tendencias latentes desde mucho antes de su llegada al cargo de primer ministro, en 2003, pero nunca las había manifes-

tado con tanto ardor. Para destruir las redes kemalistas del Ejército, la Policía y los Servicios de Inteligencia, identificadas con la expresión en lengua turca «Estado profundo» (*Derin devlet*, que desde entonces ha gozado de gran predicamento fuera de su país de origen), tuvo que apoyarse en un primer momento en la izquierda democrática, así como en los kurdos, víctimas del totalitarismo «laicucho» de los herederos de Atatürk. El 12 de septiembre de 1980, un golpe de Estado militar, seguido de unas seiscientos cincuenta mil detenciones, treinta mil exiliados y cincuenta condenas a muerte ejecutadas, así como de la disolución de partidos y de decenas de miles de asociaciones, puso fin a una situación política caótica marcada por el terrorismo y que preludiaba una guerra civil. Utilizó como pretexto una manifestación antilaica en la ciudad anatoliana de Konya, seis días antes. El golpe de Estado suspendió las libertades fundamentales durante tres años, y la intensidad de la represión «laico-fascista» fomentó, como represalia, el acercamiento entre los representantes de la sociedad civil y los islamistas, que terminaron encarcelados todos a una. La intelectualidad progresista, influida por el multiculturalismo en boga en los campus del otro lado del Atlántico, donde muchos habían estudiado, empezó a ver en la «modernidad musulmana» de la que Erdogan decía ser el apóstol una promesa de emancipación del yugo autoritario del Estado. En cuanto a los kurdos, muchos estaban convencidos de que una Anatolia musulmana sería más inclusiva que una Turquía chovinista. Eso hizo mucho por la imagen del mencionado dirigente en Occidente, para borrar sus asperezas islamistas durante el tortuoso proceso de adhesión a la Unión Europea —la candidatura inicial se remonta a 1987—, que chocó con la desconfianza de cierto número de Estados miembros, poco tranquilizados por la fraseología y los hechos del dirigente de Ankara, y llevó las negociaciones a un punto muerto. A medida que su poder iba afirmándose, Erdogan restableció de hecho un régimen autocrático que no tenía nada que envidiarle al régimen a cuyos promotores laicos había liquidado. Se limitó a sustituirlos por islamistas de su cuerda, aumentando incluso la represión, cuyas primeras víctimas fueron sus antiguos compañeros de viaje, los demócratas multiculturalistas que le habían servido de «tontos útiles».

El intento de golpe de Estado del verano de 2016, sobre el que planean numerosas incógnitas, fue una oportunidad para amordazar masivamente toda oposición, cesando a cientos de miles de funcionarios, especialmen-

te en los ministerios de regalía, de profesores, de abogados, encarcelando a unas cuarenta mil personas, restringiendo las libertades de prensa y de expresión —se cerraron ciento cincuenta medios de comunicación—, lo que recuerda las horas más oscuras del kemalismo autoritario. En el año 2020, Turquía ocupa el puesto 154 (de 180) en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras. El 28 de agosto, la abogada kurda Ebru Tintik muere en prisión, después de doscientos treinta y ocho días en huelga de hambre. El fallido golpe de Estado proporciona la ocasión de incriminar a quien fue el primer socio de Erdogan en su empresa de conquista islamista del poder: el imán Fethullah Gülen, cuyos seguidores terminaron perseguidos con un celo encarnizado. Estos últimos, estrictamente organizados según reglas de obediencia inspiradas tanto en hermandades místicas como en sociedades secretas, constituían una especie de masonería religiosa que había reconstituido su propio «Estado profundo» repintado de verde coránico. Con el tiempo se convirtieron en críticos temibles del Gobierno, llegando a desenmascarar, encarcelar y procesar, gracias a sus conexiones en los medios de comunicación, la policía y la judicatura, a prevaricadores cercanos a Erdogan, pertenecientes incluso a su círculo familiar.

La liquidación de todos ellos tras la represión del fallido golpe de Estado del verano de 2016 hizo que el presidente, para compensar la pérdida de su apoyo electoral, reforzara su alianza política con el ultraderechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), que expresa un panturanismo chovinista. En las elecciones legislativas de junio de 2015, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), cuya gestión está plagada de escándalos, pierde la mayoría absoluta, a la vez que la insurgencia armada kurda vuelve a tomar impulso. Unas nuevas elecciones en noviembre, celebradas en condiciones controvertidas y en un clima propicio a la violencia, le dan el 49,50 % de los votos y 317 de los 550 escaños; el MHP, por su parte, obtiene casi el 12 % de los votos y 40 diputados. El nuevo pacto gubernamental resultante representa el colorido específico de la política turca contemporánea, que combina el toque «eurasista», antioccidental y hostil a la Unión Europea con un tinte islamista dominante, procedente de los Hermanos Musulmanes. La estrategia *Mavi vatan* ('patria azul'), que se traduce concretamente en la expansión mediterránea a través de las perforaciones en aguas griegas y chipriotas, los incidentes

recurrentes con las armadas de estos países y de Francia, unida a la reislamización de Santa Sofía, constituyen, en el verano de 2020, la culminación de esa alianza «islamofascista».

El eurasismo, de Ankara a Moscú

Ese eurasismo turco no es ajeno al que se propugna en la Rusia de Vladímir Putin, donde el concepto vio la luz, en el siglo XIX, con una dimensión igual de adversa para la Europa Occidental; se basa originalmente en la eslavofilia y se apoya luego en el inmenso interior estepario que se extiende hasta Siberia. Construía una identidad existencial «de tierra adentro» frente a las «talasocracias» británica, francesa y luego estadounidense. Como reacción a la occidentalización llevada a cabo por los zares, a quienes —como a Catalina II, por ejemplo— inspiraban los filósofos de la Ilustración, la doctrina se decía basada en las religiones «auténticas» de esa tierra: primero la ortodoxia y luego el islam. Persistió durante la era soviética y, mutando, contribuyó a conferirle una dimensión cultural subyacente a la oposición comunista frente al atlantismo, encarnado por la OTAN desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída de la Unión Soviética y del trauma de la era Yeltsin, cuando el fraccionamiento de la industria por parte de numerosas empresas occidentales provocó el colapso del país y el hundimiento de la población en la miseria, tuvo un resurgimiento de popularidad y contribuyó de forma significativa a la visión del mundo de Vladímir Putin, cuyos allegados y consejeros se declaran en gran parte sus seguidores. Por un lado, el culto a la «tierra» propio de esa doctrina ha acercado a Putin a la extrema derecha europea, especialmente al Frente Nacional francés. Por otro, ha ido agregando cada vez más a su base paneslava un componente «turco-islámico», muy oportuno para proporcionar un marco inclusivo a las bases de las repúblicas musulmanas que permanecían en el redil ruso, desde Tatarstán hasta Chechenia, o para mantener el vínculo con las repúblicas que se habían independizado y corrían el riesgo de sucumbir a los cantos de sirena de Occidente, como Uzbekistán o Azerbaiyán.

Esta última dimensión presenta afinidades con el panturanismo de la extrema derecha turca, que también ve en las estepas centroasiáticas, de

donde proceden los «lobos grises» —animal totémico de los eurasistas que los nómadas turcos siguieron en su victoriosa migración hacia Occidente y que dio nombre a los fusiles de los grupos paramilitares vinculados al MHP—, una extensión natural de la identidad nacional [MAPA 10]. Desde esa lógica, el 27 de septiembre de 2020, la ofensiva militar desatada por Bakú contra el enclave de Nagorno Karabaj, poblado por armenios y autónomo desde 1991, «cuenta con el pleno apoyo del pueblo turco a sus hermanos azerbaiyanos», según tuitea el amo de Ankara, «con todos [sus] medios». Esos medios incluyen a los mercenarios del «Ejército Nacional Sirio», entre los que se encuentran muchos rebeldes islamistas, que también forman el grueso de la fuerza expedicionaria turca en Libia, y cuyos abusos en Siria acaba de denunciar un informe de la ONU. Para los eurasistas turcos, nómadas conquistadores de Anatolia y luego de los Balcanes, cuyos descendientes procedieron a la limpieza étnica de los armenios de Anatolia a principios del siglo XX y extendieron ese movimiento al Cáucaso cien años después, constituyen el fundamento de una identidad antioccidental, en desacuerdo con la secularización a la francesa que inspiró, por otra parte, a Atatürk en los años 1920. Veremos más abajo que llevan esa lógica hasta Francia, donde sus contactos en la inmigración hostigan a los armenios en la región de Lyon el 28 de octubre (pág. 181).

La saña visceral específica que Erdogan tiene contra la patria de Voltaire se encuentra agazapada en la identificación de esa nación con el odiado laicismo, y en una nefasta e impía influencia cultural que arde en deseos de erradicar con tanto mayor ahínco cuanto que una parte importante del vocabulario turco que designa los objetos y conceptos de la modernidad está constituida por vocablos franceses transcritos fonéticamente, empezando por *laik* (*laïque*, laico) —como ya ha quedado dicho más arriba (pág. 25)—. Desde el *lise* (*lycée*, 'liceo', 'instituto') para imanes y predicadores (*imam hatip lisesi*) donde estudió el propio Erdogan, pasando por el *otobüs* o el *tren* que lo llevaba, hasta el *pötibör* (*petit-beurre*, 'galleta de mantequilla') con que se regalaba en los recreos... y el magnate de la empresa BTP *Rönesans* (*renaissance*, 'renacimiento') que le construyó un palacio presidencial en Ankara, de fasto versallesco. Su porosidad mental con los chantres del eurasismo, por el contrario, creció aún más tras el fallido golpe de Estado del verano de 2016, al liquidar a sus antiguos amigos gulenistas —panislamistas exclusivos que rechazaban la doctrina del MHP

(Partido de Acción Nacionalista) por considerarla un nacionalismo «pagan»—. En el marco de esa alianza civilizacional, bajo los auspicios euroasiáticos compartidos, fue donde el amo del Kremlin confirmó su apoyo a su homólogo de Ankara en 2016 —los servicios de inteligencia rusos, según un rumor difundido en Turquía, fueron los primeros en proporcionar información valiosa para desbaratar el complot—. La residencia de Gülen en Estados Unidos —donde se encuentra exiliado desde 1999— fue oportunamente señalada para incriminar la supuesta influencia de Washington, «talasocracia atlantista», por debajo de la intentona golpista.

Entre islamismo e irredentismo

El acercamiento ruso-turco que de todo ello se desprende tuvo muchas e importantes consecuencias. Permitted saldar el contencioso surgido por la destrucción en pleno vuelo de un Sukhoi ruso procedente de la base de Hmeimim, cerca de Lataquía, sobre la frontera siria, por dos cazas F-16, el 24 de noviembre de 2015, a lo que Moscú reaccionó muy violentamente —teniendo en cuenta que se trataba de la primera de sus aeronaves derribada por la aviación de un miembro de la OTAN—. Corte de las exportaciones de gas, interrupción de los flujos turísticos, bombardeo de los convoyes de camiones cisterna que transportaban a Anatolia el petróleo explotado por el Daesh en el este de Siria, múltiples revelaciones sobre la implicación de los familiares de Erdogan en ese tráfico... Medidas de represalia todas ellas que tuvieron un impacto deletéreo. La consecuencia es que el 20 de diciembre de 2016, cinco meses después del fallido golpe de Estado, una reunión en Estambul entre funcionarios rusos, iraníes y turcos —los tres Estados proporcionan la mayor parte del apoyo logístico o militar a los combatientes antagónicos en la guerra civil siria— ratificó el fin del suministro de Ankara a Alepo: Erdogan se sincroniza con Putin. Dos días después, la metrópoli del norte de Siria capitula y vuelve a caer en manos del régimen de Ásad: eso fue el principio del fin de la insurrección. Washington y otros aliados de Turquía dentro de la OTAN quedaron al margen del proceso, prototipo de los Acuerdos de Astaná entre los tres Estados en cuestión, que se ratificará el 4 de mayo siguiente, para organizar la desescalada en Siria. La capital de Kazajistán es tanto más pro-

pia como epónimo de ese pacto cuanto que el presidente Nursultan Nazarbayev —que, hasta su dimisión, en marzo de 2019, gobierna un país en el que conviven etnias ruso-ortodoxas y turco-musulmanas— se mostraba de buen grado como heraldo del eurasismo. Hizo, por ejemplo, que la universidad de la ciudad pasara a llamarse «Lev Goumilev», en honor del antropólogo (1912-1992) al que se considera padre de la versión contemporánea de esa doctrina, encarnada por la confluencia de los pueblos de la estepa ruso-kazaja.

Los acuerdos marcan el punto de inflexión de la intervención de Erdogan en la guerra civil siria. Sus servicios de inteligencia facilitaban hasta ese momento apoyo material a los rebeldes, a los que también favorecían las potencias occidentales y las petromonarquías suníes del Golfo, cada una con su lógica y sus expectativas particulares. Tanto Barack Obama como François Hollande veían en la insurrección el movimiento que derrocaría una dictadura vasalla de Moscú e instauraría sobre sus ruinas una democracia al gusto euro-estadounidense. Los dinastas y los religiosos, desde Kuwait hasta Arabia, por su parte, lo percibían como un ejército de yihadistas suníes que destruirían la media luna chií adversaria, trazada por Teherán desde el Caspio hasta el Mediterráneo. La política siria inicial de Ankara combinaba su compromiso prooccidental y antirruso con la OTAN con su apoyo a los Hermanos Musulmanes en su lucha por la hegemonía regional tras las Primaveras Árabes, una visión perfectamente compatible, además, con la del inquilino demócrata de la Casa Blanca, que consiste en un «compromiso» con el islam político.

Pero la ecuación turca se modifica a raíz del fallido golpe de Estado de julio de 2016: el aumento de la dosis de nacionalismo «euroasiático» en la coalición gubernamental, la desconfianza frente a Washington, sospechoso de haber alentado a los conspiradores, el acercamiento a Moscú... embarullan las cosas al sur de la frontera. Para Erdogan, Siria es ahora, en primer lugar, objeto de una expansión territorial con vocación nacionalista: solo secundariamente constituye una zona de proyección del islamismo hermanista. La *realpolitik* consiste en establecer bases militares más allá de los confines, para separar físicamente a los kurdos locales de los de Turquía —los activistas y combatientes del PKK con los que se reanudaron las hostilidades en 2015, tras un período de calma—. En el segundo estadio —como demostró la invasión de la región de Afrín en enero de 2018— el

objetivo pasa a ser convertir esos territorios en zonas tapón. Estos son objeto de una limpieza étnica que expulsa a los habitantes de origen kurdo y acoge en su lugar a los rebeldes árabes suníes exfiltrados de las zonas de combate, mientras las tropas de Ásad, ayudadas por fuerzas supletorias chífes y la aviación rusa, reconquistan el resto del sur de Siria. Esos antiguos integrantes de la insurgencia, agrupados en un «Ejército Nacional Sirio» a sueldo de Turquía, realizan el trabajo sucio sobre el terreno —así lo documentaría el informe de la ONU en septiembre de 2020—. Ese mismo año los enviarán asimismo a Libia, a luchar junto al Gobierno de Trípoli; y luego a Azerbaiyán, con el de Bakú.

En ese contexto, al sur del enclave de Afrín, «zona de desescalada» de la provincia fronteriza de Idlib, designada como tal en los Acuerdos de Astaná de mayo de 2017, donde se agolpan, además de la población original, cientos de miles de refugiados rebeldes y desplazados que huyen de la reconquista por parte de los soldados y milicianos de Damasco, es donde tiene lugar una sorprendente «variable de ajuste» entre los dos principales socios de los acuerdos, Putin y Erdogan [MAPA 12]. En el sector bajo control turco, que parece la «nueva Franja de Gaza», según expresión de Fabrice Balanche, el Ejército de Ankara debía vigilar a las milicias rebeldes, pero estas quedaron sometidas al control del HTS (Hayat Tahrir al Sham, Organización para la Liberación del Sham/Levante), grupo yihadista disidente de Al Qaeda, cuya ideología seguía reivindicando hasta el verano de 2020, y que hostigaba a las brigadas pro-Ásad presentes en la parte bajo supervisión rusa. Ahí es donde las fuerzas especiales del Kremlin se supone que deben calmar las veleidades agresivas de las tropas del presidente sirio; en realidad, les allanan el camino bombardeando al HTS y a otros sediciosos: de mayo a agosto de 2019, se reconquistan unas cuantas ciudades y muchos pueblos. Y era en la zona supervisada por Erdogan donde se escondía el «califa» del Dáesh, Abu Bakr al-Bagdadí, eliminado por un comando helitransportado estadounidense, el 27 de octubre de 2019, a poca distancia de Turquía. A finales de 2020, el territorio se había encogido como un pellejo viejo, y los días 19 y 20 de octubre, el Ejército de Ankara evacua la mayoría de sus puestos más orientales, incluido el de Morek, para retirarse a una línea que creaba una franja de unos cuarenta kilómetros de profundidad en Siria, donde se enviaron importantes refuerzos de tropas, vehículos y equipos. Al mismo tiempo, el HTS —presionado por

los servicios de inteligencia turcos, según fuentes de la oposición siria— excluyó a sus miembros más extremistas y rompió toda relación con el teórico yihadista radical jordano Abu Muhamad al-Maqdisi, por medio de un comunicado emitido el 10 de octubre. El objetivo es hacer que el grupo, calificado como terrorista, sea más «presentable» internacionalmente, facilitando así su absorción por el «Ejército Nacional Sirio», pagado por Ankara. Tales maniobras tienen lugar mientras Moscú intensifica la presión de las tropas de Bashar Al-Ásad sobre los turcos y sus afines, en represalia por el apoyo concomitante de Erdogan a la ofensiva azerí en Nagorno Karabaj (donde se enviaron mercenarios sirios de las brigadas Al-Hamza y Sultán Murad, bajo la égida turca, de los que más de cien cayeron en combate el 20 de octubre de 2020). De igual modo que la situación en Idlib sirve como variable de ajuste en una relación turco-rusa que se deterioró después de la intromisión de Erdogan en el Cáucaso, también había servido un año antes, en otoño de 2019, para apuntalar la relación entre este líder fuerte y su colega de la Casa Blanca. La liquidación *in situ* de Bagdadí, símbolo vivo del yihadismo, le había proporcionado a Donald Trump la oportunidad de aparecer como el campeón de la lucha antiterrorista mundial, para superar a su predecesor Barack Obama, que ordenó la ejecución de Bin Laden en Pakistán, el 2 de mayo de 2011. También compensaba la indignación internacional que causó su decisión de retirar las tropas estadounidenses de la región controlada por los kurdos, en el noreste de Siria, el 6 de octubre de 2019, allanando el camino tres días después para una ofensiva turca a través de la frontera, precedida por bombardeos y asaltos perpetrados por antiguos rebeldes, entre los que se encontraban muchos yihadistas reciclados, que habían recibido en su día armamento de la CIA. El clamor en Occidente contra lo que se denunció como un abandono de los kurdos en campo abierto, cuando habían desempeñado un papel crucial en la lucha contra el terrorismo del Dáesh, fue muy fuerte, mientras más de cien mil personas huían de los combates y todos los días anunciaban las fuerzas supletorias del Ejército Nacional Sirio que habían conquistado nuevos pueblos y aldeas. El 11 de octubre, los combatientes islamistas de Ahrar al-Sharqiya ('Hombres libres del Oriente'), una brigada de la ANS, capturaron en un control de carretera a Hevrin Jalaf, una joven política de un partido kurdo progresista y laico, y la torturaron hasta darle muerte, junto con otros tres prisioneros esposados, al grito de

¡Alá Akbar! La ejecución, grabada en vídeo, fue ampliamente difundida a través de las redes sociales, recordando con ello atrocidades similares del Dáesh durante los peores años de su «califato islámico». El 13 de octubre de 2019, el bombardeo, en la localidad de Tel Abiad, de un centro de detención de presos que habían pertenecido a la organización yihadista propició la fuga de setecientos cuarenta y cinco detenidos, información que desmintió la Casa Blanca, incómoda, pero que confirmaron otros responsables estadounidenses.

Ese mismo día, quedó claro que la política de Donald Trump en Oriente Medio dejaba a Estados Unidos en una posición de debilidad frente a un adversario por demás temible: Vladímir Putin. El dirigente ruso aprovechó rápidamente los errores de su homólogo del otro lado del Atlántico. Organizó un arreglo entre los kurdos sirios asediados y el régimen de Damasco, de tal modo que las tropas de Bashar al-Ásad pudieran avanzar hacia el norte, hasta entrar en contacto con las fuerzas turcas, a través del territorio controlado hasta entonces por el YPG, territorio al que no podían acceder debido a la presencia de soldados estadounidenses [MAPA 11]. Estos últimos se habían retirado a una franja a lo largo de la frontera con Irak. El amo del Kremlin también le había trasladado a su homólogo turco que Moscú, y no Washington, fijaría los límites de la ofensiva de los hombres de Ankara. El mantenimiento de una presencia militar kurda semiautónoma en el noreste de Siria, bajo los auspicios de Rusia, permitía manejar Turquía con las riendas cortas. Nada le gustaba más a Putin que bailar con Erdogan cuando este tenía una piedra kurda en el zapato. Lo recibió el 22 de octubre de 2019 en Sochi; el «memorando de diez puntos» que se redactó en ese balneario del mar Negro estipulaba que las fronteras sirio-turcas estarían vigiladas por patrullas conjuntas ruso-turcas, al este y al oeste de la zona controlada ya por Ankara en el territorio sirio, entre Tel Abiad y Ras al Ayn, mientras que los contingentes ruso-sirios (pertenecientes estos últimos al Ejército de Damasco) controlarían los alrededores del enclave recientemente conquistado, para evitar cualquier expansión. Estados Unidos y Occidente habían quedado fuera de la mayor parte del campo de batalla sin que opusieran resistencia alguna.

Las fuerzas especiales de Estados Unidos, Francia y Reino Unido volvieron a desplegarse, por lo tanto, al este del Éufrates, en torno a los campos petrolíferos explotados en particular por la empresa estadounidense

CONOCO, operación que calificó de «banditismo» el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, impaciente por que los hidrocarburos volvieran a estar bajo el control de Damasco. Bashar al-Ásad, por su parte, recicló la vieja retórica nacionalista para movilizar apoyos en Siria dando la bienvenida a «cualquier grupo que se comprometa con la resistencia popular contra Erdogan y Turquía [...]. Si no lo hacemos, ¿no somos ya dignos de nuestra patria!». Semejante declaración nunca podría haberse hecho sin el consentimiento del Kremlin: era una señal para Ankara de que Putin refinaba estrictamente sus ambiciones, a partir del momento en que el objetivo principal de Moscú —la retirada militar estadounidense de la zona fronteriza y la sustitución de las patrullas de soldados del otro lado del Atlántico por soldados rusos— se había alcanzado.

De modo que Donald Trump, sometido al fuego cruzado de los demócratas y algunos republicanos por su errática retirada de Siria, y enfrentado a un proceso de destitución en el Congreso por el asunto de Ucrania, recurrió a la operación de la que esperaba una oportuna publicidad y aplausos a su liderazgo: la liquidación de Abu Bakr al-Bagdadi, el 27 de octubre de 2019. El autoproclamado califa del efímero Estado Islámico ya no tenía mucha influencia ni valor militar, a raíz de que los últimos de sus combatientes cayeran derrotados en Baghuz, en la zona fronteriza entre Siria e Irak, en marzo. Los escasos vídeos que había colgado en Internet desde entonces no son más que un recordatorio de que todavía era capaz de ladrar, a falta de poder morder. Seguía siendo, no obstante, un criminal muy buscado por la letanía de atrocidades yihadistas cometidas en su nombre, y su eliminación proporcionaría una recompensa política a quien lo ejecutara. Pero el momento y las condiciones del acontecimiento suscitaban muchas preguntas que siguen hasta hoy sin respuesta.

El 27 de febrero de 2020, treinta y tres soldados turcos cayeron en la zona de desescalada de Idlib, en un ataque aéreo atribuido a Siria; dieciséis militares sirios murieron en represalia [MAPA 12]. Esa «guerra tibia» ruso-turca por parte de los rebeldes y de las milicias interpuestas se hacía eco de la que tenía lugar simultáneamente en Libia, donde el enfrentamiento entre las fuerzas de Trípoli y Bengasi se llevaba a cabo también por medio de las fuerzas supletorias sirias, repartidas en cada uno de los bandos antagónicos (véase págs. 29-30 y 34). Los avances y retrocesos en los campos de batalla de la provincia de Idlib se negociaban como contrapartida a los

movimientos en el frente entre Cirenaica y Tripolitana... Esa paradójica situación se complica aún más cuando entra en juego un tercer término, a partir del 27 de septiembre de 2020, en el momento en que Erdogan «da todo su apoyo» a la ofensiva militar azerí contra Nagorno Karabaj y Armenia y exige formar parte del proceso de resolución del conflicto, invitándose como miembro del «Grupo de Minsk», formado por Rusia, Estados Unidos y Francia, principal mediador internacional en un antagonismo que había permitido un alto el fuego en 1994, tras unos combates que habían causado unos treinta mil muertos. La irritación rusa por lo que se considera una injerencia de Ankara en un Cáucaso en el que las antiguas repúblicas soviéticas mantienen relaciones estrechas con Moscú, con independencia de sus escauceos económicos o políticos con Occidente, por otra parte, contribuyó a exacerbar las tensiones.

La reactivación de Hamás

Si la presencia turca en Siria se inscribe cada vez más en los retos de la *realpolitik* nacionalista y antikurda, en detrimento del apoyo original al islamismo, y debe tener en cuenta las complejas exigencias de Moscú, el apoyo de Ankara a Hamás, que es objeto de una estrategia concertada con sus socios del triple acuerdo hermano-chií —Doha y Teherán—, despliega la bandera ideológica islamista. Mientras en Siria turcos e iraníes patrocinan dos campos enemigos, concuerdan en el patrocinio del movimiento palestino en el poder en la Franja de Gaza. La República Islámica, como hemos señalado, necesita recuperar una virtud... islámica, después de haber contribuido directamente, gracias a la Fuerza Quds del difunto general Soleimani, o a través de Hezbolá, al aplastamiento de la rebelión en la que la afirmación suní y particularmente próxima de los Hermanos Musulmanes se había hecho predominante. Teherán, al reactivar en 2020 los ataques de Hezbolá y de Hamás contra Israel, intenta también sacarle partido a la «traición» a la causa palestina por parte de Abu Dabi y Manama, socios del Acuerdo de Abraham [MAPA 9]. Irán espera convertirse de nuevo en el virtuoso de esa causa, siguiendo el modelo de la «victoria divina» de otrora, cuando la guerra de los Treinta y Tres Días, en el verano de 2006, en la que el Partido de Dios frenó el

avance de la Tzáhal en el sur de Líbano, lo que le valió una inmensa fama, incluso en los medios de comunicación de la península Arábiga, a pesar de su identidad chií. Para Ankara, es también una forma de reforzar su credibilidad hermanista en el mundo árabe —mientras que la caída del bastión rebelde de Alepo y la posterior derrota de los insurgentes islamistas sirios, en diciembre de 2016, se imputaron al «abandono» por parte de Erdogan, en el marco de un acuerdo con su homólogo del Kremlin—.

Turquía también concede asilo político en su propio territorio a miles de Hermanos Musulmanes egipcios, exiliados tras el derrocamiento del presidente Morsi, en julio de 2013. En Turquía fueron capaces de multiplicar los *think tanks*, los canales de televisión y toda una infraestructura de resistencia contra el régimen del mariscal Sissi en El Cairo [MAPA 2]. Este último, por cierto, se había acercado a Grecia en el marco de la hostilidad mutua a las incursiones de la flota turca en el Mediterráneo y al acuerdo de noviembre de 2019 entre Ankara y Trípoli para delimitar las zonas económicas exclusivas de uno y otro —respondiendo a esa provocación con la firma de un tratado similar sobre las respectivas zonas marítimas helena y egipcia, el 6 de agosto de 2020—. En reacción a la correspondiente ratificación por el Parlamento de Atenas, Erdogan no dudó en reiterar el 14 de agosto su visión panislámica de las relaciones internacionales, expresando su incompreensión de que el Egipto musulmán, cuando «nuestras civilizaciones y principios respectivos son mucho más cercanos entre sí que a los de Grecia», se alíe con esa nación descreída, en contra de su correligionario. En la misma línea, incriminó la presencia militar francesa en Malí —motivada por los acuerdos bilaterales de defensa con ese Estado, invadido por una incursión yihadista que llegó hasta Tombuctú en 2012—, dirigiéndose a Emmanuel Macron en los siguientes términos: «¿Qué tiene usted que hacer allí?», con el argumento de que el país es «en un 95 % musulmán». Y el 10 de septiembre, el día en que los miembros del Med 7 se reúnen en Ajaccio, envía a su ministro de Asuntos Exteriores, Çavuşoglu, a Bamako, para apoyar a los golpistas que acaban de derrocar al presidente Keita, considerado aliado de Francia.

Pero a través del patrocinio de Hamás es como una *Weltanschauung* panislamista puede desencadenar las más fuertes repercusiones mediáticas en la pequeña pantalla o en las redes sociales, desde Casablanca a Omán, y maximizar la efervescencia en la «calle árabe», incluso en los

suburbios populares islamizados de Europa Occidental. Diez años antes, el 31 de mayo de 2010, comandos israelíes habían abordado en alta mar al Mavi Marmara, fletado por la ONG islamista turca IHH y buque insignia de una flotilla humanitaria que intentaba romper el bloqueo de Gaza. El asalto, que dejó nueve muertos y muchos heridos, precipitó una crisis entre Jerusalén y Ankara y le permitió a Erdogan convertirse en el caballero blanco mundial de la causa palestina. El 22 de agosto de 2020 se organiza en Estambul una operación con el mismo propósito: el presidente recibe con gran pompa al jefe del buró político de Hamás y «primer ministro de la Franja de Gaza», Ismail Haniya, a la cabeza de una importante delegación, en un palacio a orillas del Bósforo, durante la semana siguiente al acuerdo entre Israel y los Emiratos. Se ganó con ello una dura condena del Departamento de Estado norteamericano, según el cual «la reiterada proximidad del presidente Erdogan con esa organización terrorista solo sirve para aislar a Turquía de la comunidad internacional». A esa visita del jefe de Estado la sigue, a partir del 1 de septiembre, una gira triunfal de tres semanas del líder palestino por Líbano. Gira que se lleva a cabo pisándole los talones a Emmanuel Macron: este acaba de celebrar el centenario de la creación del Gran Líbano por la Francia mandataria de la Sociedad de Naciones, en 1920, e intenta acelerar (infructuosamente) la formación del nuevo Gobierno después de la catastrófica explosión del puerto de Beirut, el 4 de agosto. Mientras que el presidente francés visitaba primero los barrios cristianos, especialmente alcanzados por el cataclismo, el líder de Hamás privilegiaba, por el contrario, los territorios musulmanes de esa nación pluriconfesional [MAPA 13]. Su viaje está destinado a despertar la imaginación islámica, anulando en los ánimos la visita del ocupante del Palacio del Elíseo —que también es una bestia negra de Erdogan—; de hecho, el primer ministro designado, el suní Mustafa Adib, tira la toalla el 26 de septiembre, frente a las exigencias de Hezbolá, lo que da al traste con la iniciativa francesa, para gran satisfacción del triple acuerdo hermano-chií. Le corresponderá al antiguo primer ministro Saad Hariri, destituido por la «revolución» del 17 de octubre de 2019, presentarse de nuevo para el desempeño de esa función; será designado el 22 de octubre de 2020, como una vuelta a la casilla de salida que borra todas las esperanzas de cambio de la juventud libanesa —mientras un sálvese quien pueda general empuja a las élites

intelectuales, especialmente a los médicos, a abandonar Líbano, lastrando aún más el futuro—.

La anterior visita de Haniya al País de los Cedros, por otra parte, se remonta a cuando fue deportado por Israel, en el invierno de 1992, con cuatrocientos dirigentes de organizaciones islamistas palestinas, a los montañosos pastos nevados de Marj az-Zohour, en represalia por el asesinato del suboficial del Tzáhal Nissim Toledano, secuestrado en Lod, en el corazón mismo del Estado hebreo, y hallado luego apuñalado y atado en una zanja, operación perpetrada por Hamás. Con ocasión de su gira de septiembre de 2020, el «primer ministro de Gaza», después de que Hasan Nasrallah y varios políticos chiíes y suníes lo recibieran solemnemente, en un respaldo mutuo, participa en una videoconferencia con las demás facciones palestinas con sede en Ramala, lo que le permite imponerse al presidente de la Autoridad Palestina y de la OLP, Mahmud Abbas. A continuación, se dirige al emblemático campo de Ain al Hilweh, donde viven en condiciones difíciles cuarenta y siete mil de los cuatrocientos cincuenta mil refugiados palestinos en Líbano, caldo de cultivo de la radicalización islamista: después de los Acuerdos de Oslo, de septiembre de 1993, no se había previsto para los refugiados ningún «derecho de retorno» durante las conversaciones entre al-Fatah e Israel. Hasan Nasrallah recorre en triunfo las instalaciones, eclipsando a sus rivales de la OLP y desarrollando una operación de relaciones públicas concertada por Ankara y Teherán.

A continuación, las facciones palestinas en liza llevan a cabo un acercamiento sin precedentes, presionadas por el Acuerdo de Abraham. Después de haber reunido a su alrededor, el 3 de septiembre, en la sede de la embajada palestina en Beirut, a los representantes de todas las organizaciones disidentes —desde los marxistas de los Frentes Popular y Democrático hasta los proiraníes de la Yihad Islámica—, Haniya recibe asimismo, a su regreso a Estambul, el 21 de septiembre, a Jibril Rajub, secretario general de al-Fatah, componente central e histórico de la resistencia palestina fundada por Yasir Arafat, con el fin de restablecer su unidad. El paso se da, sin embargo, en un momento en el que Hamás se encuentra en una posición de fuerza, puesto que tiene a su favor el apoyo masivo del triple acuerdo turco-catarí-iraní, mientras que ni al-Fatah ni la Autoridad Palestina establecida en Ramala, agotada por sus infructuosas negociaciones con el Estado judío, disponen de ningún eco internacional que pueda servir de

contrapeso. En la 75.^a Asamblea General de la ONU, que tiene lugar al mismo tiempo en Nueva York, solo Turquía y Catar —patrocinadores de Hamás— expresan un apoyo inequívoco a la causa: Erdogan proclama que «la ocupación de Palestina es una herida sangrante», mientras que el emir Tamim bin Hamad al-Zani invita a la comunidad internacional a que obligue a Israel a levantar el bloqueo de Gaza. Una vez que Doha comunica que se proporcionará la ayuda necesaria a la Autoridad Palestina para resolver su crisis financiera y presupuestaria, a Mahmud Abbas solo le queda ir a Canosa. Mientras sus tradicionales aliados egipcios y saudíes ya no lo llaman (a pesar de que el mariscal Sissi y el rey Salmán se esfuerzan por mantener un vínculo con la OLP para evitar que se desmorone y se incline por completo hacia Hamás), el viejo presidente, de ochenta y cuatro años, que nunca llegó de verdad a imprimir su huella después de la muerte de Arafat, telefona a su homólogo turco para agradecerle su apoyo a los palestinos y anuncia que no será candidato a la sucesión. Los representantes de al-Fatah y Hamás se ponen de acuerdo en Estambul para celebrar elecciones generales en un plazo de seis meses (las anteriores habían tenido lugar hacía quince años), y los primeros sondeos indican que Haniya obtendría la mayoría de los votos...

La coordinación entre Ankara, Doha y Teherán a través de Hezbolá, para poner en órbita al jefe del movimiento islamista palestino, se sitúa en el centro de la estrategia del eje hermano-chií, frente a la entente abrahámica [MAPA 1]. Una de sus consecuencias menos paradójicas no es que Catar, principal financiador de Hamás, se vea empujado a sobornarlo por... ¡Israel, que, sin embargo, erigió a la organización que gobierna Gaza en parangón del terrorismo!

Ese enclave costero de 365 km², donde viven hacinados dos millones de personas (la mitad de ellas, menores de 15 años), con una tasa de fertilidad que alcanza 4,24 hijos por mujer y una tasa media de desempleo que se eleva a 53 %, fue declarado «inhabitable» por la ONU para 2020 debido a la espiral de superpoblación, alimentada por una imparable explosión demográfica que la ideología islamista en el poder alienta porque ve en ella una «yihad de las cunas», que un día, no muy lejano, valdrá para inundar el Estado hebreo. El territorio, bajo tutela egipcia hasta su conquista por Israel en la guerra de los Seis Días de junio de 1967, no fue objeto de ninguna reclamación por parte de El Cairo (también superpoblado) —in-

equívocamente aliviado de liberarse de la carga— durante las negociaciones que llevaron a la restitución del Sinaí, a lo largo de las décadas siguientes. A raíz de los Acuerdos de Oslo (septiembre de 1993) entre el Estado hebreo y la futura Autoridad Palestina, ampliados con la evacuación de los asentamientos judíos en Gaza, la policía de Yasir Arafat es la encargada del improbable mantenimiento del orden, especialmente en los campos de refugiados, donde vive más de un tercio de la población. La OLP no reconoció la victoria de Hamás en las elecciones de 2006 y fue expulsada *manu militari* de la zona en junio del año siguiente: la franja quedó bajo el control exclusivo del movimiento islamista. Políticamente y a corto plazo, Israel tiene muchos motivos para estar satisfecha con la división de Palestina, que vacía de contenido el «plan de paz árabe» de 2002, que condicionaba esa paz a volver a las fronteras de 1967, así como a la «solución de dos Estados», porque ahora existen tres de hecho. Y al reconocer el callejón sin salida al que conduce tal contradicción, Abu Dabi, Manama, Jartum, Rabat y las demás capitales árabes que seguirán sus pasos decidieron reconocer al Estado judío en el verano y el otoño de 2020, sin pasar por esa cláusula.

Por otra parte, la independencia *de facto* de Gaza erigió a ese casi Estado en el eco por excelencia de la estrategia iraní de la media luna chií. A excepción de los años 2012-2016, durante los cuales la prioridad de Teherán era que sus esbirros masacraran en Siria a los rebeldes suníes sirios, correligionarios de Hamás, la República Islámica proporcionó toda la ayuda financiera y militar necesaria para erigir el enclave costero en una plataforma meridional desde la que poder lanzar misiles contra el Néguev, Judea-Samaria y hasta Tel Aviv. Ocupa una posición simétrica con respecto a la base septentrional establecida en el sur de Líbano bajo los auspicios de Hezbolá, que bombardea Galilea y Haifa. Para Irán, la guerra de guerrillas balística de baja intensidad contra el Estado judío, que se encuentra entre dos frentes, era la mejor manera de presionar a sus enemigos para proteger por anticipado de un ataque su propio territorio. El suministro de armas y municiones a Hamás, cuyos detalles se mantenían en secreto, queda ampliamente difundido en un reportaje emitido el 13 de septiembre de 2020 por el canal catari Al-Jazeera, con el fin de galvanizar la resistencia palestina mostrando su resiliencia militar —con lo que está en abierta contradicción con el Acuerdo de Abraham, que se firma dos días

después en la Casa Blanca—. Destaca en particular un Ismail Haniya demostrando la inanidad del bloqueo israelí del enclave, mientras que a los telespectadores de habla árabe de todo el mundo se les proporciona una gran cantidad de detalles y de imágenes sobre la adquisición y la adaptación de misiles iraníes y rusos, sobre el papel fundamental de Sudán (antes del derrocamiento del dictador filoislamista Omar al-Bashir, durante el levantamiento de 2019) para enviar misiles a través del mar Rojo gracias a redes de contrabandistas tribales en el Sinaí, sobre los cajones sumergidos en el Mediterráneo desde zódiacs provenientes de Líbano o de Egipto, que las corrientes submarinas arrastran después a Gaza, etc.

Injerencia de Catar y contradicción de Israel

El mensaje enviado por el canal satelital catari significa que, más allá de la adversidad y del impacto del Acuerdo de Abraham en la causa palestina, la resistencia militar tiene y tendrá capacidad para hacerle frente [MAPA 14]. A pesar de la valla de alambre de espino que encierra el enclave y de la vigilancia marítima (la frontera egipcia ha mostrado cierta porosidad, debido a los túneles de contrabando y a la corrupción en las filas del Ejército de El Cairo), continuará la persistente guerra de guerrillas balística redoblada por el lanzamiento de cohetes que se ha instituido a lo largo de los años, contrarrestada por una espectacular represión israelí que ha generado a su vez controversia a escala internacional. La economía política de esa confrontación es ineluctablemente beneficiosa para Hamás en última instancia, según sugieren sus turiferarios. Los tiempos fuertes fueron en particular las operaciones «Plomo Fundido», del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009, que causó mil cuatrocientos muertos palestinos y trece israelíes y que fue calificada como «crimen de guerra» en un informe de la ONU; y más adelante la operación «Borde Protector», del 8 de julio al 26 de agosto de 2014, que llevó el enfrentamiento al paroxismo. Esta última operación se lanzó como represalia por el secuestro y asesinato de tres adolescentes judíos a manos de Hamás, e incluía una ofensiva terrestre: el saldo fue de unos mil quinientos muertos palestinos y seis israelíes. Aunque la desproporción entre los respectivos números de víctimas enardeció la movilización antisionista en los campus estadounidenses y europeos, es-

poleada desde 2005 por el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones, Sanciones), Hamás, por su parte, sufrió una caída de popularidad entre la población local, que le recrimina haber desatado con sus provocaciones el rayo devastador del Tzáhal.

Además, el último enfrentamiento mencionado se produjo cuando el patrocinador iraní se había distanciado del movimiento islamista —suní y solidario con los rebeldes sirios de misma obediencia, al que Hezbolá exterminaba desde 2012—. En consecuencia, la sede internacional del buró político de Hamás tuvo que trasladarse de Damasco a Doha a principios de ese año, mientras que en febrero Ismail Haniya hacía una declaración en la mezquita de Al-Azhar de El Cairo «saludando al pueblo sirio que aspira a la libertad, la democracia y la reforma», y la multitud de fieles lo coreaba, en el mes en que los Hermanos Musulmanes egipcios empezaban a ganarle el pulso a la sublevación en el valle del Nilo: «¡Ni Irán ni Hezbolá! ¡Siria islámica! ¡Fuera el carnicero Bashar!». El 23 de octubre de ese año, el entonces soberano catari, el emir Hamad bin Jalifa al-Zani, se convirtió en el primer jefe de Estado árabe en realizar una visita oficial a Gaza. Venía de Egipto —presidido a la sazón, desde que fuera elegido en julio, por el hermano musulmán Mohamed Morsi— y había consagrado su apoyo a Hamás, en detrimento de la OLP de Mahmud Abbas, que gobernaba Cisjordania. El eje hermanista, financiado por el emirato del gas y apoyado por El Cairo islamista, Túnez, controlado por entonces por el partido Ennahda, Trípoli de Libia y Ankara, recuperaba para su causa el movimiento islamista palestino a la vez que la insurrección siria. Pero el derrocamiento de Morsi por una revuelta popular apoyada por el Estado Mayor, al cabo de un año de gobierno delicuescente, y la consiguiente toma del poder por el mariscal Sissi con el apoyo de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, así como la despiadada represión contra los Hermanos, se habían traducido en la salida de El Cairo de esa alianza y en un mayor control de la frontera con la Franja de Gaza. En ese contexto, el secuestro y el posterior asesinato de tres adolescentes israelíes perpetrados por Hamás, seguidos de la violentísima reacción del Estado hebreo con la operación «Borde Protector», en el verano de 2014, debilitaron a la organización; esta no conseguía ya movilizar apoyos regionales significativos, con Teherán y sus aliados guerreando en Siria junto a Ásad, mientras Catar y la Turquía filoislamista, cuyas relaciones con Egipto se habían degradado

considerablemente, habían perdido el acceso privilegiado al enclave costero.

Como consecuencia de esa disminución de sus recursos militares y políticos, Hamás se vio obligado a recurrir a una táctica en la que la victimización predominaba sobre la ofensiva. Así ocurrió durante las protestas contra el traslado de la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, el 14 de mayo de 2018. Las protestas causaron, en la Franja de Gaza, cincuenta y dos muertos entre los jóvenes —la mayoría de ellos sin afiliación al movimiento islamista—, que intentaban acercarse a la línea de demarcación con el Estado hebreo en una simbólica «marcha del retorno», con ocasión del aniversario de su fundación y de la *nakba* ('catástrofe'). El baño de sangre suscitó numerosas reacciones hostiles en todo el mundo, mientras, ante el fuego real, los manifestantes volaban cometas pintadas con la bandera palestina, que pasaron al otro lado de la frontera. Hamás celebra la ignición —fortuita, al parecer— de una de ellas, que desencadenó un incendio cerca de Ascalón; la organización desarrolla luego el hecho y lo sistematiza, convirtiéndolo en un «arma de pobres», en forma de miles de globos inflamables que se lanzan al aire a partir de ese momento: algunos de ellos provocan grandes incendios. El objetivo del movimiento islamista es crear una presión sobre Israel —menos letal y, por lo tanto, menos susceptible de provocar una reacción destructiva que el lanzamiento de misiles— con la intención de obtener una relajación de las medidas de bloqueo y una mayor regularidad de la financiación proveniente de Catar. Financiación que, sin embargo, pasa ya... por el propio Estado judío, en coordinación con el Egipto del mariscal Sissi, aunque en pugna abierta con el emirato del gas, en cuyo aislamiento interviene... al igual que interviene desde junio de 2017 en otro «bloqueo», junto a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

De hecho, en agosto de 2018 se alcanzó un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás auspiciado por el nuevo jefe de los servicios de información egipcios, el general Abbas Kamel, antiguo director del Estado Mayor del raís de El Cairo: se establecía un alto el fuego como contrapartida a que Catar pagara al Estado hebreo la electricidad necesaria en Gaza y financiara los salarios de todos los empleados de Hamás; en diciembre de ese año llegaron para tal fin noventa millones de dólares desde Doha, como parte de una ayuda de ciento cincuenta millones de dólares, escalonada

nada a lo largo de seis meses. Al mismo tiempo, se reabre un punto de paso para las mercancías y se permite, bajo control, un enlace marítimo de cargueros entre Chipre y el enclave costero. Pero las condiciones establecidas por Israel para los pagos —la repatriación de los restos mortales de dos soldados del Tzáhal y la liberación de dos israelíes secuestrados— quedan impugnadas por el movimiento islamista, lo que desencadena nuevas manifestaciones en la primavera siguiente, y permite a los grupos más radicales, en particular la Yihad Islámica, alineada con Teherán, reanudar el lanzamiento de misiles. En junio de 2019, se alcanza un nuevo acuerdo por la misma vía, para dar fluidez a una subvención mensual catari de treinta millones de dólares, a la que se suma el apoyo a la UNRWA (United Nations Relief and Work Agency, que interviene en los campos de refugiados, especialmente para la escolarización de los niños) desde que los Estados Unidos de Donald Trump pusieron fin a su aportación económica a esa organización, en septiembre de 2018. Dado que el sector bancario de Gaza es disfuncional y, por lo tanto, las transacciones se realizan en efectivo, el desconcertante espectáculo de las limusinas negras llenas de maletas de dinero en metálico procedentes de Doha, que viajan cada mes desde el aeropuerto de Tel Aviv a Gaza, escoltadas por el Mosad y con la bendición de El Cairo, despierta la ironía —o la ira— de varios comentaristas. Se acusó por ello a Netanyahu de comprar la paz permitiendo que se estipendie una organización... a la que él también, por otra parte, tacha de terrorista. Menos sorprendente, pero igualmente intrigante, es la coordinación entre los servicios secretos egipcios y el embajador Mohamed al-Emadi, presidente del «Comité catari para la reconstrucción de Gaza», encargado de ejecutar los pagos, mientras El Cairo está en conflicto abierto con Doha. El mariscal Sissi hace de necesidad virtud, intentando mantener una forma de control sobre Hamás, cuya inclinación demasiado exclusiva hacia las filas del eje hermano-chií reforzaría en exceso a la Internacional de los Hermanos Musulmanes... a cuyos miembros persigue con el mayor de los ahíncos en el valle del Nilo, y decenas de miles de ellos se pudren en las cárceles.

Todas esas contradicciones, que parecen desafiar cualquier lógica, se explican por el problema insoluble al que se enfrenta el Estado hebreo en el enclave costero palestino, que se encuentra en una situación permanente de inminente deflagración social. Las alambradas y los bombardeos son

inútiles a medio plazo ante la explosión demográfica, y la integración en el mercado laboral israelí, que se intentó inmediatamente después de los Acuerdos de Oslo de 1993, supuso demasiados riesgos de seguridad como para seguir adelante. La segunda Intifada, desde septiembre de 2000 hasta principios de 2005, terminó cuando se construyeron muros y se levantaron alambradas, que permitieron frenar la infiltración de terroristas en Israel y los atentados en su territorio, pero también impidieron cualquier flujo de mano de obra. El estancamiento de la política del Estado judío en Gaza es la otra cara de la moneda del éxito alcanzado, después de haber roto la unidad palestina y de haber arruinado su economía, así como sus aspiraciones nacionales, al reactivar un proceso de paz y de reconocimiento mutuo con los árabes lejanos, los que viven en las petromonarquías del Golfo, en detrimento de los árabes cercanos, los palestinos. Llama la atención que los dos rivales que el bloqueo de Catar pone en liza, Doha y Abu Dabi, se encuentren como socios respectivos de Gaza, rodeada por el Estado judío, y de este último... Más allá del paralelismo de las situaciones entre la franja costera y el emirato del gas, ambos asediados, este último, cuyo fondo soberano gestiona más de trescientos mil millones de dólares, se ha impuesto como actor indispensable en la vida política israelí gracias a su influencia financiera sobre Hamás, convirtiéndose momentáneamente en el baluarte de solvencia del territorio pauperizado y superpoblado, frente a la inevitable explosión de lo que es una auténtica bomba de relojería.

*El Estado judío, entre el callejón sin salida palestino
y la ancha avenida árabe*

El 1 de septiembre de 2020, al recibir oficialmente al embajador catari Mohamed al-Emadi y agradecerle «su compromiso y sus intensos esfuerzos para detener la escalada y calmar la situación», el presidente israelí Reuven Rivlin refrendó el papel desempeñado por él y por el Estado árabe del Golfo al que representa en el corazón mismo de la vida política del Estado judío. En este caso, el emirato del gas actúa de la misma manera que su fondo soberano QIA (Qatar Investment Authority) cuando entra a participar en el capital de una empresa internacional que cotiza en bolsa:

se comporta como un accionista silencioso hasta que exige un representante en el consejo de supervisión, para influir en la estrategia —tal es, por ejemplo, la decisión que notifica al grupo mediático francés Lagardère ese mismo mes—. Su rival Abu Dabi se adentra por un camino similar cuando, después del reconocimiento diplomático del Acuerdo de Abraham, expresa su voluntad de hacerse con participaciones de elevado valor político en empresas israelíes, con el añadido de la oportunidad financiera. Además del interés mostrado por el operador portuario emiratí DP World en los puertos de Eilat y Haifa, un inversor cercano a la familia reinante, Abu Dhabi Development and Investment Group, ya presente en el capital de los equipos de fútbol británicos, hace una oferta a mediados de septiembre al club Beitar Jerusalem, a pesar del notorio racismo antiárabe de sus hinchas, para convencerlo de que «el pueblo de los Emiratos busca la paz y la coexistencia». Como signo de los tiempos, el 30 de septiembre el club al-Nasr de Dubái compró al futbolista árabe-israelí Dia Saba, uno de los mejores goleadores del Estado hebreo: se trata del primer ciudadano israelí que juega en un campo de los Emiratos... y es un signo de las nuevas oportunidades que se abren también para los árabes en el Estado judío.

La formalización de relaciones diplomáticas y el desarrollo de los lazos económicos entre los Emiratos e Israel se producen en un momento en que la situación política interior israelí pasa por una doble crisis, provocada por la perspectiva de investigaciones policiales contra Netanyahu, acusado de corrupción y apoyado en la Knéset por una mayoría aleatoria, y provocada asimismo por la incapacidad del Gobierno para hacer frente a la pandemia de covid-19, que está obligando a poner el país en confinamiento la víspera del año nuevo judío (*Rosh Hashaná*), el 18 de septiembre, durante las tres semanas siguientes, que corresponden a las principales fechas del calendario hebreo. Con ciento cincuenta mil casos y más de dos mil fallecidos en una población de nueve millones de habitantes, y con los principales focos de infección entre los judíos ultraortodoxos y los árabes-israelíes, dos poblaciones que comparten unos ingresos generales bajos y un hábitat de mucha promiscuidad, se ha acusado al primer ministro de acelerar la reapertura del país una vez pasado el primer confinamiento, para poner en marcha cuanto antes la economía —a la manera de Donald Trump en Estados Unidos—, sacrificando la salud de sus conciudadanos. Pero, a raíz de las protestas de la base más ortodoxa de su electorado, se

permitió durante el confinamiento que las sinagogas funcionaran en el Yom Kipur, el 27 y el 28 de septiembre (con la condición de que los rezos se celebraran al aire libre), mientras que las manifestaciones de los oponentes al primer ministro seguían estando estrictamente prohibidas.

El arbitraje a favor de los religiosos y en contra de la sociedad civil le permite a Netanyahu esperar alcanzar una mayoría parlamentaria si se celebran elecciones en 2021, impidiendo que el centro-izquierda (demasiado explícitamente laico como para esperar beneficiarse del apoyo de los jaredíes) controle la Knéset, salvo si obtiene los votos de los diputados árabes, perspectiva que, según la derecha israelí, pondría en peligro el carácter judío del Estado. Los representantes árabes llegaban por primera vez a quince (incluida una mujer con *hiyab*) de los ciento veinte escaños, en los comicios de marzo de 2020 —un resultado calificado de histórico—; sus elegidos iniciaron conversaciones (inacabadas) con Benny Gantz (treinta y tres escaños), rival de centro-izquierda de «Bibi». Este, que alcanzó treinta y seis diputados con su partido, el Likud, necesita a los parlamentarios ortodoxos para gobernar, pero la feroz oposición a estos últimos le impide reunir los pocos votos necesarios para una mayoría parlamentaria de los sionistas laicos, por muy de derechas que sean, como Avigdor Lieberman, originario de la antigua Unión Soviética y cuya irreligiosidad de antaño ha conservado. La tambaleante coalición a la que han conducido esas limitaciones —un acuerdo de «rotación» para el cargo de primer ministro entre Netanyahu y Gantz— hace que la situación política sea especialmente inestable [MAPA 14].

No deja de ser paradójico, por otra parte, que las poblaciones más prolíficas y relegadas y donde la covid-19 ejerce los mayores estragos, los ortodoxos y los árabes, tengan la llave de la constitución de los gobiernos. En la realidad de los hechos, mientras la participación de los árabes en el poder sigue siendo a la postre un tabú, Netanyahu disfruta del apoyo de los ultrarreligiosos, que se muestran indiferentes ante las acusaciones de corrupción contra él, pero que exigen una y otra vez concesiones para «rejudaizar» la legislación y privilegios exorbitantes para su comunidad... Así, Netanyahu encomendó durante lustros el Ministerio de Sanidad a los ultraortodoxos, que dilapidaron sus recursos, mientras que, bajo presión y cuando las fronteras de Israel estuvieron cerradas durante el confinamiento de primavera, se permitió que aterrizaran en el Estado judío chárteres

enteros de jaredíes neoyorquinos que huían de la pandemia en Brooklyn y otros lugares, aunque muchos de ellos venían ya contagiados. Estos agravaron la situación en los guetos, en los que viven aislados y en los que la detección y el tratamiento requieren la autorización expresa de una multitud de rabinos sectarios, para quienes la ira divina explica un azote que solo la oración y el arrepentimiento de los judíos por sus pecados pueden doblegar... Tal comportamiento es idéntico al que puede encontrarse en los círculos salafíes, incluso en los suburbios franceses del islam, durante el confinamiento de la primavera de 2020. Sin embargo, la dependencia de Netanyahu de esos votantes, que depositan en las urnas el voto recomendado por su mentor religioso, le impide llevar a cabo cualquier política de salud pública en ese medio, que a su vez contamina por el aire al resto de la sociedad israelí, por muy laica que sea. La situación repercute en la recuperación económica, a la vez que la perspectiva de despidos masivos como consecuencia del confinamiento de otoño, en un país cuya economía ha quedado ampliamente desregulada durante los once años dominados por «Bibi», representa un riesgo social de primer orden. Queda por ver si el éxito del Acuerdo de Abraham le permitirá mantenerse en el poder gracias a un flujo de inversiones de las petromonarquías del Golfo... o si las dificultades internas lo obligarán a dejarles el sitio a sus rivales, para pasar de la tribuna de la Knéset a la sala de audiencias y responder a las acusaciones de la justicia. En contraste con su indulgencia para con el núcleo ultraortodoxo de su electorado, el primer ministro utilizó la covid-19 como pretexto para que la Knéset prohibiera el 30 de septiembre todas las reuniones de más de veinte personas y los desplazamientos a más de un kilómetro del domicilio, mientras miles de manifestantes se concentraban frente a su residencia oficial en la calle Balfour de Jerusalén para exigir su dimisión y su comparecencia ante los tribunales.

El sobrepeso egipcio

En el año 2020 Egipto pasa el umbral de los cien millones de habitantes. Una demografía desenfrenada —solo se necesitaron doscientos dieciséis días en 2019 para ganar un millón de recién nacidos, a un ritmo de aproximadamente un nacimiento cada quince segundos— que está devoran-

do las tierras agrícolas de la delgada franja del Nilo y del delta. Genera a su vez una urbanización anárquica en los *ashawiyat*, enormes suburbios informales en los que la mayoría de los edificios se construyen con cualquier cosa, de noche e ilegalmente, congestionando las infraestructuras. El resultado es un desempleo masivo, mientras que un tercio de los egipcios vive con no más de 1,5 euros al día y el 60 % tiene menos de 30 años. El presidente Sissi denunció en 2017 el exceso de población como la amenaza principal para Egipto, junto con el terrorismo, y su Gobierno toma medidas represivas espectaculares para demoler las construcciones ilícitas, con gran despliegue de reportajes en la televisión; pero el remedio sintomático no tiene efecto alguno sobre las causas del problema: en un país desprovisto de leyes sociales y en el que la supervivencia diaria está garantizada por el empleo «en negro», la inmensa masa de pobres percibe la prolificidad como una póliza de seguro: a muchos de los niños los ponen a trabajar desde su más temprana edad y aportan más dinero del que cuestan a sus progenitores. Esa «contratransición demográfica», como denominan los demógrafos Youssef Courbage y Françoise de Bel-Air a una tendencia que, en especial desde las Primaveraes Árabes de 2011, ha visto cómo aumentaba la tasa de fecundidad en las orillas del Nilo de 3 a 3,5 hijos por mujer (mientras que en Arabia Saudí se desplomó de 7 a 2,5 a lo largo de las tres últimas décadas), resulta tanto más sorprendente cuanto que dicha tendencia va en aumento entre las mujeres con estudios, cuando se admite como norma que la educación la baja automáticamente. Además de que la formación no garantiza ningún acceso al empleo en el Egipto de hoy y de que, por lo tanto, resulta invalidado el modelo de inversión del ciclo, el régimen instaurado por el mariscal Sissi tras la despiadada represión de los Hermanos Musulmanes ya desde el verano de 2013 sustituía a estos últimos, con el fin de engranar el tejido social en las zonas populares y compensar la deficiencia del Estado, por movimientos salafistas políticamente inofensivos para él pero que consideran la fecundidad exuberante como un don imprescriptible de Alá, así como un deber religioso para que los musulmanes dominen el planeta [MAPAS 4 y 5].

Con todo y con eso, la agenda social y cultural de los salafistas, e incluso de la venerable institución del islam egipcio, la mezquita-universidad de Al-Azhar, aunque sirva para mantener la paz social mediante la aplica-

ción de estrictas normas religiosas, bloquea las veleidades del poder de modernizar autoritariamente la cultura popular para que la mano de obra egipcia sea competitiva en el mercado mundial —a imitación de los intentos del príncipe heredero Mohamed bin Salmán en la orilla opuesta del mar Rojo—. En 2020 aumentan consecuentemente las tensiones entre la institución militar de la que surgió el jefe del Estado y los actores religiosos. Los salafistas, cuyo principal partido político, An-Nur ('la luz'), proporcionaba el respaldo islámico para la erradicación de los Hermanos Musulmanes, pero que, como contrapartida, perseguía a los coptos e imponía costumbres retrógradas en los territorios que quedaban bajo su control, comprobaron que disminuía el número de sus representantes, hasta quedar reducidos a cero en las elecciones al Senado del verano de 2020 (donde la abstención fue masiva): el jefe de Estado es quien nombrará, eligiéndolos de entre ellos, a dos miembros de la cámara alta. Si el confinamiento debido a la covid-19 impidió el funcionamiento de las mezquitas, ejes principales del proselitismo y de la presión propagandística del salafismo en el día a día, y pudo reducir los resultados, la voluntad de la administración de disminuir su representación parlamentaria desempeñó un papel decisivo en el proceso. Del mismo modo, las declaraciones públicas del mariscal Sissi sobre la emancipación de la mujer y su deseo de acabar con el repudio oral —según la ley islámica, basta con que el marido pronuncie el término *talaq* ('divorcio') tres veces seguidas para que el repudio tenga valor— le valen una feroz resistencia por parte del jeque de Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, a pesar de ser de educación francesa y de haber sido considerado en su día «abierto».

El mencionado jeque, al igual que muchas instancias islámicas de todo el mundo, protesta solemnemente contra la reedición de las caricaturas del Profeta en la portada de *Charlie Hebdo*, a principios de septiembre, bajo el título «Y todo por esto», con motivo de la apertura de juicio por los atentados yihadistas de enero de 2015, en París. «Ofender a nuestro Profeta no forma parte de la libertad de expresión, sino que [es] más bien una incitación al odio, a la violencia, y una voluntad de liberarse de todos los valores humanos y civilizacionales». Y añade —piedra contra el tejado de Emmanuel Macron, que había declarado durante su visita al Líbano, el 1 de septiembre: «Existe en Francia una libertad de blasfemar que va unida a la libertad de conciencia»— que «justificar ese acto basándose en la salva-

guarda de la libertad de expresión es entender mal la diferencia que existe entre el derecho humano a la libertad y el crimen contra la humanidad en nombre de la protección de las libertades». Antes de ser censurados, algunos titulares comparan desfavorablemente el hecho de que el Gobierno egipcio no se pronunciara contra el semanario en la primera campaña contra las caricaturas publicadas en un diario danés en 2005, campaña a cuya cabeza se había puesto el Egipto oficial de entonces. En ellos se da a entender que, para el mariscal Sissi, prevalece la alianza con el presidente francés en el Mediterráneo frente a las amenazas de Erdogan... y que no se atreve a oponerse. Nada impedirá que el jeque al-Tayeb vuelva a atacar con virulencia a Emmanuel Macron después del discurso que el presidente francés pronunció el 2 de octubre en Les Mureaux, localidad de la región de Yvelines donde se encuentra la comisaría en la que uno de sus agentes y su esposa fueron apuñalados por un yihadista, el 13 de junio de 2016, discurso en el que aboga por una estrategia política y jurídica contra el separatismo islamista en suelo francés.

Además, el aparato clandestino de los Hermanos Musulmanes en Egipto resulta fuertemente afectado por la detención, el 28 de agosto de 2020, en un escondite de El Cairo, de su guía supremo interino, Mahmud Ezzat, que se encargaba tanto de la planificación de las acciones armadas como de los embriones de las negociaciones con el régimen. Ese éxito en materia de seguridad es también un golpe político que debilita a los Hermanos, privados de líderes por el encarcelamiento, el exilio e incluso la muerte. Además de Mohamed Morsi, que murió en pleno juicio el 17 de junio de 2019, uno de los principales líderes que podían asegurar el relevo, el médico Isam al-Aryan, destacado activista desde su época universitaria en tiempos de Sadat, cuando lideraba al-Gamaa al-Islamiyya en los campus, también murió detenido, el 13 de agosto de 2020. El callejón sin salida en el que parecen encontrarse los Hermanos Musulmanes, después de siete años de una represión aún más dura que la de Nasser, ha dado lugar, por lo demás, a una escisión en las filas de sus miembros jóvenes en torno a la «Corriente Independiente» (*al-Tayyar al-Mustaqil*), que publicó sus primeros comunicados en agosto de 2020 en los principales países de la diáspora: Turquía, Catar y Sudán. Sus autores incriminan a los líderes tradicionales por su incapacidad para encontrar una solución al problema de los detenidos —los Hermanos constituyen la gran mayoría de los se-

senta mil presos políticos, según la ONG Human Rights Watch, encarcelados en Egipto desde la destitución de Mohamed Morsi, en julio de 2013, además de decenas de miles de exiliados—. Esos jóvenes expresaron su voluntad de establecer una base de negociaciones con el poder, que se ha negado a aceptarlas hasta la fecha, sobre todo porque la perspectiva de posibles ampliaciones puede constituir una palanca para el equilibrio de fuerzas con Catar y Turquía en el marco del enfrentamiento entre los miembros del Acuerdo de Abraham y el triple acuerdo hermano-chif. Pero a tal apertura también se opone el aparato de los Hermanos, estructurado en torno a una jerarquía muy apremiante y una cultura de la obediencia hostil a toda «corriente» que pudiera expresarse como tal. La situación crítica del islam político egipcio les impide, además, sumarse a las protestas episódicas contra la represión, como la del 20 de septiembre de 2020, en la que se celebra el aniversario de una protesta similar un año antes, que se saldó con más de cuatro mil cuatrocientos detenciones —un tercio de los detenidos siguen en prisión hoy en día—.

Durante la segunda mitad del siglo xx, Egipto, que a lo largo del período colonial había disfrutado de las mejores universidades de Oriente Próximo, junto con Líbano, exportó, especialmente a las petromonarquías de la península Arábiga y a otros Estados productores de hidrocarburos, un gran número de directivos para la modernización en lengua árabe de esos países, así como mucha mano de obra no cualificada. El descalabro del nivel de la enseñanza superior, ahogada por la burocracia de Nasser y sus sucesores, aniquilada por la censura y desbordada por la masa demográfica de estudiantes, provocó el cierre de las válvulas de escape regionales, donde los expatriados europeos o asiáticos ocuparon el lugar de los hijos del Nilo, asegurando dirigentes de mejor calidad y en inglés, con el fin de optimizar los desafíos de la globalización en Abu Dabi, Dubái, Doha y actualmente hasta en Riad. Ese desgaste, a su vez, aumentó el desempleo entre los licenciados, acentuó el distanciamiento con respecto al poder y sus instituciones y alimentó el voto por la alternativa islámica de los Hermanos Musulmanes, que ya eran mayoría en casi todos los colegios profesionales (médicos, ingenieros, farmacéuticos, abogados, periodistas, etc.) bajo Mubarak, cuando tuvieron lugar las elecciones legislativas y luego presidenciales de 2011-2012, inmediatamente posteriores a las Primaveras Árabes. La derelicción del poder bajo la presidencia de Moha-

med Morsi, entre los veranos de 2012 y 2013, mezclando incompetencia y «hermanización» del Estado, seguida de la revuelta popular alentada por la jerarquía militar, condujo a la destitución del presidente y a su encarcelamiento, así como al de decenas de miles de miembros y simpatizantes de los Hermanos, y luego de quienquiera que se opusiera. Eso convirtió Egipto, bajo el mandato del mariscal Sissi, en uno de los regímenes más represivos de Oriente Próximo, a imagen del de Erdogan (si se excluye Siria, en situación de guerra civil). El número de presos políticos (estimado en sesenta mil a orillas del Nilo, por cuarenta mil en Turquía) es comparable, dado el tamaño de sus respectivas poblaciones, pero la calidad de los prisioneros es muy otra: los islamistas y sus partidarios están en los negocios en Ankara y en la cárcel en El Cairo. Mientras los hermanos egipcios exiliados bajo Nasser encontraron refugio en los Estados de la península Arábiga, donde muchos hicieron fortuna y donde solo Catar y, en cierta medida, Kuwait les están hoy abiertos, es el sucesor del antiguo Imperio Otomano el que ofrece asilo y apoyo a la mayoría de ellos, gracias a cuya masa de población se ahondan y cultivan los vínculos entre turcos y árabes, que forman el espectro internacional del *soft power* islamista en el que se proyecta Erdogan.

El rais egipcio se beneficia, como sus predecesores, de una renta político-financiera procedente del extranjero, cuya renovación periódica y prolongación perpetua son lo único que ha impedido que el país se hunda desde que es efectivamente independiente, con el golpe de Estado de los «oficiales libres», en 1952. Tal situación se basa en una especie de chantaje según el cual el colapso de Egipto tendría consecuencias fatales para la política global o regional del acreedor. Nasser (1954-1970) había presionado a la Unión Soviética en nombre de la expansión del comunismo en Oriente Medio (lo que precipitó al país a la ruina), de modo que Jruschov financia la Alta Presa de Asuán, que proporciona electricidad a todo el valle del Nilo —a costa de sumergir la mayor parte de Nubia—, y presta una ayuda militar masiva, que duraría hasta la guerra de octubre de 1973, conocida como la guerra del «Yom Kipur» o del «Ramadán», desatada contra Israel por su sucesor Sadat (1970-1981). Este no dudará en desmontar esa alianza, para obtener de Jimmy Carter y de los siguientes ocupantes de la Casa Blanca la ayuda exterior civil y militar estadounidense más importante del mundo, con el fin de firmar la paz con el Estado

hebreo en Camp David y perpetuarla. La prolongación de esa renta al régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) —el presidente depuesto murió el 25 de febrero de 2020 en el Hospital de las Fuerzas Armadas— se vio facilitada tras los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, cuando El Cairo se presentó como campeón de la «guerra contra el terror» de George W. Bush, lo que aumentó la longevidad de un régimen ya agotado y corrupto. Esto último es una de las causas del levantamiento iniciado en enero de 2011 en la plaza Tahrir, sobre todo, desde que el presidente Obama, no queriendo prolongar más un apoyo que beneficia al autócrata, pero apenas a Estados Unidos, lo conmina a abandonar el poder, en un sonado discurso, el 4 de febrero. El presidente Hermano Musulmán, Mohamed Morsi (julio de 2012-julio de 2013) —sin renunciar a la ayuda estadounidense, puesto que el inquilino demócrata de la Casa Blanca ve con buenos ojos a la burguesía piadosa, como proveedora de una estabilidad económica basada en la fe—, obtiene una subvención añadida, proveniente del emirato del gas de Catar, estimada en cuatro mil millones de dólares y destinada a convertir El Cairo en el eje político-demográfico de la hegemonía islamista en la región. El derrocamiento de Morsi lo facilita una financiación estimada en tres veces esa cantidad y que procede principalmente de Abu Dabi y Riad —que tienen el objetivo contrario de eliminar a los Hermanos Musulmanes, erradicando su raíz egipcia—. A esa suma hay que añadir la compra de sofisticado equipamiento militar proveniente de Francia —dos buques de asalto Mistral, veintidós cazabombarderos Rafale, así como también fragatas italianas y alemanas— cuyo destino principal ya no es luchar contra el Estado hebreo, sino contrarrestar el triple acuerdo hermano-chií en su expresión mediterránea, es decir, la expansión turca [MAPA 1].

El Cairo en el Acuerdo de Abraham

Los recursos militares provenientes del Golfo, que se inscriben en la red de alianzas del Acuerdo de Abraham, le permiten contar con un Ejército de medio millón de soldados, mucho más numeroso que los Ejércitos de las petromonarquías —cuya combatividad apenas convenció, por otra parte, cuando se enfrentaron al Irak de Sadam Husein en los años noven-

ta—. Pero el objetivo del mariscal Sissi es también defender los intereses propios de Egipto en el Mediterráneo oriental, en particular los yacimientos de gas submarinos que se encuentran en las zonas sedimentarias alimentadas por los depósitos de aluvión del Nilo y situados frente a su delta, frente a las costas de Damietta, donde se instalaron costosas plantas de licuefacción. En 2015, el grupo italiano ENI descubrió el yacimiento de Zohr, con una capacidad que estaría en ochocientos cincuenta mil millones de metros cúbicos, lo que le permite a Egipto tener volumen exportador hasta 2025. Los yacimientos de gas de origen nilótico se extienden hasta las aguas territoriales de Chipre, Israel... e incluyen los de la Franja de Gaza —actualmente no desarrollables, pero cuya eventual fertilidad cambiaría quizá la oscura suerte del enclave costero palestino—. Por otra parte, el Estado hebreo, cuyo yacimiento «Leviatán» fue identificado ya en 2010, proporciona la mayor parte de la producción local de electricidad, abastece a Jordania y alimenta la planta de licuefacción de Damietta [MAPA 14]. Antes del desplome de los precios del gas, provocado por la sobreproducción de hidrocarburos de esquisto estadounidenses, se había previsto construir el gasoducto submarino EastMed, que terminaría en Italia, pasando por el Peloponeso, para permitirle a la Unión Europea reducir su dependencia de Rusia. Lo elevado de las inversiones no haría viable el proyecto a precios de mercado, ni las insuficientes cantidades de gas probadas de momento, por lo que la construcción del gasoducto se pospuso *sine die* [MAPA 1].

Pero la situación alimentó el expansionismo turco en el Mediterráneo oriental y sus reivindicaciones de ampliación de sus aguas territoriales y zonas económicas exclusivas —las de Turquía, según están, no contienen ningún yacimiento (excepto en el mar Negro)—. Eso le permitiría cobrar un peaje al EastMed si se construyera, o incluso bloquear sus flujos para no afectar a los del TurkStream. El 8 de enero de 2020, los dos socios de los Acuerdos de Astaná, Vladímir Putin y Tayyip Erdogan, abrieron solemnemente las compuertas: el gasoducto rodea Ucrania por el sur, pasando por debajo del mar Negro a lo largo de 930 kilómetros, entre el puerto de Anapa, no lejos de Sochi, en Crimea, y la localidad de Kiyikoy, en las afueras de Estambul, desde donde se dirige a Austria vía Tracia y luego a Bulgaria. De paso, Turquía se abastece de energía, de la que su subsuelo sigue desprovisto y que es vital para alimentar su bulimia manufacturera: en

2019, las importaciones de energía ascendieron a cuarenta y un mil millones de dólares —de los que Rusia se lleva la parte del león— [MAPA 2].

En represalia por el activismo de Ankara en el Mediterráneo oriental, El Cairo transformó el Foro del Gas del Mediterráneo oriental, que se reunió inicialmente el 14 de enero de 2019 y que agrupaba, junto a Egipto, a Israel, Jordania, la Autoridad Palestina, Chipre, Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos, en una organización intergubernamental cuya carta fue firmada el 22 de septiembre de 2020, y que constituye un *lobby* dedicado a luchar contra las «violaciones» de los derechos económicos de los firmantes sobre sus espacios marítimos, un organismo diseñado para aumentar el aislamiento turco, y cuyos miembros están asociados al Acuerdo de Abraham o están cerca.

El control del Nilo

Si las apuestas por el gas en Oriente Medio se encuentran en el centro de las alianzas y rupturas entre el eje hermano-chií, por un lado, y la entente abrahámica, por otro, al instaurar a Egipto como Estado de primera línea de frente en su vertiente mediterránea, el acceso a un segundo recurso escaso sitúa ese país, que Heródoto describía como «don del Nilo», en una posición avanzada en otro campo de batalla: el agua dulce. Ya no es en la desembocadura del río donde se desarrolla el conflicto, sino en sus fuentes. Etiopía, un gigante del Cuerno de África, comparable por su población de cien millones de habitantes, y que comparte una cultura ancestral gracias a la ruta comercial que une el océano Índico con el Mediterráneo por las orillas del río, a contracorriente del cual surgió el cristianismo en su versión copta, inició en julio de 2020 el llenado de su «Gran Presa del Renacimiento» [mapa 17]. La presa, con un embalse de ochenta mil millones de metros cúbicos situado en el Nilo Azul, cerca de la frontera sudanesa, está destinada a regular las inundaciones y a abastecer de electricidad el país y los países aledaños, gracias a la mayor central eléctrica del continente negro. El Cairo y, en menor medida, Jartum, atrapados entre sus dos enormes colindantes río arriba y río abajo, temen que el llenado y la retención de agua reduzcan significativamente la hidrografía del cauce inferior del río y que eso sea objeto de negociaciones en posición de debi-

lidad con Adís Abeba. El ejemplo de Mesopotamia, que había visto a Irak considerablemente perjudicada por las presas construidas por Turquía y Siria en los ríos Tigris y Éufrates, no tranquiliza en absoluto a Egipto. Las crecientes tensiones entre las dos capitales dieron lugar al alineamiento de alianzas en torno a ellas, con Ankara asumiendo, por una vez, la causa de un país predominantemente cristiano contra otro musulmán (mientras que Erdogan había arremetido contra el mariscal Sissi por aliarse contra él con la descreída Grecia) y Abu Dabi apoyando a El Cairo.

Los primeros desarrollos afectaron a las bases militares en el Cuerno de África: Yibuti, que mantiene un serio litigio con Abu Dabi (véase más arriba, págs. 70-71) y, por lo tanto, con su aliado egipcio, se puso del lado del enemigo etíope de estos y se alió con Turquía, que construyó una imponente mezquita en la antigua colonia francesa, sobre el modelo de la mezquita de Anatolia, llevando a cabo un ardiente proselitismo, al tiempo que ofrecía los vuelos más baratos a Europa a través de Turkish Airlines. Lo mismo ocurre en Somalia, un país de fuertes lazos con Catar, donde Turquía estableció una importante base cerca de la capital, Mogadiscio, ya en 2017. Ambos Estados se abstuvieron en la Liga Árabe el 10 de septiembre, durante la moción hostil contra Ankara presentada por El Cairo págs. 100-101). Ese mismo año de 2017, Abu Dabi había construido una base en Berbera, en el autoproclamado estado de Somalilandia, secesionista de Somalia; el proyecto quedó abandonado en marzo de 2020, pero una delegación militar egipcia se trasladó allí el 10 de agosto, en plena crisis por la Presa del Renacimiento, y la Prensa se hizo eco de una posible sustitución por El Cairo. Asimismo, la base emiratí de Asab, en la costa eritrea, instalada desde 2015, desempeñó un importante papel de apoyo a la intervención armada en Yemen, y El Cairo se acercó a Asmara —que se opone a Adís Abeba— con la misma intención.

Mientras la diplomacia del mariscal Sissi moviliza todas las antiguas redes africanas que había tejido el nasserismo —en respuesta a la presa etíope, Egipto anuncia el 4 de septiembre la construcción de otra en Tanzania, uno de los Estados de la cuenca del río, y posteriormente, el 19 de septiembre, la República Democrática del Congo anuncia su apoyo a El Cairo en la disputa con Adís Abeba—, Sudán es objeto de un conflicto que, al fluir de las aguas del Nilo, regó a su vez las alianzas y las rupturas de la región. El país del general Omar al-Bashir, cuyo primer mentor fue

el intelectual próximo a los Hermanos Musulmanes Hasan al-Turabi, había sido incluido por Washington en la lista de «Estados que apoyan el terrorismo»; en efecto, había dado asilo a terroristas de diversa índole, desde Ilich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos (de 1991 a 1994), hasta Osama bin Laden (de 1992 a 1996). El régimen militar-islamista, transmisor de los movimientos yihadistas activos en el Cuerno de África, bombardeado por misiles de crucero estadounidenses a mediados de agosto de 1998 en represalia por los atentados de Al Qaeda contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 de ese mes, hacía también las veces de zona de tránsito de los misiles iraníes destinados a Hamás en la Franja de Gaza, de lo que el movimiento se jactaba en un reportaje del canal Al-Jazeera emitido el 13 de septiembre de 2020. Recibe asimismo la visita del presidente Erdogan en diciembre de 2017, en el marco del plan de Turquía para afianzarse estratégicamente en África, reflejado en un acuerdo para comprar la isla de Suakin, en el mar Rojo, y restaurar su puerto, antiguo punto de paso para los peregrinos africanos de camino a La Meca, que floreció durante el Imperio Otomano. La isla permitió a los observadores anticipar el establecimiento de una base militar, cuya primera manifestación fue la escala de la fragata Gojka Ada, de 4.100 toneladas, en Puerto Sudán, del 9 al 11 de marzo de 2019, destinada a «reforzar la seguridad y la protección» y a mostrar un apoyo al general al-Bashir, objeto de una violenta protesta que conduciría un mes más tarde, el 11 de abril, a la destitución del dictador, después de treinta años en el poder. Ya hemos observado anteriormente (pág. 43), en la primera parte de este libro, lo mucho que deploró la caída del régimen el foro islamista Al Sharq, con sede en Estambul.

De hecho, el Gobierno de transición de Jartum, surgido de la revuelta, se acercó a Arabia Saudí y, especialmente, a Abu Dabi, dispuestos uno y otro a invertir miles de millones de dólares en ese país agrícola, que puede contribuir a la seguridad alimentaria de ambos en ciclo corto [MAPA 6]. Y son ya los Emiratos los que planean, con su empresa portuaria DP World, instalarse en Puerto Sudán y Suakin, un lugar estratégico frente a La Meca y en la ruta de los petroleros entre el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez. Para concluir la inclusión de la «tierra de los negros» en el Acuerdo de Abraham y sacarla definitivamente del eje hermano-chií, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo visitó la capital el 25 de

agosto de 2020, a bordo del «primer vuelo oficial entre Tel Aviv y Jartum», para comprobar la disposición de sus anfitriones a reconocer al Estado judío, después de que el 3 de febrero Netanyahu se reuniera en la vecina Uganda con el jefe del Consejo Soberano sudanés, el general Abdel Fattah al-Burhan, bajo los auspicios emiratíes. Vinieron seguidamente declaraciones contradictorias, de las que se desprendía que, de haber relaciones con Israel, estarían condicionadas al levantamiento de la inclusión del país en la lista de Estados que apoyan el terrorismo —si bien es decisión que depende del Congreso y no de un decreto del presidente Trump, porque se impuso una compensación económica a Sudán, al que se consideró cómplice de los atentados contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar es-Salam, preludio del 11 de septiembre de 2001—. Se llevó finalmente a cabo el 23 de octubre [MAPA 1]: Jartum, muy probablemente gracias a la financiación de Abu Dabi, reunió los trescientos treinta y cinco millones de dólares que se debían a las familias de las víctimas. Donald Trump, ávido de un efecto de anuncio a once días de las elecciones presidenciales, convoca a la prensa a la Casa Blanca para que sea testigo de una conferencia telefónica entre Benyamin Netanyahu y los dos hombres fuertes del régimen de transición, el general Burhan y el primer ministro civil Abdalá Hamdok, que se comprometían a un acercamiento entre sus respectivos Estados. Aunque sin especificar exactamente los términos —el acontecimiento se precipita por el apremiante calendario político estadounidense—, el primer ministro israelí (también deseoso de ganar puntos frente a sus competidores en Jerusalén) hace saber que se prevé una cooperación agrícola y comercial en un futuro próximo y deja entrever que los solicitantes de asilo sudaneses que lograron entrar en el Estado hebreo, unos veinte mil, podrían ser repatriados... Como agradecimiento a los Emiratos Árabes Unidos por los servicios prestados para allanar la negociación, Netanyahu hace saber durante el proceso que su Gobierno ya no se opone a la venta de armas estadounidenses a la petromonarquía, refiriéndose así a los bombarderos furtivos F-35 que hasta ese momento solo el Estado hebreo tiene en la región. Hamás, por su parte, denuncia en un virulento comunicado «un pecado político»: más allá del giro de 180° de un Estado que servía de plataforma de distribución de misiles iraníes al movimiento islamista en la Franja de Gaza, el nombre de la capital sudanesa desempeñaba un papel simbólico fundador en el conflicto árabe-is-

raelí. Nueve Estados habían firmado la «Resolución de Jartum» el 1 de septiembre de 1967, inmediatamente después de la derrota en la guerra de los Seis Días, estableciendo los tres «noes» al Estado judío: ni paz, ni reconocimiento, ni negociación. El cambio de opinión de Sudán lo arrima ya muy cerca de Egipto, primer Estado árabe que había iniciado la paz durante el viaje de Sadat a Jerusalén, el 19 de noviembre de 1977.

El mariscal Sissi, firmemente involucrado en el Acuerdo de Abraham, trata de maximizar los beneficios para mejorar su posicionamiento regional frente a sus rivales o socios, tanto en el este, con Israel y los territorios palestinos, como en el sur, en torno a las aguas del Nilo, y en el norte, con las nuevas cuestiones vinculadas a la explotación y exportación del gas del Mediterráneo oriental. Pero existe un conflicto que cristaliza todas las crisis de Oriente Medio y las extiende a África del Norte y a Europa: el de Libia, país con el que Egipto comparte una frontera de 1.115 kilómetros, trazada en línea recta a través del desierto. Ese territorio representa un concentrado de problemas: de los hidrocarburos a las migraciones, del terrorismo yihadista a las rivalidades entre Tripolitana, donde Turquía y Catar, con la indulgencia estadounidense, apoyan a un poder procedente de los Hermanos Musulmanes, y Cirenaica, donde Abu Dabi y El Cairo apoyan a los rivales con el respaldo de Moscú, mientras que Europa está dividida entre los intereses contrapuestos de Italia y Francia y, sobre el terreno, los dos bandos luchan entre sí gracias a mercenarios sirios reclutados entre los insurgentes islamistas y los milicianos pro-Ásad desmovilizados. Están presentes todos los ingredientes para que se dé el vector de la desestabilización de África del Norte, y tras ella la de Europa, en paralelo al contencioso que Ankara cultiva contra Atenas en el Mediterráneo.